

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Paraguay

Enero 2012

Editada en julio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1078

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Paraguay***



Integrantes Quintín Riquelme
Justino Romero
Elsy Vera

Fuentes diario Abc Color y Diario Ultima Hora.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Paraguay

Cronología del conflicto social

Enero de 2012

Lunes 2

Funcionarios de la municipalidad de Ñemby, Central, denuncian que son despedidos por no apoyar la precandidatura a diputado del intendente, Héctor Lesme, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien pugnaría por una banca en el congreso por el movimiento del senador liberal Efraín Alegre. Librada Arrúa, quien se desempeñaba como responsable de la Consejería de la Niñez y la Adolescencia (CODENI), denuncia que prescindieron de sus servicios por no trabajar por la precandidatura del jefe comunal y por manifestar su apoyo a Blas Lanzoni, del movimiento liderado por el presidente actual del partido, Blas Llano. Lanzoni estaría pugnando por la gobernación de central. Según la afectada, ante la falta de asideros legales para su despido, el intendente la acusó de robar muebles del albergue Mitã Róga III, del barrio Villa Anita. La denunció ante la fiscalía y ordenó un sumario en su contra. “Yo sólo retiré mis cosas, como roperos, mesa, televisor y lavarropas. Tengo los recibos de compra, la municipalidad no compró nada para el albergue. Sólo me quiere ensuciar –Héctor Lesme– para justificar el despido que es meramente político”, reitera Arrúa. Otros 26 funcionarios contratados también quedan fuera por el mismo motivo, añade. Por su parte, Lesme acusa a Arrúa de apoderarse de bienes de la comuna. Confirma que denunció ante la fiscalía local a Arrúa y que ordenó que sea sumariada. Niega que se trate de una persecución política. Respecto a los otros 26 funcionarios, indica que fenecieron sus contratos.

Miércoles 4

Unas 180 personas ingresan a una propiedad de mil 800 hectáreas, ocupando unas 750 hectáreas, propiedad conocida como “Estancia Entre Ríos”, del suizo Jacob Srtebel, en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú. Los campesinos alegan la existencia de excedente fiscal e indican que no saldrán del lugar a no ser que el gobierno adquiera otras tierras cercanas y de buena calidad. Tomás Barboza, capataz del establecimiento, señala que, pese a los procedimientos legales interpuestos, siguen ocupando el lugar y actualmente están asentados a escasos metros de la casa principal.

Jueves 5

Un grupo de empleados de la municipalidad de Fernando de la Mora, Central, se manifiesta porque la institución no renueva sus contratos. El 31 de diciembre pasado, el intendente, Édgar Quintana, decidió no renovar el contrato de 300 funcionarios de la comuna, lo que provocó que un grupo de los desvinculados tomara medidas extremas de protesta frente al municipio. Quintana afirma que propuso a los trabajadores renovar contrato para el mes de febrero, pero la oferta no fue aceptada por un grupo de personas que son las que se manifiestan a las afueras del edificio fernandino. En ese sentido, unas treinta personas decidieron posar semidesnudas, atándose a cruces de madera; algunos, realizar huelga de hambre, acostarse sobre vidrios rotos o dentro de un cajón fúnebre,

dando una imagen diferente al municipio, que llama la atención de las personas que pasaban por el lugar. Finalmente, en horas de la tarde, luego de una negociación con asesores del jefe comunal, la mayoría de los funcionarios acepta su vinculación desde febrero. Los funcionarios permanecen durante horas hasta obtener el contrato firmado por el intendente.

Viernes 6

Pobladores de la ciudad de Limpio, Central, realizan una manifestación y cierres de ruta a la altura del kilómetro 22, en Paso Damián, de la Ruta 3 General Elizardo Aquino. La manifestación se realiza por la constante falta de agua. Los pobladores cierran el paso por la Ruta 3 y aseguran que la medida continuará hasta que alguien dé una solución al problema. Los responsables de la distribución de agua potable en Limpio son una junta de saneamiento y una aguatería privada. Los pobladores, molestos, señalan que realizan los pagos correspondientes por el servicio y que, sin embargo, durante días enteros no cuentan con agua.

Un grupo de 50 indígenas –en su mayoría mujeres y niños–, es desalojado de la Plaza Uruguaya, Asunción, luego de ocuparla por más de seis meses. Los nativos reclaman la compra de más de 7 mil hectáreas de tierra en el distrito de Unión, departamento de San Pedro. El indígena Antolín Piris se muestra indignado por la forma en que fueron desalojados los miembros de su comunidad de la plaza y señala que hasta ahora no sabe lo que pasará con ellos, ya que ninguna autoridad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) se les acercó. El comisario principal, Luis Rojas, anuncia que unos 60 efectivos de la policía nacional permanecerán en la Plaza Uruguaya para resguardar la seguridad de los ciudadanos y el enrejado puesto para preservar los trabajos de la Comuna. Mientras, la Plaza Defensores del Chaco es ocupada por un grupo indígena que reclama víveres. Luego de varias horas, los indígenas son trasladados a la Primera División de Infantería R. I. 14.

“¡No a las rejas!”. Es el grito de más de 300 ciudadanos, tales como dirigentes obreros, campesinos y de pueblos originarios contra el vallado de la Plaza Uruguaya de Asunción. La concentración de ciudadanos se desarrolla bajo un fuerte resguardo policial. Los manifestantes plantean solicitar al presidente de la República, Fernando Lugo, la paralización de las obras financiadas con fondos de la Comisión Bicentenario. Los mismos reivindican el derecho de las personas de gozar de los espacios públicos con libertad de acceso. En el intento por impedir el enrejado de la plaza, algunos activistas son detenidos por la policía nacional y liberados horas después. El dirigente campesino Belarmino Balbuena destaca la gravedad que representa el vallado de plazas que históricamente han sido el símbolo de lucha del Paraguay. “Estamos supuestamente en tiempos de cambio, pero la realidad hoy nos indigna”, protesta el líder campesino. Los activistas explican que ellos no obstruyen la construcción del vallado, sino que “la construcción boicotea el uso ciudadano de la plaza”.

Lunes 9

Un grupo de personas de la localidad de Toro Pampa, perteneciente al distrito de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, denuncia el atropello de las tierras donde viven hace más de 20 años. Acusan a la ganadera brasileña Dirce Sánchez Zamora de que sus empleados derribaron sus alambrados y realizaron desmontes y tajamares en la zona. El lugar se denomina Yatebu y está a unos 15 kilómetros de esta localidad. Los ocupantes de las tierras en conflicto se dedican a la ganadería en

pequeña escala. Presentaron una denuncia en la comisaría local en la que se hace constar que, en fecha 9 de diciembre de 2010, personal de la estancia Niño Jesús realizó desmontes en la zona en conflicto. Los ocupantes están conscientes de que no poseen ningún documento de las 980 hectáreas de tierras en las que viven. Sin embargo, alegan que no se les puede tirar de un día para otro, ya que llevan toda una vida en el lugar. Según los denunciante, estas tierras antiguamente pertenecían a un ciudadano alemán que nunca les ocasionó problema alguno. El brasileño Edimar da Fonseca, gerente del establecimiento ganadero Niño Jesús, desmiente la versión de los denunciante. Alega que no se puede hablar de atropello, cuando las tierras pertenecen legítimamente a Sánchez Zamora.

Martes 10

Unos 120 campesinos sin tierras ubicados en las fincas 80 y 240 de la colonia San Carlos, distrito de Mariscal López, Caaguazú, impiden el paso de las máquinas de los colonos, imposibilitando el cultivo de las tierras. Dichas fincas abarcan más de dos mil 400 hectáreas, dentro de las que se encuentra el asentamiento San Carlos. El 15 de agosto de 2008 nuevos contingentes de sin tierras ocuparon el asentamiento a fin de recuperar la soberanía territorial. Según el presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), Hermes Aquino, el comisario Luis Vera es cómplice de los carperos y es enviado por el ministro del Interior, Carlos Filizzola, para proteger a los ocupantes. El abogado de los productores, Mario Vega, señala que “el presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra [INDERT] pretende apoderarse de esas tierras, que costarían más de 8 millones de dólares en su totalidad”. Asimismo, indica que están hartos de la forma en que manipulan la justicia.

Más de 40 indígenas, que fueron desalojados de la Plaza Uruguay de Asunción hace 15 días, vuelven para reclamar la compra de siete mil hectáreas en el distrito de Unión, departamento de San Pedro. Los nativos tienen la intención de acampar en el lugar, pero efectivos de la policía nacional y cascos azules les impiden el acceso al espacio público. Los indígenas no se oponen a la medida y aceptan ser trasladados a la División de Infantería R.I. 14 a bordo de tres patrulleras. Panta Piris, líder avá guaraní, señala que hasta este día continuarían llegando otros grupos de indígenas, que totalizarían 500 nativos, provenientes de los departamentos de Canindeyú y Caaguazú. El comisario principal Luis Carlos Rojas anuncia que la policía nacional resguardará la plaza las 24 horas, para evitar que se obstruya el enrejado del lugar e impedir una nueva ocupación de nativos. El líder indígena Mario Saucedo asegura que los nativos que llegan desde distintos puntos del país a Asunción no tienen la intención de ocupar nuevamente la plaza.

Miércoles 11

Unos diez puestos de venta ambulante son desalojados de la vereda del Centro de Emergencias Médicas (CEM) de la ciudad de Asunción, a pedido del nosocomio, por representar un peligro para la salud pública. Según la municipalidad asuncena, los puestos de venta violan la Ordenanza 267/05, sobre manipulación de alimentos a menos de 150 metros de hospitales, y la Ordenanza 16/92, que regula la venta en la vía pública. Los vendedores amenazan con reinstalar sus puestos. Algunos inclusive se colocan nuevamente en las aceras en la mañana comercializando todo tipo de productos. Los comerciantes ambulantes reclaman que no hubo notificación de parte de la comuna capitalina sobre el desalojo, por lo que no tuvieron la opción de retirar sus cosas del lugar. “Hace un mes vino a hablar un funcionario de la municipalidad para censarnos, pero no nos dijo nada de

desalojo”, señala Mercedes Benítez, una de las comerciantes. Wilson Rojas, director de Control de Ventas en la Vía Pública, desmiente el hecho y señala que se avisó a las personas con un mes de antelación. Agrega que seguirán con el desalojo en caso de que los vendedores insistan con la ocupación del espacio público. Finalmente, los vendedores serán reubicados tras el acuerdo al que arribaron estos con los funcionarios municipales.

Campesinos organizados en tres grupos, que se instalaron hace dos meses en la propiedad fraccionada en varias fincas perteneciente al empresario Blas N. Riquelme, están negociando su salida pacífica del inmueble. Los ocupantes se instalan al costado de la Ruta X “Las Residentas”, para evitar un enfrentamiento con la policía enviada para el desalojo. La propiedad está ubicada en la colonia Yvyrapyta, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. El primer grupo, integrado por más de 200 familias, pretende adjudicarse unas dos mil hectáreas. El líder del segundo grupo, Sindulfo Espínola, mantiene fuerte puja con el primer grupo, por lo que se instaló en la misma zona. A su vez, el tercer grupo, con 12 familias, busca quedarse con 98 hectáreas de una parte de la propiedad en cuestión. Mientras se mantienen las negociaciones para el desalojo pasivo, la fiscal Ninfa Aguilar dispuso la detención de Agripino González, uno de los líderes de un grupo de ocupantes.

Jueves 12

La acuciante falta de agua moviliza a los usuarios de la Junta de Saneamiento Potrero Po’i, de la ciudad de Caacupé, Cordillera, ubicada a la altura del kilómetro 50 de la Ruta II Mariscal Estigarribia. Unas 300 personas cierran en forma intermitente la vía para exigir la provisión del vital líquido, la intervención de la aguatera, la destitución de su presidente, Calixto Gómez, y la convocatoria urgente a asamblea. Después de manifestarse sobre la vía internacional, los afectados se instalan en la entrada al local de la Junta de Saneamiento, para evitar el ingreso de funcionarios y directivos. El presidente de la aguatera, Calixto Gómez, explica que la demanda del vital líquido en el verano es demasiado alta y la producción no da abasto. Añade que los abonados hacen uso irracional del agua y asegura que no renunciará.

Una treintena de vecinos del barrio Limpia Concepción, de la compañía Cabañas, Cordillera, viene reclamando a la Junta de Saneamiento local la provisión regular de agua. La denuncia es que el líquido vital no les llega hasta las viviendas. Se manifiestan frente a la oficina de la Junta de Saneamiento, donde a gritos pidieron que el agua llegue a las viviendas ubicadas en las zonas elevadas de Cabañas. Simeona Colman de Rolón asegura que desde hace más de un mes no están recibiendo como antes el servicio. “Nos envían en forma intermitente, en el horario de 2 a 5 de la madrugada y los usuarios que no tengan tambores, baldes o bidones se ven desesperados, porque no pueden acopiar el agua para usarla durante el día”, indica. El presidente de la Junta de Saneamiento, profesor Isaías Domínguez, explica que “no puede alcanzar el nivel deseado debido al uso exagerado del agua. El intenso calor reinante hace que la gente utilice demasiado el líquido”, asegura.

Sábado 14

Un grupo de colonos brasileños mantienen un enfrentamiento con los carperos de Ñacunday, donde los militares de la Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEOMIL) colocan el último

mojón, por pedido del presidente del INDERT, Marciano Barreto. El incidente ocurre a unos 40 kilómetros aproximadamente, al sur de la colonia Paranambú, en el distrito de Iruña, departamento de Alto Paraná. Los carperos son rodeados por los colonos, quienes nuevamente cuestionan a los efectivos militares y a la policía nacional por el hecho de llegar al lugar sin previo aviso e instalar el mojón acompañado de terceras personas, según relata Clesir Bambi, morador de la colonia Mbarete. La propiedad se encuentra afectada dentro de las 162 mil hectáreas que aparecen en un título de propiedad del Estado de 1892, investigado por el INDERT. Por su parte, los carperos denuncian que son rodeados por los brasiguayos y perseguidos por unos cinco kilómetros, hasta que, al alcanzar una barrera instalada en el silo del grupo Favero, los agentes de la Comisaría de Ñacunday y sedes policiales aledañas interponen sus patrulleras para realizar una barrera y dividir a ambos grupos.

Un total de 120 familias de carperos, nucleados en la comisión vecinal Tape Yke, pretenden ocupar unas 400 hectáreas de tierras, en el lugar denominado Chacore'i, ubicado a la altura del kilómetro 47 de la supercarretera de Itaipú, distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. El lugar está a unos 70 kilómetros aproximadamente de Ciudad del Este, al norte de Alto Paraná. Los campesinos levantan sus carpas en la cabecera de los inmuebles actualmente poseídos por Erico Carvalho Lemos y una firma denominada Agro Integración S.A., quienes inician acciones judiciales para evitar la ocupación. Frente a las fincas, donde se instalan las precarias carpas, está ubicado el asentamiento denominado Tembiaporã. Los carperos afirman que una vez cosechada la soja, ya no permitirán que los brasiguayos cultiven las tierras, ya que ellos no son sujetos de la *reforma agraria*. No obstante, recibieron una notificación judicial de prohibición de innovar, en un juicio iniciado por los actuales propietarios. Los ocupantes provienen de diferentes puntos del país, como Hernandarias, San Pedro, Mariscal López y San Lorenzo de Caaguazú, además de Choré, también del departamento de San Pedro. Los campesinos aducen que esas tierras, donde actualmente existe un extenso sojal, fueron entregadas por el INDERT a excombatientes de la Guerra del Chaco, pero que sólo una familia permanece allí. Los carperos culpan al titular del INDERT, Marciano Barreto, de que la institución no tome ninguna medida para recuperar las tierras mal habidas.

Miembros de la Federación de Trabajadores de la Vía Pública se manifiestan en las inmediaciones de las avenidas Monseñor Rodríguez y Piribebuy ante un probable desalojo de unos 30 mesiteros del sector de Ciudad del Este, Alto Paraná. “Para nosotros es llamativo que la orden judicial haya sido firmada en diciembre del año pasado y que recién ahora quieran ejecutarla. Estamos siendo asesorados por profesionales del Derecho y vamos a defender nuestros puestos de trabajo”, expresa Alfredo Meza. Por su parte, el asesor jurídico de la Comuna esteña, Braulio Duarte, señala que la orden judicial avasalla la autonomía municipal, ya que le corresponde a esa institución intervenir. Mientras tanto, la federación anuncia que estarán en sesión permanente debido a que habría una decena de órdenes de desalojo similares.

Lunes 16

Cerca de 150 nativos, que en su mayoría son mujeres y niños, marchan desde de la Primera División de Infantería hasta la sede del Ministerio Público para presentar una denuncia contra el presidente del INDI, Oscar Ayala. Tres patrulleras con policías custodian la marcha de los nativos, que en su mayoría eran los desalojados de la Plaza Uruguaya hace 12 días. “Roipota ore yvy. Yvy'yre ijetu'u” –Queremos nuestra tierra. Vivir sin tierra es complicado–, corean los niños con palos en mano frente a un contingente de cascos azules que custodian el local de la Fiscalía General, donde es recibido por el fiscal adjunto Carlos Arregui. Los nativos denuncian a Ayala por la

comisión del hecho punible traición a las partes, porque actúa como demandante y demandado en el proceso de ejecución de tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuando él era parte de la ONG Tierra Viva. Continuando con sus reclamos, los indígenas marchan sobre las calles Chile y Palma con la intención de llegar al Palacio de los López, pero un contingente de antimotines los detiene. “Lugo prometió tierras a los indígenas en su campaña electoral. Ya estamos cansados que nos usen en sus discursos políticos. Ahora ya sabemos a quién no votar en las elecciones”, señala Miguel Toro. La marcha siguió hasta la Plaza Uruguay en donde, según Toro, tenían la intención de descansar y tomar tereré. El espacio público estaba fuertemente custodiado por agentes de la Policía Nacional y antimotines, quienes no permiten llegar a los nativos.

Martes 17

Unas 20 familias afectadas por la represa de Yacyretá se instalan frente a viviendas vacías de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el barrio San Pedro de Encarnación, departamento de Itapúa. Exigen que se les entreguen en carácter de reposición por haber sido desalojados de sus antiguos barrios. Afirman que no saldrán del lugar hasta que las autoridades de la EBY les den una respuesta. Según Irma González, una de las afectadas, en el año 2009, y como una forma de superar la necesidad que tenía la EBY de liberar estos barrios para construir la costanera, se acordó que saldrían del lugar, a cambio de que la entidad les pague la suma de mil dólares en concepto de alquiler de otra vivienda. En un plazo máximo de 12 meses serían reubicadas en sus respectivas viviendas definitivas. “Pasaron dos años y hasta ahora la EBY no cumple y nosotros ya no podemos vivir pagando alquileres. Hace poco, a 29 de los 58 afectados que estamos en esta misma situación les reubicaron en este barrio. A nosotros nos dicen que todavía tenemos que esperar, que no están nuestras viviendas, por eso decidimos venir a ocupar estas casas que están vacías”, señala.

Un grupo de pobladores se manifiesta frente a la casa parroquial de Piribebuy, Cordillera, para exigir al párroco local, Pbro. Miguel Ángel Cabello, que revea su postura sobre la celebración en honor a San Blas, “protector de la garganta”. Indican que el religioso decidió que ningún sacerdote oficie misa durante el novenario en el oratorio particular de este distrito. Según denuncian, el padre Cabello también prohibió que la imagen, venerada desde hace años en una capilla familiar del barrio San Blas, sea llevada al santuario nacional Dulce Nombre de Jesús para la misa del 3 de febrero, como es tradicional. Por su lado, el obispo de Caacupé, Claudio Giménez, ya en diciembre había solicitado a la familia la entrega de esa imagen para ser venerada en la iglesia Dulce Nombre de Jesús. Sin embargo, la familia López-Acosta rechazó ambos pedidos. Los integrantes aducen que es una reliquia familiar y que siempre estuvo expuesta al público.

Continúa el conflicto en la Junta de Saneamiento del barrio Pa’i Ñu de la ciudad de Ñemby, departamento Central. Los usuarios están en vigilia permanente frente al local, exigiendo la renuncia del presidente de dicha aguatera, Rafael Morán. Denuncian que no cuentan con el vital líquido desde hace más de cuatro meses, por lo que exigen un llamado a asamblea. La síndica de la entidad, Cecilia Rodríguez, informa que Morán soporta un proceso fiscal por presunta lesión de confianza, por un faltante superior a 115 millones de guaraníes. También menciona la apertura de una cuenta bancaria a nombre del tesorero, Diego Zoilán, y la compra de tres motocicletas a nombre del vicepresidente Sergio Ferreira. Morán indica que la falta de agua se superó con las lluvias recientes y que todo se trata de una “cuestión política”.

Un grupo de pobladores de la localidad de Puerto Casado, Alto Paraguay, dedicados a la elaboración de carbón y postes de quebracho, denuncian que son perseguidos por los directivos de la empresa Bosques Verdes del Chaco S.A. Indican que, por otro lado, varios obreros de la firma fueron despedidos sin causa justificada. Bernardo Gómez, uno de los afectados, afirma que constantemente son hostigados por el Ing. Enrique Cadogan, principal responsable de la carbonería. Según el denunciante, los directivos de la empresa Victoria S.A. –dueños de la mayoría de las tierras de la zona– les otorgaron el permiso para elaborar postes de quebracho dentro de sus propiedades. La carbonería de Bosques Verdes del Chaco S.A. también se encuentra dentro del dominio de Victoria S.A. y desde hace un tiempo los responsables de la empresa les prohíben ingresar al lugar y elaborar los postes. Gómez también acusa al Ing. Enrique Cadogan de despedir sin causa justificada a varios obreros de la carbonería. Varios de ellos no percibieron la totalidad de sus haberes, asegura. Por su parte, el ingeniero indica que no se adeuda a ningún obrero y asegura que los despidos se adecúan a las leyes laborales. Añade que varias personas tienen el permiso para fabricar postes, no así el grupo de Bernardo Gómez, ya que están acusados de delito ambiental.

Miércoles 18

Galenos afiliados al Sindicato Nacional de Médicos del Ministerio de Salud (SINAMED) están de brazos caídos en los diferentes hospitales públicos del país, esto ante el incumplimiento del acuerdo firmado desde setiembre del año pasado, cuando presentaron renunciaciones masivas. En caso de que los pedidos no tengan solución en una tripartita que se hará en el Ministerio del Trabajo, irán automáticamente a la huelga general el próximo 23 del presente mes. “Hemos participado de catorce reuniones y los acuerdos firmados no se cumplieron”, afirma el presidente de dicho gremio, el Dr. Lilio Irala. El galeno explica que desde el punto de vista legal no tienen ningún contrato vinculante con el Ministerio de Salud, pues los contratos vencieron todos el 31 de diciembre del año pasado, “lo que significa que estamos trabajando *ad honórem* para la comunidad”, asegura el médico. Indica en ese sentido que no tienen carga horaria estipulada y que no se sabe cuándo van a cobrar sus salarios. Añade que actualmente existen unos 400 médicos que no han percibido sus salarios, aguinaldo y plus desde el año pasado. La versión del Ministerio de Salud es que no cuentan con ese dinero debido a que no hay transferencia para ello desde el Ministerio de Hacienda.

Campesinos cierran una calle en la colonia San Carlos del distrito de Mariscal López, Caaguazú, para evitar que maquinarias al mando de productores ingresen a las tierras a ser cultivadas. Luego de cinco horas el juez de Paz, Aldo Barrios, ordena utilizar la fuerza para despejar la calle. El jefe de Orden y Seguridad, Crio. Roberto Zotelo, quien también interviene en el conflicto, ordena el retiro de las maquinarias, pero los campesinos arrojan piedras y otros objetos. Mientras, los efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) responden con balines de goma. Los proyectiles hacen retroceder a los campesinos y son detenidos cinco de ellos, entre quienes el líder, Francisco Peralta, y el concejal municipal de Caaguazú, Juan López, acusados de incentivar a los campesinos a atacar a los efectivos policiales. El representante legal de los productores, Mario Vega, responsabiliza al ministro del Interior, Carlos Filizzola, por el conflicto sin fin en Mariscal López. Con palos, piedras y machetes en mano, las mujeres encabezan el cierre de la calle y evitan que las maquinarias de los productores pasaran.

Unas 200 personas de Piribebuy se manifiestan en la plazoleta del santuario de la Virgen de Caacupé, Cordillera, con la intención de dialogar con el obispo, Mons. Claudio Giménez. Exigen continuar con la tradición de celebrar el novenario a San Blas en su oratorio particular, situado en el

barrio del mismo nombre de Piribebuy. Monseñor Giménez está de vacaciones y en su ausencia los piribebuienses son recibidos por el cura rector del santuario, Pbro. Modesto Martínez. El religioso explica que según la postura asumida por la Iglesia, los sacerdotes que oficien misa en la capilla particular podrían ser excomulgados. Asegura, sin embargo, que no pretenden cortar la tradición de celebrar el día de San Blas. Afirmar que las misas se realizarán en el santuario Dulce Nombre de Jesús y que están invitados todos los feligreses con sus santos.

Jueves 19

Ex empleados de la Granja Maehara denuncian que fueron despedidos 13 empleados de manera injustificada por los empresarios. La empresa, dedicada a la producción de huevos, está ubicada en la ciudad de Itá, departamento Central. Los propietarios son los japoneses Shinso y Víctor Maehara. Según relatan, se originó un conflicto obrero-patronal cuando un grupo de 27 empleados decidió formar un sindicato. El objetivo de la agremiación era defender los derechos garantizados en la misma Constitución Nacional, explican. Sin embargo, fueron despedidos por los propietarios de la granja. De los funcionarios que formaron el sindicato, fueron despedidos 13, pero cinco de ellos aceptaron, por necesidad, firmar “una mísera liquidación”. Debido a los trabajos pesados que realizaba, Fidelino Lugo adquirió una hernia, por lo que pidió permiso para su tratamiento médico. Le dieron dos veces y la tercera le dijeron que tendría que trabajar y aguantarse, según relata el mismo afectado. “Ellos creen que los paraguayos somos todos esclavos suyos, que pueden hacer lo que quieren. Les vamos a demostrar que no es así”, dice Víctor Ferreira, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A).

Carperos y colonos protagonizan en Iruña fuertes discusiones en torno al trabajo de amojonamiento que vienen realizando los efectivos militares de la DISERGEOMIL, acompañados, precisamente, por los campesinos acampados frente a la colonia Paranambú, en Ñacunday, departamento Alto Paraná. Además del trabajo de amojonamiento, los colonos cuestionan que los militares estén acompañados por los carperos. Los militares pretenden ubicar unas 162 mil hectáreas de tierras en la zona del Ñacunday, distrito ubicado al sur del Alto Paraná, que correspondían a yerbales y parques nacionales hacia finales del siglo XIX, según los antecedentes. En el sector existen unas 35 comisiones vecinales de carperos esperando que el Estado les dé las tierras. Tanto Tranquilo Favero como sus vecinos aseguran que poseen títulos de propiedad por la compra de una vasta extensión de tierras ubicadas en el departamento. El campamento de los carperos, liderados por el dirigente Victoriano López, está ubicado en el distrito de Ñacunday. Los efectivos de la DISERGEOMIL vuelven a colocar un mojón de hormigón en una propiedad de 43 hectáreas, perteneciente a José del Rosario Leiva, quien nuevamente desentierra la señal colocada, porque no existe una orden judicial para el trabajo de los militares. Las labores prosiguen a pesar de que los productores advierten que ya no permitirán que los militares y carperos ingresen a sus tierras, para colocar los mojones, debido a que aseguran tener títulos que avalan sus derechos. La jefatura de Policía del Alto Paraná envía al GEO para evitar más incidentes.

Viernes 20

Diez funcionarios del Departamento de Zoonosis de la Región Sanitaria de Itapúa inician una huelga en reclamo por la falta de pago de sus respectivos salarios. Según los datos, se les adeuda por seis meses y el aguinaldo del 2011. Estas personas están bajo un convenio firmado entre el

Ministerio de Salud Pública y la EBY, cuyo director había manifestado que ya realizó el desembolso correspondiente al Consejo Regional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud. Sin embargo, hasta el momento no hay noticias sobre el pago a los afectados. Los empleados de zoonosis se presentan en la oficina instalada en el predio del Hospital Regional de Encarnación, pero no realizan ninguna actividad. Ellos son los encargados de realizar los trabajos de monitoreo y erradicación de enfermedades como la rabia canina, *leishmaniasis* y hantavirus, entre otras. Los afectados por la falta de pago de sus salarios manifiestan que irán intensificando la medida de fuerza.

Sábado 21

Mediante una orden judicial firmada por el juez de primera instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del 2º turno de Luque, Enrique Sanabria, el presidente de la Junta de Saneamiento de Pa’i Ñu de la ciudad de Ñemby, Central, Rafael Morán, logra desalojar a los usuarios que se encontraban apostados frente al acceso principal de la aguatera. El operativo es encabezado por el jefe de la subcomisaría sexta, de Barcequillo, Félix Sosa, que, según la denuncia de los usuarios, actúa con prepotencia y no permite el ingreso de una escribana pública, esto según la síndica de la entidad, Cecilia Rodríguez. La dirigente indica que sólo se exige transparencia en la administración de Morán y que este se separe del cargo mientras dure el proceso judicial que soporta a raíz de una denuncia de supuesta lesión de confianza. Los usuarios califican de inepto a Morán, debido a que desde que asumió el cargo, en noviembre de 2010, los problemas de la falta de agua se agudizaron en la zona. Indican que ya no bloquearán el acceso principal, pero que permanecerán en el predio de la entidad para exigir el buen funcionamiento del ente y la solución definitiva de la falta de agua. Por su lado, Morán es categórico en afirmar que no renunciará al cargo. Dice que todo se trata de una persecución política.

Un productor de la zona de Par Inves de Iruña, Alto Paraná, es golpeado en el rostro con un machete, por parte de un grupo de carperos que va a realizar, en compañía de militares, amojonamiento de propiedades. Se trata de Diego Grutka, de 23 años de edad, quien se encontraba a bordo de su vehículo cuando es interceptado supuestamente por los sin tierras y recibe un golpe en el rostro con la cara del machete, por lo que es derivado al hospital de Santa Rita, Alto Paraná, de donde se retira posteriormente.

Campesinos sin tierra apostados frente al inmueble de la estancia Tres Hermanos, propiedad de Luis Mario Saldívar, en la localidad de Pacurí, a 40km del casco urbano de Concepción, exigen una mensura judicial porque sostienen que existen excedentes. Cerca de 200 personas ingresan a la propiedad, pero al día siguiente salen cuando llega un contingente policial de cascos azules, ya que el dueño obtiene un recurso judicial preventivo. Los sin tierra acampan frente al inmueble y manifiestan que allí permanecerán para iniciar el proceso de mensura judicial, porque tienen la información de que el inmueble de cinco mil 800 hectáreas tiene un excedente de aproximadamente dos mil hectáreas. Fredy Cartamán, uno de los dirigentes sin tierra, indica que decidieron solicitar las tierras de Saldívar, porque hay una gran necesidad de espacio para trabajar. “Tenemos información de que hay excedentes, y por eso queremos que se compruebe a través de una mensura judicial”, indica. Agrega que ya hay 250 personas censadas de 17 comunidades rurales y que persistirán en la lucha hasta lograr la anhelada tierra. Los campesinos llegan desde Pacurí, Boquerón, Bonete, San José, Reconstrucción, Tadeo, Kurusu Ñu, San Marcos, Loreto, Costa Pucú, San Luis, Aquidabán y Fátima. Por su parte, la representante de la Defensoría Pública, Rosa Rojas,

indica que acompaña a los campesinos para mediar y que, en ese contexto, ya conversó con el dueño, el cual le manifestó que no existe ningún excedente fiscal. Agrega que estará con los campesinos para garantizar la seguridad y mediar cualquier conflicto que pueda darse ante la presencia policial. El inmueble es custodiado actualmente por efectivos de la Policía Nacional, que rondan en dos patrulleras.

Lunes 23

El SINAMED inicia una huelga en distintos centros asistenciales del país. La medida de fuerza es en reclamo de la falta de pago de sueldos, aguinaldos y un plus correspondiente al año pasado, que se había prometido efectivizar en diciembre, según detalla el Dr. Lilio Irala, secretario general. Los profesionales también reclaman a la cartera sanitaria la falta de un contrato colectivo que estipule el nuevo grado de vinculación y la nueva carga horaria, expresan. Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS) aclara que el gremio que llevará adelante la medida de fuerza no es parte integrante de la federación. Esta medida de fuerza se realiza luego de que volviera a fracasar una reunión tripartita entre el gremio y las autoridades del Viceministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). La ministra de Salud, Esperanza Martínez, señala que los salarios que aún no fueron pagados corresponden a médicos que no estaban contemplados en el presupuesto de la cartera sanitaria. Así también, señala que la institución priorizó pagos atrasados a otros funcionarios. Indica que si bien considera justos los reclamos de los médicos que van a la huelga, asegura que no puede cumplir con sus exigencias. Al contrario de lo que aseguran los miembros de SINAMED, que reclaman “voluntad política”, Martínez recalca que son impedimentos burocráticos los que frenan el pago de sueldos.

Cerca de un centenar de precarias carpas se hallan esparcidas a ambos lados de la carretera de tierra que va a Mayor Otaño, a unos 70 kilómetros al sur de Ciudad del Este, Alto Paraná, a la entrada de la propiedad del empresario sojero brasileño Tranquilo Favero. “Aquí ya estamos cansados de promesas y mentiras, y el pueblo está decidido a entrar otra vez en la propiedad. Se intentó hacer el amojonamiento y la mensura para conocer la verdadera situación de las tierras, pero los brasileños no dejaron, cerraron las rutas con sus tractores, sacaron sus armas y nos amenazaron, mientras los militares se quedaban quietos, sin intervenir. Y ahora dicen que nosotros fuimos los violentos. Nosotros no tenemos armas, sólo garrotes para nuestra seguridad”, sostiene el dirigente Aurelio Benítez. “Nosotros sólo queremos que se recupere la tierra mal habida que está en manos de los brasileños, que se recupere la soberanía en esta parte de la frontera, y que los paraguayos tengamos un pedazo de tierra en donde vivir y trabajar”, asegura.

Martes 24

“Roipota solución, ndaha'ei ñembotavy” –Queremos solución y no engaños– es el cántico que se escucha en el microcentro, durante la marcha que realizan los indígenas por Asunción en reclamo de las compras de tierras en Unión, San Pedro. Más de 120 nativos, en su mayoría jóvenes y niños, salen del cuartel R.I. 14, acompañados por la Policía Nacional, con destino al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La intención es conocer por qué el INDI cuestiona la tasación realizada sobre las siete mil 800 hectáreas en Unión. Mario Saucedo, líder ava guaraní, afirma que no entienden por qué el presidente del INDI, Óscar Ayala, sostiene que las tierras no sirven y desacredita la valuación realizada por el MOPC, cuya entrada custodian los cascos azules mientras

un grupo de nativos es recibido por el jefe de Gabinete de Obras Públicas, Mario Sanabria, quien promete que los indígenas tendrían todas las respuestas. Posteriormente, van hasta la sede del Ministerio Público para pedir que se atienda la denuncia que realizaron contra el titular del INDI, Óscar Ayala. Según la denuncia –por “traición a la parte”–, Ayala está como demandante y demandado en el proceso de ejecución de tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entabladas contra el Estado paraguayo, cuando él era parte de la ONG Tierra Viva.

En el Hospital Regional de Encarnación, Itapúa, la huelga impulsada por los médicos para pedir reivindicaciones para el sector, según las estimaciones de los organizadores, llega al 90% de acatamiento. Alrededor de 70 médicos están sin firmar sus contratos en la institución, lo que representa a más del 80% del plantel de profesionales. “Creemos que se agotaron todas las instancias para reclamar, por eso estamos con la huelga. Lastimosamente se debe llegar a esta instancia para reclamar el cumplimiento de las reivindicaciones para el sector”, afirma la doctora Mónica Viet.

Miércoles 25

Camioneros agremiados a diferentes sindicatos del Alto Paraná inician una huelga indefinida para exigir el pago del flete de 350 guaraníes por tonelada/kilómetro establecido por el presidente de la República, pero que en la realidad no se cumple por parte de los agroexportadores. Más de 200 camiones cargados de granos y madera permanecen parados en el tramo entre el km 28 hasta el km 30 de la Ruta VII Dr. Francia, en el distrito de Minga Guazú, Alto Paraná. En tanto, otro grupo se instala en Hernandarias, Alto Paraná, en la entrada del Refugio Ecológico Tatí Yupí. Por el momento, fijaron un paro de 22 días que podría continuar si no hay respuesta de parte de las empresas. Los afectados aseguran que los responsables de la agroexportadora *Cargill*, de Ciudad del Este, solo quieren pagarles de 200 a 280 guaraníes por Tn/km, monto que no alcanza para cubrir los gastos de combustible, teniendo en cuenta la reciente suba del gasoil. Los choferes manifiestan que no van a descargar hasta que Cargill les pague el monto que piden.

El campamento de los carperos de Ñacunday, Alto Paraná, instalados frente a la propiedad del empresario sojero brasileño Tranquilo Favero, a 70 kilómetros al Sur de Ciudad del Este, Alto Paraná, amanece cercado por varios contingentes de policías. A los efectivos del GEO, que montan guardia en una caseta instalada en la entrada sur del asentamiento ahora denominado Doce Apóstoles, se agrega un grupo mayor de efectivos policiales, que se ubica en la entrada norte, en el cruce de Paranambú y Mayor Otaño, cubriendo los dos puntos de acceso al lugar. “Hemos aumentado considerablemente el número de efectivos policiales en la región, cumpliendo instrucciones del señor ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía Nacional, comisario Pablino Rojas, para reforzar la seguridad y prever cualquier situación de desborde o enfrentamiento”, explica el jefe de Orden Público de la Policía de Alto Paraná, comisario Óscar Ferreira, quien dirige la acciones en Ñacunday. La fuerte presencia policial provoca reacciones hostiles en los campesinos instalados en el campamento de Ñacunday. Victoriano López, principal dirigente de los carperos, admite que el aumento de la presencia policial coincide con una fuerte versión de que se intentará desalojarlos del lugar en donde están asentados, a los costados de la ruta Ciudad del Este - Mayor Otaño, buscando hacer cumplir una orden judicial emitida el pasado 19 de diciembre por el juez Rafael Jacobo, de Santa Rita.

Jueves 26

Cientos de carperos comienzan a llegar al campamento instalado junto a la ruta, a la entrada de la estancia del sojero brasileño Tranquilo Favero, en Ñacunday, Alto Paraná, aumentando considerablemente el número de ocupantes del asentamiento, al que ya denominan Favero Cué. Federico Ayala, dirigente de los carperos, informa que la meta es llegar a juntar 20 mil personas para el día en que presuntamente vence el plazo dado al Gobierno para que defina si las tierras de Favero son o no públicas, que puedan ser recuperadas y entregadas a los campesinos. Ayala anuncia que llegarán grupos de indígenas de diversos puntos del país para sumarse al reclamo de los carperos. También se refuerza la presencia policial ante el temor de una ocupación a la propiedad. “Ahora que los militares de la DISERGEOMIL terminaron las tareas de amojonamiento y entregaron su informe, corresponde titular las tierras que el Estado nunca vendió a ninguna persona y entregarlo al INDERT, para que pueda entregar a los sin tierra”, afirma José Gil López, abogado de los carperos de Ñacunday. El representante legal insiste en que “el productor Tranquilo Favero vendió tierras perteneciente al yerbal de Ñacunday, incluso mecanizó parte del Parque Nacional de Ñacunday, donde está el Salto del Ñacunday”, acusando al productor de haber estafado a otros brasileños que le compraron tierras en ese sector.

Sábado 28

Unos 70 pobladores del barrio Guaraní, de la compañía Costa Segunda de la ciudad de Paraguarí, Paraguarí, se manifiestan para exigir la urgente provisión de agua potable. Cuestionan la excesiva burocracia del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) para solucionar el problema que vienen arrastrando desde hace años. La medida de fuerza incluye el cierre de la ruta que une esta ciudad con Pirayú, Paraguarí, por más de una hora. Los manifestantes amenazan con cerrar la vía por tiempo indefinido si las autoridades responsables hacen caso omiso a los reclamos. Ceferino Estigarribia, presidente de la comisión 13 de Enero de la comunidad, señala que la petición de los vecinos es justa porque el “agua es vida”. Sin el vital líquido, la gente no tiene vida y no puede progresar, indica.

Lunes 30

Un total de 125 quinieleros que trabajan en la ciudad de Concepción, desde hace 13 días están de huelga debido a que la empresa *Mepshow S.A.* busca la utilización de las máquinas electrónicas de captación de apuestas. Los trabajadores se oponen porque, según explican, la empresa les va a cobrar 50 mil guaraníes en forma mensual por la utilización del aparato. Los quinieleros indican que desde hace 13 días no están trabajando, a excepción de una persona que no se sumó a la medida de fuerza que acordaron para exigir que la medida sea analizada nuevamente. Alicia Gutiérrez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Quiniela, señala que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) concedió la utilización del aparato sin cumplir con lo estipulado en las bases y condiciones que la propia comisión ha impuesto. La medida de fuerza continuará hasta que se tenga una solución definitiva, según explican los quinieleros, que realizan diariamente un almuerzo en común frente a la sede de la agencia. Asimismo, mencionan que en similar situación se encuentran quinieleros de Horqueta y Vallemí.

Los pequeños mineros de Paso Yobai, Guairá, cierran el paso en el puente ubicado sobre el río Tebicuarymí con el objetivo de impedir la inauguración de una nueva planta piloto de Lampa S.A. “Fuera Lampa” y el “Pueblo de Paso Yobai exige rendición de cuentas de todo el ORO”, que la empresa extrajo durante 7 años, señalan los carteles que exhiben los mineros de ese municipio durante el cierre de ruta. Rechazan la Ley de Concesiones, que permite a esta empresa extraer por toneladas los minerales de la zona, según afirma Rubén Aguilera, quien además dice que la empresa *Latin American S.A.* es monopolista y que los vecinos la acusan de querer robar todos los recursos naturales. Mientras, la empresa prepara la inauguración de la planta para la extracción del oro en las más de seis mil 700 hectáreas. Autoridades municipales de Paso Yobai declaran asueto para acompañar la lucha de los pequeños mineros de la zona.

Martes 31

Con el establecimiento de cargas horarias graduales de hasta 48 horas semanales en las guardias médicas, así como la regularización del cobro de los haberes atrasados correspondientes a salarios y aguinaldos del 2011, los integrantes del SINAMED deciden levantar la huelga en los hospitales públicos iniciada el pasado 23 de enero. El acuerdo se da durante una reunión en una mesa de trabajo con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en la que se elabora un acuerdo que establece la posibilidad de obtener hasta tres vinculaciones laborales en el sector público; en el caso de contar con una de ellas, se podrá realizar guardias de 24 horas por semana. Y si, además, se tiene las otras dos vinculaciones más, las guardias ya deberán ser solo de 12 horas semanales. El acuerdo también establece que los vínculos actuales de los médicos no serán modificados. Será garantizada la flexibilidad de la duración de las jornadas de trabajo, según las necesidades de cada servicio, y los modelos de atención serán implementados en forma gradual.

Graves incidentes se registran frente a la Fiscalía de Curuguaty, Canindeyú, donde ocupantes de una propiedad conocida como Campo Morombi, del empresario Blas N. Riquelme, se enfrentan a cascos azules de la Policía Nacional. El enfrentamiento deja una veintena de heridos que son atendidos en el hospital regional y uno es derivado a Asunción por su gravedad, ya que es herido con balín de goma en el ojo. Los manifestantes reclaman la destitución de los fiscales Miguel Ángel Rojas y Ninfa Mercedes Aguilar, a quienes acusan de corruptos. Los sin tierras, muchos de ellos provenientes de la colonia Maracaná y del distrito de Villa Ygatimí, intentan ingresar en la sede de la fiscalía, pero son repelidos por las fuerzas del orden. Según el jefe del INDERT local, Ignacio Vera, la propiedad reclamada por los ocupantes sería un excedente. Los ocupantes también se quejan de que el fiscal Rojas también figura como ternado del Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo de juez. Consideran que esta situación no se puede dar, ya que está acusado por persecución a campesinos. Los manifestantes piden la expropiación de la propiedad destinada a reserva en el kilómetro 35 de la colonia Ybyrá Pytá, del distrito de Curuguaty.

Un total de mil cinco hectáreas en la colonia Tape Porã del distrito de Mbaracayú –70 kms al norte de Ciudad del Este, en el Alto Paraná–, en las que aparece la superposición de títulos de propiedad, es motivo de otro conflicto por tierras. Esta vez es entre un grupo de 30 familias de brasiguayos, que ocupan el lugar desde hace más de 20 años, y una empresa denominada Benita S.A., que recurre a la Justicia para obtener la posesión. Ambas partes cuentan con títulos de propiedad sobre el inmueble. La firma Benita S.A. inicia el alambrado de la parcela mecanizada, acompañada de una dotación policial de efectivos antimotines y de la montada, ante la resistencia de los actuales ocupantes, quienes afirman que no permitirán la destrucción de los cultivos de maíz. No obstante,

son persuadidos por la fuerza policial a ir a la calle, mientras que los empleados de la firma realizan la instalación del alambrado perimetral y carteles. Los mismos tienen previsto cultivar también la parcela mecanizada, según la orden firmada por el juez de feria, Amílcar Marecos. Los actuales ocupantes, brasiguayos hijos de inmigrantes brasileños, también poseen títulos de propiedad otorgados por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), anterior denominación del INDERT. Los moradores denuncian que el litigio judicial les causa millonarios perjuicios desde hace 10 años. Rodney Heck, uno de los afectados, señala que tres personas ya murieron a consecuencia del problema.

Camioneros del departamento de Guairá se encuentran apostados en las adyacencias del asiento de la Segunda División de Infantería, en Villarrica, y con ello se suman a la protesta a nivel nacional. Los fleteros exigen el aumento del precio que perciben por el transporte. Miguel Ángel Ortiz, uno de los dueños, aclara que en ningún momento procederán al cierre de la ruta y que solo están de huelga, apostados en ese sitio. “Nosotros estamos queriendo percibir 400 guaraníes por cada kilómetro recorrido con la carga, mientras los empresarios han estado pagando 250”, agrega. En ese sentido, señala que el monto en cuestión ya no alcanza para la cobertura de los gastos que requiere el traslado de mercaderías a largas distancias.

Desde hace más de un año, alrededor de 50 familias sin tierra ocupan una propiedad que según el título tiene una extensión de mil 830 hectáreas que pertenecen a la Sociedad Civil Nuevo México – menonita– del distrito de Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro. La propiedad está ubicada en la compañía Mataburro de Santa Rosa. Los colonos menonitas no quieren vender las tierras y tal determinación comunicó al INDERT. Los campesinos alegan que existe un excedente, por lo que a pedido de los mismos propietarios ya se realizó una mensura judicial, que arrojó lo contrario: una faltante de 200 hectáreas. Ante esta situación, los colonos menonitas intentan convencer a los campesinos para que salgan pacíficamente con la condición de pagarles por sus mejoras, sin embargo, los ocupantes no aceptan. Los ocupantes se encuentran en precarias condiciones y para llegar al lugar deben cruzar por un establecimiento ganadero. La mayoría se encuentra bajo carpas y precarios ranchitos, pero con cultivos para el consumo. El doctor Raúl Portillo, representante legal de los propietarios, expresa que sus clientes no quieren vender la propiedad porque adquirieron justamente por la necesidad de que la colonia se expanda.

Glosario de siglas

CAP	Coordinadora Agrícola del Paraguay
CEM	Centro de Emergencias Médicas
CODENI	Consejería de la Niñez y la Adolescencia
CONAJZAR	Comisión Nacional de Juegos de Azar
CUT-A	Central Unitaria de Trabajadores Auténtica
DISERGEOMIL	Dirección del Servicio Geográfico Militar
EBY	Entidad Binacional Yacyreta
FNTS	Federación Nacional de Trabajadores de la Salud
GEO	Grupo Especial de Operaciones
IBR	Instituto de Bienestar Rural
INDERT	Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra

INDI	Instituto Paraguayo del Indígena
MOPC	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
MSPyBS	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
PLRA	Partido Liberal Radical Auténtico
SENASA	Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SINAMED	Sindicato Nacional de Médicos del Ministerio de Salud

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Paraguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinación: Quintín Riquelme.

Relevamiento: Justino Romero.

Sistematización: Elsy Vera.

Fuentes: diario Abc Color y Diario Ultima Hora.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Paraguay

Febrero 2012

Editada en julio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 109

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Paraguay***



Integrantes Quintín Riquelme
Justino Romero
Elsy Vera

Fuentes diario Abc Color y Diario Ultima Hora.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Paraguay

Cronología del conflicto social

Febrero de 2012

Miércoles 1

Unas 70 familias de la colonia San José del Norte, distrito de Gral. Resquín, San Pedro, abandonan pacíficamente el inmueble denominado San Mateo, de 771 hectáreas, que ocupan desde hace dos semanas. Acuerdan con los intervinientes la realización de una mensura para delimitar la propiedad en cuestión y la verificación de la autenticidad del título de propiedad que se exhibe. Si el documento no es válido y existen excedentes de tierra, el inmueble pasa a poder de los campesinos. En caso contrario, los propietarios ya no serán molestados por los sin tierras.

Unas 70 familias de sin tierra que ocupan un inmueble de 700 hectáreas en Potrero Naranjo, a unos 75 kilómetros de San Pedro de Ycuamandyyú, del mismo departamento, permanecen en el sitio. Hasta el momento no hay orden de desalojo, y al parecer el inmueble ya fue vendido a otro por el Dr. Miguel Ángel Montaner, dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), según expresa Eladio Vera, vocero de los ocupantes.

Un grupo de manifestantes es reprimido por policías antimotines por atropello al local de la Fiscalía de la ciudad de Curuguaty, Canindeyú, tras una orden de detención emanada en contra del intendente, los concejales y de dirigentes sin tierras. Los manifestantes repelidos por efectivos policiales se encuentran en el mercado de Curuguaty, y anuncian que endurecerán las medidas de fuerza porque no ven que el tema se solucione pronto y porque no renuncian los agentes fiscales. En total, 21 manifestantes son atendidos por heridas, siete personas son detenidas y las demás imputadas tras el enfrentamiento con los antimotines. Representantes de los dirigentes sin tierras se reúnen en Asunción con parlamentarios y autoridades de la Fiscalía para pedir, una vez más, la destitución de los fiscales Rojas y Aguilar, cuyas firmas figuran en la orden de desalojo de la propiedad de Campo Morombi, del político colorado y empresario Blas N. Riquelme, tierras que, aseguran los ocupantes, pertenecen al Estado.

Fleteros de Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Caaguazú y San Pedro continúan con las medidas de fuerzas, como huelgas, apostarse al costado de las rutas e incluso a bloquearlas temporalmente, con el objetivo de recibir una mejor paga por el transporte de materia prima. Solicitan el pago de 350 guaraníes por kilómetro, ya que actualmente no perciben esa cifra, sino que los pagos no superan los 300 e incluso en algunos casos los 200 guaraníes. La situación se arrastra desde hace varias semanas, pero se ve recrudecida en esta última, cuando los trabajadores proceden a tomar medidas más drásticas. Los productores y exportadores de granos son los más afectados por la problemática con el transporte, por los retrasos que se dan con los compromisos asumidos. Los representantes de los camioneros se reúnen con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien exhorta a los manifestantes a evitar los cierres de rutas, viendo la problemática generada con estas determinaciones.

Viernes 3

La Dra. María José Guillén, de la unidad sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de San Juan Baustista, Misiones, denuncia que fue descontratada y perjudicada como profesional de manera injusta. La médica señala que empezó a trabajar en la previsional en noviembre de 2011, cumpliendo el horario establecido. Sin embargo, en enero salió de vacaciones 15 días y, al regresar, en el departamento de recursos humanos le informaron que le descontrataron por supuesto abandono de trabajo. Explica, además, que puso como reemplazante al Dr. Cristian Centurión, previo aviso a recursos humanos de la unidad sanitaria de IPS de San Juan Bautista. Agrega que la directora de la institución, Dra. Rocío Ramos, le manifestó que no habría problemas con su pedido. Por su parte, la Dra. Ramos explica que tiene documentos y planillas que demuestran que la profesional se ausentó sin aviso. Agrega que fue contratada el 14 de noviembre de 2011, que un mes y medio después se retiró y se fue de vacaciones.

Sábado 4

Un grupo de dueños de vehículos se manifiesta frente al taller de Ivesur S.A., en la ciudad de Asunción. Los mismos forman parte de la Asociación de Consumidores y del grupo formado en la red de *Facebook* llamado Ciudadanos en Acción. La empresa Ivesur tiene contrato con la Comuna de Asunción hasta el año 2018. La Dirección Nacional de Transporte del Area Metropolitana (DINATRAM) homologó este acuerdo. Los manifestantes señalan que atenta no sólo contra las atribuciones de las comunas, sino contra derechos de la ciudadanía, por el alto costo de inspección vehicular.

Lunes 6

El juez Penal de Garantías de Iruña, Alto Paraná, Omar Vallejos, ordena la prisión del dirigente carpero Rosalino Casco por haber violado las medidas que le estableció para concederle la libertad ambulatoria, en una causa de invasión de inmueble y coacción por la que está procesado. El pedido de prisión preventiva había sido solicitado por la fiscalía María del Carmen Meza, quien recibió un acta notarial que certificaba que Rosalino Casco ingresó en la propiedad de la firma Agrosilo Santa Catalina S.A., del grupo *Favero*, con un grupo de campesinos y militares, para instalar un mojón. El dirigente tenía prohibido acercarse a un radio de mil metros a los inmuebles que habían sido ocupados en abril del año 2011, según la orden judicial firmada por el magistrado del juzgado de Iruña.

Unos 7 mil carperos ocupan las tierras de un brasiguayo en la colonia Paranambú, departamento de Alto Paraná. Uno de los propietarios afectado, Leonir Antonio Calza, realiza la denuncia en la subcomisaría local. Según los antecedentes, un grupo de 500 carperos había ocupado unas 12 mil hectáreas en abril de 2011 y luego fueron desalojados. A consecuencia de esta ocupación, hasta la fecha, 36 carperos están procesados por invasión de inmueble y coacción, entre quienes se encuentra el dirigente Victoriano López.

Martes 7

Continúa la huelga de los integrantes de la Asociación de Trabajadores del Transporte, quien solicita la renuncia del presidente de la DINATRA, Daniel Arce, “por su incapacidad”. Los camioneros paralizaron sus actividades hace 15 días, reclamando una mejora en el costo del flete. Los huelguistas exigen 350 guaraníes de flete por ton/km, costo que fue fijado por el poder Ejecutivo, y sostienen que las firmas *Cargill* y *ADM* son las únicas que no cumplen con el decreto presidencial. Los camioneros anuncian una probable manifestación en todo el ámbito nacional en caso de que los agroexportadores no atiendan sus pedidos.

Unos cien indígenas intentan llegar al Palacio de López para exigir las tierras de Unión, San Pedro, pero la Policía les cierra el paso. Los nativos marchan por la calle Ayolas y no pueden pasar Benjamín Constant. Ante esta situación, se quedan por varios minutos en la esquina mencionada, mientras que sus dirigentes van al palacio para intentar hablar con el mandatario. Los mismos son avisados de que Lugo no les atendería, pero reciben la promesa de que el encuentro se concretaría al día siguiente. Mario Salcedo, uno de los dirigentes, explica que los indígenas que ocuparon la plaza Uruguaya, y que actualmente están en el RI 14 de Tacumbú, no se irán de Asunción hasta que el Estado les adquiera la propiedad de Eliodoro Cohene, ubicada en el distrito de Unión. El inmueble tiene una superficie de 7 mil 862 hectáreas. El nativo sostiene que son los indígenas quienes irán a vivir en el predio y no el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Óscar Ayala, cuyo pedido de renuncia está escrito en los carteles que portan, y que, según anuncian, será otra de las peticiones al mandatario.

Carperos desarmen más de 90 viviendas precarias instaladas dentro de las propiedades de los colonos brasileños Valdeir Berle Mahlot e Invani Rubenich Rusatz, en Ñacunday, Alto Paraná, y las vuelven a armar en los dos costados de la ruta a Mayor Otaño, Itapúa, extendiendo su campamento unos cuatro kilómetros en dirección al sur, como una estrategia para no ser desalojados por la policía. De esta manera el campamento queda instalado frente al establecimiento Agrosilo Santa Catalina, centro administrativo de la estancia Espigón, del productor brasileño Tranquilo Favero, conocido como el rey de la soja, cuyas propiedades reclaman bajo el argumento de que son tierras públicas y de que los títulos son ilegales. Victoriano López, principal dirigente de los carperos de Ñacunday, señala que sólo habían resuelto mover un poco el campamento, para evitar más incidentes, por lo que las nuevas viviendas se están instalando sobre la franja pública, bajo los cables de alta tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). “No estamos entrando en las tierras de Favero. Solo estamos en frente, pero son tierras públicas que muy pronto se entregarán a los campesinos”, aclara López. Sin embargo el abogado José Costas, representante legal de Agrosilo Santa Catalina, indica que la nueva movilización de los carperos “constituye una nueva invasión de las tierras del Grupo Favero”, y en consecuencia anuncia que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Zonal de Iruña, pidiendo nuevamente el desalojo de los carperos del lugar.

Desde hace más de un año, alrededor de 50 familias sin tierras ocupan una propiedad que, según el título, tiene una extensión de mil 830 hectáreas y que pertenece a la Sociedad Civil Nuevo México –colonos menonitas–, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, compañía Mataburro, departamento de San Pedro. Los colonos menonitas no quieren vender las tierras y tal determinación se comunicó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Los campesinos alegan que existe un excedente, por lo que a pedido de los mismos propietarios se realizó una mensura judicial, que arrojó lo contrario: una faltante de 200 hectáreas. Ante esta situación, los colonos menonitas intentan convencer a los campesinos para que salgan pacíficamente con la condición de pagarles por

sus mejoras. Sin embargo, los ocupantes no aceptan. En la fecha se presentará un pedido de desalojo.

Unas 400 personas se hallan acampadas frente al inmueble de 5 mil 800 hectáreas de Luis Mario Saldívar, distante a 45km de la ciudad Concepción, Concepción. Creen que hay cientos de hectáreas de excedentes fiscales. El gobernador de Concepción, Emilio Pavón, promete acompañar al pedido de mensura de la estancia Tres Hermanos, de Luis Mario Saldívar, realizado por unas 400 familias de Concepción y Loreto. Saldívar sugiere, como una segunda posibilidad, que las ex tierras de Cipasa, Antebi Cué, sean redistribuidas a los concepcioneros. El gobernador de Concepción indica que las mencionadas tierras son ofrecidas a gente de otro departamento, pero considera que deben ser para la gente de Concepción. Pavón se compromete a apoyar económicamente la realización de la mensura, en caso de que la Justicia lo determine.

Unas 130 familias de campesinos sin tierras ocupan varias pequeñas fincas de productores en el distrito de Obligado, departamento de Itapúa. Reclaman cien hectáreas que, según dicen, no tienen títulos de propiedad. Las tierras pertenecen a nueve productores que son socios de la cooperativa Colonias Unidas. Por su parte, los propietarios llegan hasta la fiscalía zonal de Colonias Unidas para pedir intervención del Ministerio Público. Los ocupantes provienen de San Pedro del Paraná, Itapúa, Yuty, Caazapá, y otros lugares, y según los mismos tienen la información de que las tierras a las que están entrando no tienen títulos.

Un grupo de 33 comunidades del sector del kilómetro 30 de Minga Guazú, Alto Paraná, ocupa un predio municipal a dos cuadras de la Ruta VI Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, para presionar al intendente, Digno Caballero, para construir un centro de abastecimiento en el lugar, según un documento rubricado con el anterior jefe comunal Alcides Romero Roa. “Ese acuerdo fue institucional, no pasa por quién está como intendente, sino que es un compromiso del gobierno municipal y creemos que sólo falta la voluntad política del intendente Digno Caballero para comenzar una obra que beneficiará a todos”, expresa Antonio Martínez, productor. Los agricultores ocupan la propiedad donde debe construirse el mercado de abasto y el intendente les pide que desalojen el sitio para conversar respecto al pedido. Sin embargo, los labriegos se mantienen firmes en su postura y cuentan con el respaldo de varios ediles municipales. Los agricultores construyen en el sitio pequeñas viviendas de madera donde comercializan su producción, diariamente, a precios accesibles.

Miércoles 8

Trabajadores de la empresa procesadora de cuero Vernon S.A. denuncian el despido ilegal del sindicalista Cornelio Ledesma, debido a que se halla amparado por la estabilidad sindical y a que nunca fue cuestionado por la empresa, hasta que se produjo su expulsión. También cuestionan la ilegal disminución de personal, que de acuerdo al Código del Trabajo se debe realizar con los de menor antigüedad. Por su parte, la empresa se ratifica en el despido de Ledesma, considerando que el mismo no posee la antigüedad para protegerse del despido, y tampoco tiene fuero, ya que fue beneficiado con el mismo con dos períodos de mandato y la ley no permite tres. A raíz del conflicto laboral, se instala una mesa tripartita que busca frenar la persecución sindical y despidos en la mencionada empresa. El encuentro se realiza en el viceministerio del Trabajo y es presidido por el director del Trabajo, Filemón Delvalle. Sin embargo, la negociación no prospera y el conflicto continúa.

Más de 200 conductores marchan en caravana contra la Inspección Técnica Vehicular (ITV). Desde el Banco Central, los automovilistas encienden sus motores para partir rumbo al Panteón de los Héroes, exigiendo la suspensión de la Ley 3.850, que establece la obligatoriedad de la verificación. Sobre la avenida Mariscal López, algunos automovilistas se incorporan a la marcha de vehículos que se dirige al microcentro, y los que no lo hacen apoyan desde sus vehículos con bocinazos. El elevado costo de las verificaciones y la exigencia de los controles, pese al mal estado de las calles, son los principales cuestionamientos que movilizan a los automovilistas. Así, los manifestantes se suman a los cerca de cien intendentes que pidieron una acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar para anular la ITV. Los peatones también dan muestras de apoyo a la manifestación.

Un oficial de Justicia, Wilfrido Prieto, acompañado de altos jefes policiales y del funcionario Juan Pablo Feliciángeli, del Ministerio del Interior, llega hasta la entrada del campamento de los carperos en la zona de Ñacunday, Alto Paraná, para dar cumplimiento a la orden judicial de desalojo. Aunque los ocupantes abandonaron completamente las fincas de Berle Mahlot y de la viuda Ivani Rubenich Rusatz, para ubicarse de nuevo a varios kilómetros, frente al silo del productor Tranquilo Favero, la policía insiste en dar cumplimiento a la orden judicial. Victoriano López, acompañado del abogado José Gil López y de otros dirigentes, acompañan al oficial de Justicia a labrar acta de que la finca estaba libre de ocupantes. El grueso de los sin tierras aguarda a unos mil metros, en la parte central del campamento, sobre la ruta a Mayor Otaño. Periodistas de varios medios regionales y de la capital, incluyendo a enviados de la televisión brasileña, llegan y realizan entrevistas sin ningún tipo de problemas, hasta que el dirigente Victoriano López se percata de la presencia de Carlos “Charly” Sánchez, reportero de la Red Guaraní, en Ciudad del Este, y le exige que abandone inmediatamente el lugar, acusándolo de ser un periodista “vendido a Favero” y de que sus informes siempre eran tendenciosos y manipulados. Tras una fuerte discusión y la negativa de Sánchez a retirarse, más de mil carperos cierran completamente el acceso al lugar y avanzan rodeando a los comunicadores. Ante este hecho, los policías de Alto Paraná se limitan a exigir a todos los comunicadores que abandonen el sitio por un camino secundario, hacia el fondo, ya que el acceso había quedado cerrado. Finalmente, López contiene a la gente y aclara que “solamente el periodista de canal 8” debe ser expulsado.

Jueves 9

Más de 80 nativos cierran durante 20 minutos la intersección de las calles Pdte. Franco y Ayolas, del microcentro de Asunción. Con reclamos sobre la compra de tierras en Unión, San Pedro, y exigiendo la destitución del presidente del INDI, los nativos llegan hasta la zona del Palacio de López. Por su parte, los cascos azules impiden el paso de los mismos por Benjamín Constant. Los nativos solicitan una vez más una audiencia con el presidente Fernando Lugo, pero nuevamente no son recibidos. El titular de INDI, Óscar Ayala, tras reunirse con el presidente de la República, informa de la existencia de otras alternativas para la compra de tierras, específicamente en San Pedro, Guairá y Caaguazú. Ayala menciona que de los ocho grupos que reclamaban las tierras de Unión en San Pedro, sólo dos insisten en ello: los liderados por Mario Saucedo y Librada Martínez.

Viernes 10

Un grupo de pobladores de la compañía Costa Irala de Quiindy, Paraguairí, se manifiesta en el local del INDERT para reclamar derechos sobre parte del campo comunal. Se trata de una fracción de

terreno que abarca 50 hectáreas, la que por dictamen de la institución citada anteriormente fue titulada a nombre de Gustavo dos Santos Ros. Los lugareños alegan que en la central del INDERT “fraguaron un excedente” de las 912 hectáreas que tiene la propiedad vecinal para beneficiar a dicha persona. Los manifestantes son recibidos por la directora regional del INDERT, profesora Carolina Barrios, quien exhibe a los representantes del campo comunal un documento en el que consta que dos Santos Ros, es propietario de dicha fracción de tierra, dividida en cuatro fincas. Ante esta situación, los manifestantes se retiran de la oficina regional del INDERT con la promesa de que no permitirán que el supuesto dueño del excedente ingrese a la finca en litigio. Los lugareños argumentan que las 912 hectáreas del campo comunal nunca tuvieron un sobrante, desde su habilitación, el 6 de junio de 1974. La propiedad se halla inscrita en el Registro Público N° 4226, del 13 de noviembre de 1995, según documentos que presentaron.

Lunes 13

Camioneros cierran en forma intermitente durante toda la jornada la Ruta VI, a la altura del barrio Arroyo Porã de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa. Similar medida de fuerza es realizada en Hohenau, en el cruce La Paz - Fram y en el cruce “Hohenau 5”, ambos sobre la ruta Graneros del Sur Paraguay - Japón. La medida de fuerza consiste en ubicar los camiones a ambos costados de la ruta. Cada cierto tiempo cortan el tráfico cruzando sobre la calzada algunos de sus vehículos por espacios de 15 a 20 minutos. La manifestación de los camioneros, que ya lleva varias semanas, es para exigir el aumento del flete por cada kilogramo de carga transportada. Proponen que los 70 guaraníes pagados actualmente, aumenten a 90.

Los carperos de Ñacunday rechazan el ofrecimiento de compra de tierras alternativas, hecho por representantes del Poder Ejecutivo. Victoriano López comenta que reciben esa promesa de compra de tierras en los alrededores de donde están acampando hace meses, pero adelanta que la oferta será rechazada por los campesinos. Indica que es imposible que las 12 mil familias que ocupan campos de Ñacunday quepan en unas 5 mil hectáreas. A pesar del rechazo de las tierras ofrecidas, Victoriano se muestra entusiasta ante la posibilidad de que el Gobierno encuentre la manera de otorgarles entre 25 y 30 mil hectáreas de las tierras reclamadas, luego de la revisión de los papeles que obran en las instituciones ligadas a la tenencia de propiedades. También indica que seguirán resistiendo en forma pacífica, como lo hacen desde hace 13 años. Sin embargo, deja en claro que los carperos no van a aceptar otras tierras ni van a desistir en su lucha. Por su parte, Carlos Filizzola niega que se haya hecho un ofrecimiento específico, pero reconoce que se vienen manejando varias alternativas para encontrar una salida al problema suscitado entre carperos y colonos de Ñacunday.

Martes 14

Pobladores de la localidad de Borja, Guairá, denuncian al ex intendente Antonio Silvero, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), por intentar apropiarse de una parte del campo comunal de la zona, colocando un cercado perimetral. Representantes del INDERT confirman que las hectáreas alambradas son públicas. El ex intendente alambró unas siete hectáreas que presumiblemente son parte de un campo comunal de esta localidad. El denunciado cuenta con una propiedad colindante al terreno en conflicto. La denuncia es realizada por miembros de la comisión vecinal ante la oficina del INDERT de Villarrica, Guairá. La acción genera gran molestia en la población. Lamentan que el político haya intentado apropiarse del terreno, intentando perjudicar a

la comunidad. Actualmente, unas 60 familias usufructúan dicho predio, que cuenta con unas 700 hectáreas.

Un grupo de aproximadamente 15 personas instala dos carpas en una de las entradas de la firma Agrotoro S.A., propiedad de Tranquilo Favero, conocido como el rey de la soja, ubicada en la colonia Lomas Valentinas, del distrito de Ñacunday, de Alto Paraná. El dirigente Federico Ayala confirma que se trata de personas de la comisión vecinal Santa Lucía, quienes están acampadas en la colonia Paranambú, del distrito de Ñacunday, bajo la franja de seguridad de la ANDE. Los campesinos se instalan a unos 5 kilómetros al sur del río Ñacunday, que se encuentra en la localidad de Paranambú, donde están acampados unos 5 a 7 mil carperos, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad del Este, capital de Alto Paraná. “Está llegando más gente. Pretendemos aumentar con unas 10 mil personas más y llegar hasta Mayor Otaño”, afirma Federico Ayala. El nuevo punto de concentración de los carperos es advertido por personales de seguridad de la empresa agropecuaria, que según su página *web* posee 12 mil hectáreas de cultivo y 13 mil hectáreas para la preservación del medioambiente. El parque nacional de Ñacunday, donde existe un salto de agua que lleva el mismo nombre, linda con el inmueble de Agrotoro S.A. Los carperos denunciaron, en ocasión anterior, que parte de la reserva forestal ya fue destruida para convertirla en tierras aptas para el cultivo mecanizado. El comisario principal Óscar Ferreira, jefe de Orden y Seguridad, afirma que aumentó la cantidad de policías en el lugar, para evitar problemas. Guillermo Duarte, uno de los abogados del Grupo Favero, se queja que los carperos hacen lo que se les viene en gana, ante la pasividad y permisividad de los policías que custodian la zona, quienes sostienen que nada pueden hacer por falta de una orden judicial de desalojo.

Unas 400 personas, por espacio de una hora, cierran la ruta 6 a la altura del kilómetro 103, en la compañía denominada Pirapey 40, departamento de Itapúa. Los mismos reclaman el esclarecimiento de excedentes fiscales. Autoridades del Frente Guasú, la mayoría del distrito de Yatytay, Itapúa, y campesinos de distintas compañías vecinas se manifiestan en el sitio en apoyo a las acciones impulsadas desde el gobierno, relacionadas a la aplicación de la franja de seguridad fronteriza en el territorio nacional, como instrumento que garantiza la soberanía nacional. Exigen además la implementación de la mensura judicial como elemento fundamental que garantice la reforma agraria integral. Los campesinos llegaron desde distintos distritos vecinos, como San Rafael del Paraná, Otaño, Tomás Romero Pereira, Edelira e Itapúa Poty, entre otros.

Camioneros continúan con cierres de rutas en distintos puntos del país exigiendo el reajuste del costo del flete. La huelga y cierres de ruta en puntos estratégicos como Guairá, Itapúa, Alto Paraná, Cordillera y otros, bloquean el libre tránsito de granos, materia prima en general y productos importados. Los transportistas exigen al gobierno el cumplimiento de un decreto del 2008 que establece el pago de 350 guaraníes por tonelada por kilómetro. El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), Ulrich Bauer, manifiesta que las empresas multinacionales están dispuestas a dialogar en busca de una salida ante esta situación, que sumada a otras problemáticas, como la sequía, han golpeado al sector agrícola. El impacto económico por los hostigamientos realizados por los piqueteros ya es notorio, destacan los empresarios, debido a que los que sí están operando no están trabajando justamente por el temor que generan los que se encuentran al costado de las rutas. Molinos y frigoríficos dejaron de producir ante el temor de que sus cargamentos sean requisados por los manifestantes.

Un importante grupo de afiliados a la Federación Nacional Campesina (FNC) ocupa la Plaza Libertad, de Villarrica, Guairá. La medida forma parte de las manifestaciones realizadas por esta

organización en distintos puntos del país, reclamando la asistencia del gobierno debido al perjuicio ocasionado por la sequía. Néstor Darío Jara, dirigente de la FNC en la zona del cuarto Departamento, asegura que el 80% de la producción de distintos rubros fue perjudicado. “Necesitamos con urgencia la asistencia del Gobierno nacional para salir adelante”, acota. Puso como ejemplo el algodón, que de mil 200 kilos por hectárea ahora solo podrán cosechar 200 kilos. En el caso del maíz, un 90% quedó arruinado, y del maní, un 60%, según los datos proporcionados por Jara. Indica que los cultivos de poroto y yerba mate fueron perjudicados en menor medida. Tampoco dejó de mencionar la caña de azúcar, que fue dañada en un 30%, de acuerdo a lo manifestado por el dirigente campesino. La dirigencia de la FNC, que opera en el Departamento del Guairá, considera impostergable la asistencia del Gobierno nacional para que los agricultores puedan salir adelante tras el problema planteado. “Si el gobierno no nos asiste, hasta podemos pasar hambre”, resalta Néstor Darío Jara, y agrega que las autoridades no pueden evadir esta asistencia, porque la economía se basa en la agricultura.

Miercoles 15

Unos 170 sin techos que ocupaban un inmueble de 6,5 hectáreas desde hace 4 meses son desalojados. El hecho se produjo en el distrito de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. La orden judicial de desalojo fue firmada por la jueza Edith Martínez el 23 de diciembre de 2011; sin embargo, la policía no le dio cumplimiento con anterioridad debido a la falta de personal suficiente, según alegan los responsables de la institución. Durante la intervención son detenidas solo 20 personas. Los demás habrían sido avisados previamente y otros ni siquiera residen en el lugar.

Jueves 16

Luego de una larga negociación entre exportadores de granos y transportistas, se logra un incremento del 5% en el precio del flete, con lo cual se suspenden los cierres de rutas y los hostigamientos a otros fleteros en las principales rutas del país. Tras más de tres semanas de piquetes en diversos puntos de las vías internacionales los representantes de ambos sectores llegan a este consenso. El presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Cereales y Oleaginosas (CAPPRO), José Vargas Peña, manifiesta su conformidad con el desenlace de la problemática, que venía golpeando a los exportadores y a la agroindustria local. Igualmente, expresa que las exportadoras realizarán un esfuerzo económico muy grande de manera a satisfacer el reclamo de los transportistas. “Entendemos que su pedido es justo y hemos llegado a buen puerto”, agrega el titular del gremio que aglutina a las firmas locales y multinacionales dedicadas a exportar granos en estado natural y sus derivados, y en menor medida a industrializarlos localmente. La huelga y los cierres de rutas se habían recrudecido en los últimos días en varios departamentos como Guairá, Itapúa, Alto Paraná y Cordillera, entre otros. Los manifestantes habían cerrado el tránsito de granos, materia prima en general y otros productos importados, generando caos y desabastecimiento.

La estancia Rancho Alegre de San Pedro, perteneciente al grupo *Ytá Ybaté S.A.*, es ocupada por un grupo de 120 sin tierras que reclama mil 500 hectáreas del inmueble, que tiene una extensión de 2 mil 660 hectáreas. El representante legal de la empresa, Gustavo Montañez, señala que no es la primera vez que estos campesinos ocupan esta propiedad y que ahora el perjuicio es mucho mayor porque no pueden trabajar por el acoso de los sin tierras. Indica que llamativamente el fiscal que atiende la causa, Balta Martínez, de San Pedro del Ycuamandyyú, ni siquiera quiso constituirse en

el lugar. “No sé qué pasó, pero el fiscal dijo que no iba a poder llegar hasta el establecimiento para constatar la invasión porque tenía una orden superior de no hacerlo. Entonces, ¿dónde estamos?, ¿a quién vamos a recurrir? Estamos desamparados”, reclama Montañez. Los sin tierras, por su parte, señalan que no saldrán de la propiedad y que seguirán luchando. “Aquí hay excedentes y el título de propiedad con que cuentan no es legal. Hace cuatro años estamos luchando por estas tierras, que servirán para ampliar la colonia, y nos mantendremos en este lugar y empezaremos a cultivar”, indica Cecilio Alcaraz, uno de los dirigentes de la comisión vecinal 14 de Mayo.

Un grupo de 115 familias de sin techos es desalojado de un inmueble perteneciente a Nimia Burcio, ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta 7 Dr. Francia, en Ciudad del Este, Alto Paraná. Los dirigentes invocaron tener el apoyo del presidente Fernando Lugo y del gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, según revela uno de los desalojados, identificado como Fulgencio Domínguez, quien agrega que fueron a ocupar las tierras con la promesa de que la Secretaría de Acción Social (SAS), las compraría porque su propietaria quería venderlas, aunque el abogado de Burcio desmiente la intención de venta. El inmueble cuenta con 12 hectáreas y fue ocupado el 9 de noviembre de 2011. La orden de desalojo fue firmada por la jueza del Primer Turno en lo Civil y Comercial de Primera Instancia de Ciudad del Este, Máxima Meza de Maldonado.

Viernes 17

Unas 80 personas protagonizan un acto de repudio al empresario sojero Tranquilo Favero. Las personas, acompañadas por una veintena de vehículos, cierran media calzada de la autopista que lleva a Luque. El escrache tiene lugar frente a uno de los locales del Grupo Favero, en las inmediaciones del aeropuerto internacional. El acto de repudio es organizado por una serie de agrupaciones civiles y políticas de izquierda, en respuesta a las declaraciones vertidas por Favero a un periódico brasileño a principios de mes. El rey de la soja había dicho al diario *Folha de São Paulo* que con los campesinos sin tierras no se debe utilizar la diplomacia como instrumento de negociación, sino que se los debe tratar “como a mujer de malandro, que solo obedece a base de palos”. Favero también destacó la figura del dictador Alfredo Stroessner, señalando que durante su gobierno se podía dormir con las ventanas abiertas, sin temor a sufrir algún robo. “Después [de Stroessner] todo fue empeorando”, aseveró. En representación de los organizadores, Andrés Molinas lee un manifiesto donde se repudian las declaraciones del brasileño naturalizado paraguayo y se pide que prosigan las mensuras en Ñacunday. También se aboga por la recuperación de las tierras supuestamente mal habidas que posee Favero, así como otros colonos de la zona.

La jefa de Recursos Humanos del IPS de la ciudad de San Ignacio, Misiones, fue destituida de su cargo por un supuesto hecho de maltrato a una arquitecta que llegó hasta el lugar para realizar una medición en el puesto sanitario. Clara del Puerto, funcionaria con 12 años de antigüedad en la previsual, relata que fue destituida de su cargo por orden del Dr. Nelson Mitsui, director del área Interior del IPS. Del Puerto señala que el lunes, por la mañana, había llegado una persona de sexo femenino hasta el puesto sanitario de la ciudad de San Ignacio, en donde procedió a medir el edificio, sin que se presentara ni saludara a los funcionarios que estaban en el lugar. Los empleados alertaron de lo que estaba ocurriendo a la jefa de Recursos Humanos, quien explica que se acercó a la persona que estaba en el predio del edificio y le consultó de dónde viene y por orden de quién. La respuesta recibida, de acuerdo al relato de la funcionaria, fue que no tenía por qué preguntar, porque era una orden superior. La mujer se retiró del patio y fue hasta un vehículo que estaba esperando en frente, del cual bajó una persona, quien se identificó como el abogado del IPS, Oscar Martínez.

Según Del Puerto, el abogado preguntó en forma prepotente quién mandó suspender la medición, amenazando con que la funcionaria sería suspendida en sus funciones por supuesto maltrato a la arquitecta que estaba trabajando en la medición del puesto sanitario. Todos los compañeros de trabajo de Del Puerto firmaron una nota de apoyo a la misma, solicitando al Dr. Mitsui que revea su postura.

Domingo 19

Vecinos de varios barrios de Ciudad Este, Alto Paraná, afectados por cortes permanentes del servicio de energía eléctrica, se movilizan y realizan cortes de calles y queman cubiertas frente a la oficina de reclamos de la ANDE, por la falta de respuesta a sus reclamos. Los barrios más afectados son Santa Ana, 23 de Octubre, San Rafael, San Antonio, San Juan y Ciudad Nueva; así como las comunidades ubicadas a lo largo de la Ruta VII Dr. Francia. Los funcionarios de la ANDE, consultados de por qué se da esta situación en estos barrios, manifiestan que los cortes se producen por la excesiva cantidad de conexiones clandestinas. Mientras no haya conciencia por parte de la gente, el problema seguirá, señalan.

Lunes 20

Los pobladores de la ciudad de Villa del Rosario, San Pedro, se manifiestan y realizan bloqueos intermitentes de la Ruta X Las Residentas, para exigir la reparación del pavimento mal ejecutado en la zona por la empresa DC Ingeniería, representada por los ingenieros Luis Alberto Duarte y Luis Alberto Castiglioni. También protestan por el presunto incumplimiento de obras adicionales. DC Ingeniería se adjudicó el pavimentado de la Ruta X, en el tramo que une a esta comunidad con importantes distritos del departamento, como San Estanislao, Gral. Aquino, Villa del Rosario e Itacurubí del Rosario. Los pobladores, acompañados por el intendente local, Ernesto Caballero (ANR), exigen que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) haga una verificación en toda la zona. La movilización se desarrolla en el acceso a la ciudad y dura unas ocho horas. Los lugareños indican que la obra está en su última etapa de ejecución, pero numerosos trabajos que figuran en el plano presumiblemente quedarían fuera del proyecto. Por su parte, el Ing. Óscar Cabañas, fiscalizador de obras del MOPC, señala que si en el contrato asumido entre la cartera estatal y la empresa constructora figuran las obras reclamadas, todo se arreglará.

Martes 21

Unos 120 campesinos son desalojados de una propiedad de 400 hectáreas en la colonia La Fortuna, distrito de Hernandarias, Alto Paraná, perteneciente a la firma *Agro Integración S.R.L.* y los socios Ernan Maldaner y Erico Carvalho. En represalia por la acción judicial, los ocupantes queman unas 60 hectáreas de cultivos de soja. El hecho ocurre a unos 70 kilómetros al norte de Ciudad del Este, Alto Paraná, donde se realiza el procedimiento de restitución de inmueble. Los ocupantes salen sin oponer resistencia cuando la fiscal Haydée Barboza de González y una dotación de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional llegan al sitio para cumplir el mandamiento. Los granos, que eran la última parte que quedaba para cosechar, son destruidos para destinar el uso del suelo a otros rubros de renta, indican los afectados. Los campesinos siguen en las inmediaciones.

Un grupo de campesinos que ocupa un inmueble perteneciente a Emilio Ramírez Russo, en la localidad de Jejui, San Pedro, es desalojado en un operativo fiscal-policial. La fiscal Lilian Ruiz llega a la administración del establecimiento agroganadero Jejui y se niega a acompañar a los efectivos policiales hasta el lugar donde se asentaron las 80 familias hace dos años. La representante fiscal alega que tenía información de que los campesinos iban a atacar contra su vida desde los bosques que rodean el lugar, y que la policía no era suficiente garantía para ella. Luego de conversar con el jefe de Policía de San Pedro, comisario Cándido Ramírez, y de la llegada de más efectivos policiales y de dos helicópteros, se acercan hasta la zona ocupada, pero los ocupantes ya habían abandonado el lugar, por lo que se procede a destruir los ranchos y una parte del cultivo de autoconsumo y renta. Los campesinos señalan que volverán a ingresar. “Salimos porque no somos gente violenta. Somos trabajadores y estamos peleando por un pedazo de tierra, pero la gente ya decidió volver a ingresar”, indica Patricio Miranda, uno de los dirigentes.

Un grupo de campesinos amenaza con ocupar 4 mil hectáreas de tierra de Tranquilo Favero en San Pedro, si en el plazo de seis meses el Gobierno no las expropia, durante una manifestación encabezada por el concejal del distrito de Capi'ibary, San Pedro, Benigno García, del Frente Guasu, frente al silo de Favero, en la mencionada localidad. Los campesinos entregan a la municipalidad de Capiibary una nota en la que piden que la comuna comience los trámites para exigir al Congreso que expropie 4 mil hectáreas de Favero que, según ellos, pertenece legítimamente a Capi'ibary y fueron usurpadas por el empresario brasileño. “Seis meses de plazo le vamos a dar, no al Poder Ejecutivo, sino a la municipalidad para que desde el Parlamento se dé la confiscación y expropiación de esas tierras”, expresa el dirigente Salomón Ruiz Díaz. Por su parte, el concejal García pide que el Gobierno tome cartas en el asunto. “Una persona que se hizo rica en nuestro país durante la dictadura y que odia a los pobres no merece tener nada en nuestro país. Con sus declaraciones está demostrando que todo lo que tiene son bienes mal habidos”, indica.

Dirigentes de gremios de camioneros deciden suspender momentáneamente el paro del sector, luego de haber acordado con autoridades del Ejecutivo preparar una normativa que exija y castigue el incumplimiento del pago de las tarifas establecidas por el servicio de flete. Esta decisión es el resultado de la reunión de los trabajadores con el viceministro del Transporte, Luis Pereira, el titular de la DINATRA, Daniel Arce, y el viceministro del Trabajo, Filemón Delvalle. El dirigente de los camioneros, Juan Godoy, señala que consideran una buena idea lo que pretende el Ejecutivo, a fin de establecer “de una vez por todas un decreto o ley que se cumpla”. Indica que las disposiciones vigentes sobre las tarifas siguen siendo incumplidas por los empresarios agroexportadores, razón por la cual ahora se pretende establecer una nueva norma que exija y sancione a los que la infrinjan. Godoy señala que ahora tendrán que seguir reclamando el pago de 386,5 guaraníes por cada tonelada por kilómetro, que se acordó en el Congreso. Por su parte, el viceministro Pereira señala que el objetivo es establecer cuanto antes la mesa técnica de estudio.

Un grupo de 70 pequeños acopiadores y, a su vez, productores de algodón, se reúne frente a la desmotadora de la empresa *Arasy Orgánica S.A.*, ubicada en la ciudad de Horqueta, Concepción, para manifestar su descontento por el bajo precio que se pretende pagar por cada kilogramo del producto. En la oportunidad, reclaman a la empresa el pago de 3 mil 500 guaraníes por cada kilo de algodón. Exigen el pago de 3 mil 500 guaraníes por kilo, caso contrario, amenazan no comercializar los rubros de renta. Según Francisco Troche, uno de los acopiadores, con el precio actual de 2 mil 300 guaraníes que paga la desmotadora, ellos abonan a 2 mil guaraníes por kilo a cada productor. Agrega que con ese precio, la pérdida por hectárea es de 500 mil para el agricultor. Indica que otros productos de fácil manejo y producción como el poroto, feichao y tártago tienen mejores precios

que el algodón, rubro que cuesta mucho sacrificio y dinero. Los productores señalan que el mismo Gobierno ha promocionado el cultivo del algodón y que ahora tiene la obligación de intermediar para que el precio aumente. Los manifestantes indican que si no hay solución, lamentablemente, saldrán a la ruta con los productores para una medida más fuerte. Por su parte, Jorge Campo, administrador de la empresa *Arasy Orgánico S.A.*, señala que ya elevó de inmediato una nota a los directivos presentando los reclamos de los acopiadores. Indica que, según él entiende, el precio internacional no da para alzar la cotización a nivel nacional.

Miercoles 22

Productores de soja de la firma *Agro Integración S.R.L.*, de la colonia Fortuna, en el distrito de Itakyry, Alto Paraná, expresan que los campesinos de la comunidad Tembiaporã queman sus cultivos, instigados por carperos, venidos de Ñacunday. Hablan de constantes amenazas de muerte que reciben tras la ejecución de la orden de desalojo. Unas 200 hectáreas de soja recién sembrada y otras a punto de cosechar son destruidas por un grupo de cuatro personas que llegan a bordo de motocicletas y derraman combustible sobre los cultivos, para luego echarle fuego. “Estamos preocupados porque antes trabajábamos con los campesinos, les arrendábamos una parte de las tierras, pero luego llegaron algunos carperos de la zona de Ñacunday a decirles que la tierra debe ser de los paraguayos, que nosotros somos brasileños y no tenemos derecho. Desde ahí todo cambió para peor”, se queja Erico Carvalho, uno de los socios. La firma agrícola cuenta con unas 400 hectáreas y 11 socios, quienes anuncian acciones judiciales contra los responsables de la quema de los cultivos. El perjuicio estimado es de unos mil millones de guaraníes, preliminarmente.

Productores de algodón de Santa Rosa, Misiones, se movilizan frente a la filial de una de las desmotadoras, en reclamo de mejores precios, y realizan cortes intermitentes de la Ruta I Mcal. López, afectando el tránsito de vehículos. Para buscar una salida al reclamo de los productores, llega al lugar Juan García Miró, director de la Dirección de Extensión Agrícola y Ganadera (DEAG), en representación del ministro de Agricultura, Enzo Cardozo, y les propone entregarles *kits* de víveres y tratar de convencer a acopiadoras y empresas proveedoras de semillas para llegar a un acuerdo por las deudas. Propone además conversar con los responsables del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y del Banco Nacional de Fomento (BNF) y otras entidades bancarias privadas para buscar la refinanciación de deudas. Los algodoneros no aceptan las propuestas de García y continuarán con la medida de fuerza impuesta. Los productores piden que el precio por cada kilo de algodón sea de 4 mil guaraníes, y no los 2 mil 600 actuales. A consecuencia de la sequía, el rendimiento es de apenas 300 a 400 kilogramos por hectárea. En algunos casos sólo se llegó hasta cien kilogramos por hectárea, según señala uno de los productores. Los algodoneros manifiestan que no se retirarán de la ruta hasta que consigan su objetivo.

Viernes 24

Unas cien personas, entre hombres, mujeres y niños, ocupan una propiedad de tres hectáreas en la zona del barrio Caacupemí, del distrito de Hernandarias, Alto Paraná, perteneciente al ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), quien formula la denuncia ante el Ministerio Público. La fiscal, abogada Zunilda Martínez, acompañada de agentes de la Policía Nacional, se constituye en el lugar para corroborar la denuncia. Uno de los ocupantes señala: “nosotros no queremos nada gratis, queremos hablar con el dueño de estas tierras y llegar a

un acuerdo, queremos comprar”. Informa a la vez que los ocupantes son de distintos barrios de Hernandarias, que están cansados de vivir en casas ajenas y en alquiler y que no provienen del distrito de Ñacunday, como se sospecha. Mientras tanto, el titular de la UGP, Héctor Cristaldo, expresa que la propiedad ya tiene más de 15 años y manifiesta su preocupación al señalar que lastimosamente el mal ejemplo de las invasiones de tierras en Ñacunday se está trasladando a la zona urbana. Pide al gobierno y a las instituciones del Estado que actúen en derecho y que su caso no se repita en otros sectores urbanos del departamento.

Tras una reunión de casi cuatro horas, los líderes carperos aceptan la propuesta del Gobierno de abandonar provisoriamente la zona donde están instalados los campamentos, hasta tanto se solucione en los estrados judiciales el problema de la tenencia de tierras en Ñacunday. José Rodríguez, principal dirigente de la Liga Nacional de Carperos (LNC), acepta levantar las carpas ubicadas frente a la estancia El Espigón, propiedad del sojero brasileño Tranquilo Favero, y otras instaladas bajo la línea de alta tensión de la ANDE. La propuesta es instalarse a unos cinco kilómetros del actual lugar, en una zona conocida como Bolsa 45, dentro del Parque Nacional Ñacunday, que es tierra del Estado. El ministro del Interior, Carlos Filizzola, el gobernador de San Pedro, José Ledesma, el procurador general de la República, Enrique García, y el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, se reúnen con el dirigente campesino para brindarle la propuesta y así evitar que se produzca el desalojo con violencia. “Lo que queremos es que no haya violencia, más allá del litigio que hay por la tierra”, expresa Filizzola. El ministro señala que esto es una solución provisoria, y que sobre el problema de fondo se empezará a trabajar luego.

Unas 65 familias de la parcialidad Aché obtienen tierras luego de permanecer por más de tres meses frente a la Secretaría del Ambiente (SEAM), en Asunción. De esta manera, los indígenas permanecerán en la finca 470, de 4 mil 629 hectáreas, que se había comprado para la SEAM y ahora fue desafectada a favor de los mismos y de otras 25 familias de la parcialidad Avá Guarani. Sin embargo, una parte de dicha propiedad se encuentra amenazada por un grupo de campesinos del Departamento de Canindeyú, que dicen ser carperos. Emiliano Mbejyvagi, dirigente de la comunidad, manifiesta que desde el jueves pasado se encuentra frente a la propiedad un grupo de paraguayos que dicen ser sin tierra y que amenazan con invadir la propiedad. Alejandro Jara y Arnaldo Rojas, representantes de los campesinos, dicen que se enteraron de la existencia de un excedente en el lugar, por lo que se instalaron en el sitio a la espera de la mensura judicial para saber con exactitud si existe o no tal excedente. “Vamos a permanecer en este lugar hasta que se resuelva, porque están explotando en forma indiscriminada el bosque, que es una reserva”, señala Jara. Por su parte, los indígenas solicitan al presidente Lugo solucionar el problema de los sin tierra, porque están invadiendo propiedades y no respetan tan siquiera una reserva que es manejada en forma ecológica.

Domingo 26

Cerca de 70 sin tierra vuelven a ocupar el establecimiento *Valle Ybaté S.A.*, de Nueva Germania, San Pedro. Ahora se instalan a unos 300 metros del sitio que abandonaron la semana pasada, tras un desalojo. Willians Catie, administrador de la empresa, expresa que otro grupo de sin tierra se prepara para ocupar el mismo inmueble en otra parte. Los sin tierras ya habían ingresado en la propiedad el 14 de febrero pasado, y tras una orden de desalojo se retiraron pacíficamente y sin la necesidad de intervención de las fuerzas públicas, tras permanecer en el lugar por más de una semana. En esa ocasión, los ocupantes retiraron sus carpas y se instalaron al costado de la

propiedad, pero aprovecharon las lluvias caídas este fin de semana para reingresar al recinto. La empresa agroganadera Valle Ybaté S.A. es de un grupo de inversores que tiene cuatro establecimientos en el Chaco. El inmueble que ocupan los sin tierra está localizado en la compañía Rincón, a unos 3 kilómetros del centro urbano de Nueva Germania. Tiene una extensión de 2 mil 800 hectáreas, explotadas en un 70%, mientras que el restante está destinado a reserva forestal. Los ocupantes pertenecen a la comisión “14 de Mayo” y están liderados por Hilario Riveros y los hermanos Antonio y Catalino Alcaraz, y argumentan que la lucha ya lleva unos 30 años en procura de unas mil 500 hectáreas para ampliar la colonia.

Lunes 27

Permisionarios de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA) se manifiestan por espacio de una hora, cerrando los accesos a la estación de buses en rechazo al proyecto de privatización manejado por la Comuna capitalina. Lourdes Paredes, de la Asociación de Trabajadores de la TOA, expresa que de aplicarse esta medida se generará la pérdida de trabajo de unas 400 personas, de quienes dependen más de mil 500 familiares. Explica también que habrá suba del pasaje de larga distancia debido al aumento de la tasa de uso de la Terminal y la fuga de riqueza nacional a través de empresarios extranjeros. Resalta que la ganancia en el pasado año alcanzó los mil 311 millones de guaraníes, de los cuales no se invirtió un solo guaraní en mejorar la infraestructura existente. El proyecto de privatizar la estación de ómnibus, que en la actualidad se encuentra deteriorada y saturada, fue presentado por una firma uruguaya y prevé una concesión de 25 años, según indican los manifestantes. Actualmente la estación de buses se encuentra intervenida por orden del intendente Arnaldo Samaniego, debido a denuncias sobre supuesta corrupción en el alquiler de locales.

Unos cien trabajadores del mercado municipal de Pedro Juan Caballero, Amambay, vuelven a manifestarse en contra del excesivo aumento en los impuestos que la Comuna local, quiere implementar en el presente periodo. De una tasa de 140 mil guaraníes pasa a 500 mil, expresan. Julio Villalba, presidente de los vendedores de la vía pública, manifiesta que cada año la Junta Municipal “viene aprobando incrementos en los espacios para la colocación de casillas. Actualmente una ONG está construyendo las casillas de material cocido, pero la Intendencia nos quiere hacer firmar un contrato de alquiler, o sea, la construcción que se está haciendo a favor nuestro con dinero provenientes de la ONG española, la municipalidad quiere cobrarnos”, dice. Los trabajadores llegan hasta la Junta Municipal, donde son recibidos por algunos ediles pero que no dan solución al tema.

Martes 28

Un grupo de 60 sin tierra se instala en una propiedad de 360 hectáreas, que sería de un ciudadano brasileño. Los ocupantes señalan que es una reserva y que pertenece a la colonia Tacuatí Poty, del distrito de Tacuatí, San Pedro. Según una denuncia presentada ante la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray, el inmueble pertenece a Edemilson Domínguez, ciudadano brasileño que estaría residiendo en la zona de Azotey, Concepción. Los campesinos ingresaron el domingo e inmediatamente comenzaron a cultivar productos de autoconsumo, y señalan que resistirán a cualquier desalojo porque consideran que el inmueble es una reserva de la colonia Tacuatí Poty. Sin embargo, hace un tiempo el brasileño se adueñó del terreno diciendo que contaba con el título.

Damacio Miranda, uno de los dirigentes de la ocupación, denuncia que Domínguez desmontó totalmente las 260 hectáreas en complicidad con policías, fiscales y funcionarios de Instituto Forestal Nacional (INFONA) y que primero quemó el monte y luego presentó una denuncia de que supuestamente los pobladores eran los responsables de la quema. Los campesinos ya recibieron tres notificaciones para abandonar el predio, pero aseguran que resistirán a cualquier desalojo. El fiscal del medio ambiente de Santa Rosa del Aguaray, abogado Marcelo Pecci, tiene a su cargo la investigación.

Miercoles 29

Unos 385 docentes, que trabajan en el marco del convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) en el departamento de Itapúa, están de huelga dejando a 4 mil alumnos sin clases. Los docentes reclaman el cobro de sus haberes de los meses de enero y febrero, que están pendientes de desembolso debido a que falta la suscripción de un nuevo convenio. Debido a ello, miles de alumnos de la ciudad de Encarnación, Itapúa, y alrededores, están sin actividad oficial, y la medida tiende a empeorar con el correr de los próximos días. Entre los puntos que reclaman, además del pago de haberes, está la firma del nuevo acuerdo entre el MEC y la EBY, que garantice la vigencia del convenio por todo el 2012. Exigen también el desembolso por la totalidad del año, incluyendo aguinaldo de fin de año. Los afectados están apostados frente a la coordinación departamental de Supervisiones, con sede en Encarnación. La postura no cambia y anuncian que no iniciarán las clases hasta tanto haya una solución definitiva. Los docentes señalan que el propio ministro de Educación, Víctor Ríos, se había comprometido en agilizar los trámites para el pago, y que no debía pasar de 10 a 12 días para terminar el proceso burocrático. Sin embargo, los días pasaron sin resultado concreto. Ante esto los docentes inician la medida de fuerza.

Glosario de siglas

ANDE	Administración Nacional de Electricidad
ANR	Asociación Nacional Republicana
BNF	Banco Nacional de Fomento
CAH	Crédito Agrícola de Habilitación
CAPECO	Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas
CAPPRO	Cámara Paraguaya de Procesadores de Cereales y Oleaginosas
DEAG	Dirección de Extensión Agrícola y Ganadera
DINATRA	Dirección Nacional de Transporte del Área Metropolitana
EBY	Entidad Binacional Yacyreta
FNC	Federación Nacional Campesina
GEO	Grupo Especial de Operaciones
INDERT	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
INDI	Instituto Paraguayo del Indígena
INFONA	Instituto Forestal Nacional
IPS	Instituto de Previsión Social

Paraguay – Cronología del conflicto social de febrero de 2012 – OSAL

ITV	Inspección Técnica Vehicular
LNC	Liga Nacional de Carperos
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
MOPC	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
PDC	Partido Demócrata Cristiano
SAS	Secretaría de Acción Social
SEAM	Secretaría del Ambiente
TOA	Terminal de Onmibus de Asunción
UGP	Unión de Gremios de la Producción

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Paraguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinación: Quintín Riquelme.

Relevamiento: Justino Romero.

Sistematización: Elsy Vera.

Fuentes: diarios Abc Color y Última Hora.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Paraguay

Marzo de 2012

Editada en agosto de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1116

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Paraguay***



Integrantes	Quintín Riquelme Justino Romero Elsy Vera
Fuentes	diarios ABC Color y Última Hora

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Paraguay

Cronología del conflicto social

Marzo de 2012

Jueves 1

Cerca de cien algodoneros y acopiadores de Horqueta, Concepción, se reúnen frente a la Desmotadora Arasy Orgánica S.A., acompañados por el diputado Luis Carlos Neumann, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el senador Miguel Carrizosa, del Partido Patria Querida (PPQ), y el intendente de la ciudad, Arturo Urbietta, de Partido Colorado, además de concejales departamentales, municipales y otros políticos, para solicitar al gobierno un subsidio de mil 500 guaraníes por cada kilo de algodón. Informan que se trasladarán a la capital, donde solicitarán una audiencia con el presidente de la República, Fernando Lugo, ocasión en que pedirán el subsidio algodonero. Afirman que si no obtienen una respuesta positiva bloquearán la ruta V, Gral. Bernardino Caballero. El gobernador de Concepción, Emilio Pavón, afirma que el pueblo debe insistir ante el Parlamento Nacional para que tanto diputados como senadores aprueben el Impuesto a la Renta Personal (IRP), para que el Poder Ejecutivo cuente con más recursos para cubrir los gastos de subsidios y otras necesidades. Añade que en la visita que realizarán al presidente Lugo, le presentarán el pedido y posteriormente se manifestarán frente al Congreso Nacional con el mismo objetivo.

Unos 400 docentes de siete escuelas ubicadas en la zona de influencia de la represa de Yacyretá en el departamento de Itapúa, exigen el pago de sus salarios atrasados desde enero. Como medida de presión no iniciaron las clases, afectando a unos tres mil 500 escolares. El monto de dinero que comprende el convenio es de unos cinco mil 500 millones de guaraníes anuales, cubierto con recursos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El coordinador de la Zona Uno del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en Itapúa, Miguel Cristino Brizuela, señala que el ministerio cuenta con los fondos para el pago a los docentes, pero para ello los docentes deben iniciar las clases.

Viernes 2

Indígenas enxet, del Chaco, llegan a Asunción para reclamar a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) la restitución de víveres a la comunidad Shawoyamaxa, tal como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado a prestar asistencia a los nativos. Los mismos se instalan frente a la institución, que tiene su local en Fulgencio R. Moreno y Parapití de Asunción. Estos indígenas llegan del Chaco para exigir la compra de una propiedad de 14 mil hectáreas que reivindican como territorio ancestral. Los trámites comenzaron hace 20 años, pero como el Estado no realizó ninguno en respuesta, recurrieron a la CIDH, que condenó al Paraguay a restituirles las tierras y, al mismo tiempo, facilitarles víveres en abundancia y calidad, para que puedan sobrellevar la difícil vida a la vera de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción. Carlos Marecos, dirigente de los aborígenes, sostiene que hace dos meses no reciben los alimentos, cuya provisión debe ser mensual. Los nativos seguirán en Asunción hasta que el Estado adquiera la tierra que pertenece a Heriber Roedell. El propietario manifiesta su intención de vender el inmueble y el lunes escuchará la propuesta del Estado.

Miembros de organizaciones de derechos humanos, de movimientos sociales, políticos y sindicales repudian el retorno de los stronistas a Itaipú Binacional. Piden la salida del director general, Efraín Enríquez Gamón, y del asesor jurídico, Diego Bertolucci, quienes propician el pago de una millonaria jubilación a la viuda del stronista Ezequiel González Alsina. También critican que Itaipú financie un libro en memoria del tristemente célebre ideólogo de la represión stronista, Édgar L. Ynsfrán, así como la persecución a trabajadores.

Pobladores de Luque, Central, y de San Bernardino, Cordillera, se manifiestan sobre el puente del río Salado, ubicado en el límite entre ambas ciudades, para exigir que las obras en el tramo de 32 kilómetros que une a los dos distritos sean adjudicadas cuanto antes para su terminación. Los manifestantes repudian el anuncio hecho por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de que la licitación de la pavimentación del tramo Luque-San Bernardino será declarada desierta. Exigen la construcción de cinco puentes y el urgente pavimentado de la vía. Los intendentes César Meza Bría (PLRA) y Ramón Zubizarreta (independiente), de Luque y San Bernardino, respectivamente, acompañan la movilización de unos cien lugareños. El MOPC había anunciado que los 32 kilómetros de la ruta intermunicipal serían asfaltados en el 2012 y para tal efecto se previó un presupuesto de 17 millones 280 mil 119 dólares –unos 78 mil 624 millones de guaraníes al cambio actual. Sin embargo, la licitación fue declarada desierta, porque las ofertas sobrepasaron los cálculos de costos. Ahora la obra depende del Congreso, que apruebe la reprogramación presupuestaria, presentada por el MOPC.

Vendedores informales del Mercado N° 4 de Asunción, cierran simbólicamente la calle Pettirossi en protesta por la intención de la Comuna capitalina de elevar un 10% el monto del canon diario que pagan por el uso de espacios públicos. La medida fue anunciada por el director de este centro de abastecimiento, Iván Arévalos. Leonardo Ojeda, del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Mercado 4 y Zonas Aledañas, señala que la medida también contempla el incremento por metro cuadrado del lugar ocupado por cada permisionario. Asimismo indica que es inaceptable la intención de elevar los montos del canon, ya que en todo este tiempo, las sucesivas administraciones no reinvirtieron lo recaudado en mejoras estructurales de puestos, aceras y otros sectores deteriorados. Ojeda anuncia que solicitarán oficialmente que se suspenda esta suba en los montos del canon diario hasta tanto se pueda ver qué otras alternativas pueden implementarse, ya que está en juego el puesto de más de cuatro mil personas.

Unas 95 familias de sin tierras sufren un nuevo desalojo de una propiedad de la agroganadera Jejuí, de Emilio Ramírez Russo, ubicada en la colonia Jejuí, distrito de Liberación, departamento de San Pedro. El procedimiento se realiza luego de comprobarse que los sin tierras volvieron a reingresar en el inmueble de donde ya habían sido desalojados la semana pasada. Esta vez, la comitiva fiscal y policial, tal como ocurrió la primera vez, ya no encuentra a los campesinos, quienes se adelantaron y abandonaron el lugar antes del procedimiento. Los ocupantes estaban comenzando a reconstruir sus casas. A raíz de la reocupación, la fiscal Lilian Ruiz, de San Estanislao, San Pedro, anuncia la imputación del dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) Luis Aguayo, esto porque los ocupantes de la propiedad son de la Unión Campesina Nacional (UCN), que está asociada a la MCNOC. Varios tractores proceden a destruir todo el cultivo, aunque muchos ya fueron cosechados por los campesinos. Los campesinos señalan que volverán a ingresar a la propiedad y condenan la destrucción de los cultivos. La MCNOC, por su parte, emite un comunicado, el cual expresa: “Repudiamos una vez más el hecho de violento desalojo, quema total de 95 casas de las familias asentadas, 150 hectáreas de productos agrícolas de autoconsumo, robo total de las pertenencias y animales menores, dejando sin escuela a 120 niños”,

señala el escrito firmada por Luis Aguayo

Un grupo de camioneros bloquea por una hora la cabecera del puente que une Falcón, Paraguay, con la aduana de Clorinda, Argentina, en protesta por una intervención de la Gendarmería de Clorinda, que insiste en revisar la documentación de un transporte de carga que ya había ingresado al Paraguay. De acuerdo al personal de la Marina paraguaya, aduaneros argentinos retienen a un camión que, supuestamente, no tenía todos los documentos en regla. Se oponen a esto los camioneros, haciendo causa común con el conductor del transporte, lo cual deriva en el bloqueo del puente. La medida genera molestia y una fila inmensa de rodados que necesitan seguir trayecto hacia uno y otro lado.

La Comisión de Desarrollo Campesino “Tarumá”, de la localidad denominada Morotigue, del distrito de San Pedro del Paraná, Itapúa, integrada por cien familias, reclama la entrega de unas mil hectáreas aproximadamente, que serían excedentes fiscales que están situados en la zona. Los sin tierras destacan que ya no tienen para darles de comer a sus familias y que esta propiedad es la única esperanza de supervivencia. Además, argumentan que desde 1975 venían solicitando y que por la burocracia existente nunca pudieron llegar a legalizar los papeles. Varias personas se hicieron pasar por dueños; sin embargo, nadie presentó los títulos de propiedad. Las familias están apostadas a un costado de la tierra en litigio y exigen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra (INDERT) que agilice los trámites para que ellos puedan ingresar para labrar la tierra y así dar el sustento a todos los integrantes de la comisión. Eulogio Achar Díaz, uno de los sin tierras, afirma que van a ingresar a las tierras “porque las necesidades nos obligan a realizar esa acción”.

Lunes 5

Personal de enfermería del Hospital de Clínicas de San Lorenzo, Central, se manifiesta frente al nosocomio en reclamo del pago del salario correspondiente al mes de enero. Zulma Rojas, del Sindicato de Enfermeras del Hospital de Clínicas (SIDEHC), indica que unas 360 personas son las afectadas por el bloqueo de salarios establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el doble contrato. “El compromiso era que ya iban a cobrar este fin de mes el sueldo de enero y febrero, y han cobrado solamente el de febrero”, apunta. Por su parte, el decano de la facultad, Prof. Dr. Aníbal Peris, explica a través de un comunicado que el retraso sólo corresponde al mes de enero y que están realizando las gestiones pertinentes para agilizar el desbloqueo interpuesto hacia los trabajadores, instalando incluso una acción legal contra la SFP.

Unos doscientos campesinos pertenecientes a la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), apoyados por vecinos de la zona, se encuentran instalados en una propiedad de aproximadamente dos mil 800 hectáreas, ubicada en la calle 26 de Febrero, del distrito de Capiibary, San Pedro, perteneciente al colono brasileño Omar Trueller, pero arrendada por Celso Ferreira, de la misma nacionalidad, que trabaja en el cultivo de soja y otros rubros. Los ocupantes exigen al INDERT la compra de la propiedad. Según versión de algunos representantes de la organización, la ocupación de la referida finca se realiza para evitar que los propietarios sigan utilizando productos agroquímicos en las plantaciones. Los sin tierras argumentan que los brasileños no respetan las leyes ambientales existentes para este tipo de actividad. Milciades Quintana, uno de los dirigentes, asegura: “ya no vamos a permitir a esta gente que siga actuando de esta manera. Es increíble cómo no respetan a nadie estos extranjeros. Ya no podemos ni comer tranquilos del olor de los venenos porque ellos pulverizan a cualquier hora sus parcelas y lo más preocupante es que nadie controla

esos productos que utilizan”, manifiesta Quintana, de la OLT. Por su parte, el abogado del brasileño Trueller declara que el propietario está decidido a abandonar el país y que con esta invasión tomó la decisión de poner en venta las dos mil 800 hectáreas que posee en esta localidad. Sosa indica que Trueller no quiere entrar en un conflicto judicial con los ocupantes y opta por abandonar el país. Ante un inminente desalojo, los campesinos abandonan las tierras y se instalan al costado de las mismas. Explican que dan una tregua de 22 días al propietario y al INDERT para que busquen una solución. Pasado el plazo, volverán a ingresar para quedarse definitivamente.

Unas 80 familias del asentamiento campesino Poromocó, distrito de Obligado, Itapúa, se niegan a abandonar el inmueble que ocupan y amenazan al director regional del INDERT de Itapúa, Marcial González, y a la fiscal Olga Wilma Araújo, a quienes acusan de corruptos, vendidos y sinvergüenzas. Esto ocurre a solo horas de que el asesor jurídico de la presidencia de la República, Emilio Camacho, haya asegurado que no existen excedentes fiscales en tierras del distrito de Obligado. La representante del Ministerio Público, acompañada de tres agentes policiales, intenta explicar a los ocupantes que no existen tierras fiscales disponibles en el lugar así como tampoco excedentes fiscales. Sin embargo, los campesinos desconocen cualquier tipo de razonamiento en contra de sus pretensiones, como tampoco reconocen documento o argumento que no los favorezca, motivo por el cual continúan en el mismo sitio con sus precarias carpas de plástico.

Unas 20 familias nativas, que argumentan haber sido abandonadas a su suerte en plena ruta, permanecen en Paso Itá, distante unos 20 kilómetros de Horqueta, en Concepción. Están en la búsqueda de una tierra propia y carecen de alimentos y agua. Las familias de la comunidad Ayvuporã, de la parcialidad mbya guaraní, se hallan apostadas al costado de la ruta Horqueta - Tacuatí, hasta donde fueron, supuestamente derivados por orden del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), con la promesa de un pedazo de tierra propia. Según explica Emiliano Rojas, líder, los nativos fueron trasladados desde el distrito de Tacuatí, San Pedro, al Departamento de Concepción, a los efectos de recibir su tierra propia gestionada desde hace mucho tiempo. Indica que a la orden de traslado la dio el licenciado Manuel Molinas, del INDI. Sin embargo, Molinas niega la información y asegura que Rojas fue a la zona por su cuenta, para unirse a otro grupo de nativos que habían dejado la Plaza Uruguay de Asunción un tiempo atrás. “Sólo fue una confusión”, sostiene.

Unas 150 sin tierras que estaban ocupando parte de unas tierras pertenecientes al establecimiento Rancho Alegre de Nueva Germania, San Pedro, abandonan el lugar ante un inminente desalojo por parte de una comitiva fiscal policial a cargo de los fiscales Luis Piñanez y Balta David Martínez. Los ocupantes abandonan la propiedad en horas de la madrugada, por lo que sólo encuentran algunas evidencias, como carpas y ranchos precarios, que son destruidos al igual que los cultivos.

Otro desalojo se produce en la compañía Potrero Naranjo, del distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, San Pedro, donde unos 70 campesinos ocuparon la propiedad de 50 hectáreas perteneciente a Soriano González, unos días antes. En el momento del desalojo están en el lugar unas 57 personas, de las cuales 50 son detenidas, mientras las madres con menores de edad son dejadas en libertad. Los campesinos expresan que la propiedad no cuenta con documentos y que es un excedente de la colonia 12 de Junio. “El dueño no cuenta con los documentos de este terreno. Desde hace tiempo estamos siguiendo los trámites en el INDERT y allí figura como excedente de la colonia 12 de Junio, y si ahora nos llevan presos, después de salir vamos a volver a ocupar, porque no tenemos tierra y no vamos a permitir que se adueñe de esto una persona extraña”, indica Marli Montanía, una de las ocupantes detenidas.

Durante una movilización en Asunción, un grupo de organizaciones campesinas y sectores de derechos humanos que conforman la Coordinadora por la Recuperación de Tierras Mal Habidas pide la destitución del procurador general de la República, Enrique García, y la intervención, del INDERT, de la Dirección de Catastro y Registros Públicos. El punto de concentración es la Plaza Uruguaya, desde donde el grupo marcha hasta la sede de la Procuraduría General de la República. Encabezan la marcha los dirigentes campesinos Luis Aguayo y Elvio Benítez, quienes defienden la lucha por la recuperación de las tierras y el proceso de intervención del INDERT. Benítez defiende al Ejecutivo y su plan de reforma agraria, pero acusa a los poderes Legislativo y Judicial de trabar el proceso. “Hasta este momento no se sacó ni un proyecto de expropiación. Desde el poder Legislativo nunca se denunció la existencia de tierras mal habidas. Consideramos que es una traba para este gobierno. Si este gobierno va a llevar adelante la reforma agraria tienen que estar los tres poderes del Estado”, sostiene. También en su discurso exige la renuncia de Enrique García “por mal desempeño en sus funciones”. Aguayo también acusa a García de ser “cómplice del robo y del saqueo de tierras mal habidas”.

Los transportadores de granos vuelven a manifestarse, con cierres intermitentes de algunas rutas del país ante la demora del Poder Ejecutivo en la emisión del decreto por el que los camioneros deberán recibir efectivamente más pago por flete. De acuerdo con Juan Godoy, presidente de la Federación Libertad y Unión de Choferes en Acción (LUCHA), la protesta se reanudó desde el lunes pasado, porque las empresas se niegan a cumplir con lo firmado recientemente, convenio por el cual se comprometieron a aceptar el reclamo de los camioneros, que anhelan un mejor precio por servicio de flete, es decir, 402 guaraníes por cada tonelada/kilómetro. Como no se concretó tal promesa, los transportistas decidieron nuevamente salir y bloquear las rutas: la 6ta, que une Encarnación, Itapúa, con Ciudad del Este, Alto Paraná, y los accesos a San Antonio y Villeta, en Central. La medida de presión de los graneleros se levantó hace un par de semanas tras un acuerdo con las autoridades nacionales y las empresas ligadas a la exportación de granos, pero no se cumplió lo convenido, razón por la cual volvieron al paro.

Miércoles 7

Un grupo de campesinos del asentamiento San José Obrero, distrito de 25 de Diciembre, San Pedro, retiene un camión de carga que transporta rollitos de un establecimiento ganadero que cuenta con una orden judicial de no innovar firmada por un juez de la zona. Cuatro de los campesinos son detenidos a raíz del inconveniente por orden de la fiscalía interviniente. Higinio Caballero –uno de los detenidos– manifiesta respecto a su detención que con esta actitud las autoridades están demostrando su parcialidad hacia la gente con poder económico, teniendo en cuenta que la propiedad dispone con una orden de no innovar.

Una comitiva fiscal-policial realiza un desalojo en la propiedad de la Asociación Civil Nuevo México en Tacuatí, San Pedro, ubicada en la compañía Mataburro, ocupada hace tres años por campesinos. Horas antes de la intervención los sin tierras abandonan el sitio, no así las mujeres y niños que se esconden en una propiedad contigua. Los fiscales que encabezan la comitiva, Marcelo Pecci y Luis Piñáñez, ordenan la detención de las mujeres. Las 12 mujeres son llevadas hasta la Comisaría de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, para su identificación. Del total de detenidas, seis estaban con sus respectivos hijos, quienes posteriormente son entregados a otros familiares, mientras las otras seis también serían imputadas. El gobernador de San Pedro, José Ledesma, visita a las mujeres detenidas en la Comisaría de Santa Rosa del Aguaray y cuestiona duramente a los

fiscales por detener a las mujeres y niños, quienes ya no se encontraban en propiedad privada. “No podemos llegar a esto. Detener a mujeres y niños es una barbaridad. Además estas ya no estaban en la propiedad de los menonitas”, explica.

Jueves 8

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, unas 150 militantes del Frente Mujer “Soledad Barret”, del Partido Tekojoja y del Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS) realizan una protesta frente al Hospital Regional de Paraguari y la Gobernación, para exigir mejoras en la atención sanitaria del hospital. La protesta es contra el gobernador de dicho departamento. Uno de los reclamos es la destitución del director del nosocomio y de la titular de la IX Región Sanitaria. El centro de la protesta fue la falta de insumos y medicamentos en el Hospital Regional. Oradores de la manifestación señalan que por estos déficits dos criaturas nacieron muertas la semana pasada en dicho hospital.

El sindicato de conductores de la empresa de transporte Mariscal López, Línea 38, propiedad de Juan Gregorio Brítez, inicia una huelga de 30 días. El grupo de trabajadores denuncia el incumplimiento del Código Laboral, que establece ocho horas de trabajo. Sin embargo, los conductores trabajan por casi 20 horas diarias. Denuncian además descuentos arbitrarios de la patronal cada fin de mes, por supuestas llegadas tardías o por no cerrar las planillas de boletas en los puntos establecidos. Aseguran que hay una abierta persecución al sindicato y acusan a los empresarios de ofrecer dinero a los sindicalistas para abandonar el grupo. El secretario general del gremio, Víctor Alonso, comenta que desde el 29 de febrero la mayoría de los sindicalistas no trabaja, debido a que el empresario Brítez les prohibió el ingreso a la empresa. “Unos 11 compañeros no están trabajando desde el 29 pasado porque no se les entrega el vehículo. La empresa está contratando nuevos choferes sin experiencia y ponen en peligro a los pasajeros, ya denunciamos al Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) esta violación de las leyes laborales”, señala. El MJT convocó a una tripartita, pero los empresarios no asistieron. El representante de la firma, Vidal Rodríguez, manifiesta que los sindicalistas que no trabajan son los que atropellaron la empresa en forma prepotente. Niega las acusaciones contra la firma.

Más de mil carperos, con machetes y palos en mano, intentan sitiar la Fiscalía de Iruña, Alto Paraná, pero son impedidos por la policía. Los mismos piden la destitución o la renuncia de la fiscal María del Carmen Meza. La movilización se realiza en el centro urbano del distrito de Iruña, ubicado a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad del Este, en el Alto Paraná. Durante el acto tres carperos son detenidos por intentar rebasar el cordón policial. La Fiscalía es evacuada como medida de seguridad. Los carperos anuncian que sitiarían Iruña con más de cuatro mil manifestantes hasta que la fiscal renuncie o sea destituida, pero resuelven cancelar la medida de fuerza. Ante la masiva movilización, la jefatura de policía declara el alerta departamental de seguridad para llevar más policías al lugar, aumentando la cantidad a unos 300 agentes, con patrulleras e incluso una ambulancia policial. Los carperos de Ñacunday están molestos por la imputación de su líder Victoriano López, por presunto abuso sexual de una niña de 13 años, por parte de la fiscal, a quien el abogado de los sin tierras José Gill López llamó “fiscal sojera” durante su intervención.

Unas 70 familias de la Comisión de Sin tierras Rodríguez de Francia son desalojadas y 32 de ellos detenidos. El procedimiento se lleva a cabo en la colonia Tacuatí Poty, del distrito de Tacuatí, San Pedro, en un inmueble perteneciente al brasileño Edemilson Domínguez, de 360 hectáreas. En el

lugar, desde hace 15 días, se instalaron las 70 familias. Los campesinos manifiestan que la propiedad es una reserva de la colonia Tacuatí y que a pesar de ir presos, al salir volverán a ocupar el sitio. Acusan al brasileño Domínguez de poseer un título falso y que el INDERT no reconoce dicho documento. Con esto se completa la serie de desalojos llevados a cabo por la Policía y el Ministerio Público, que dejan como saldo alrededor de noventa detenidos.

Viernes 9

Integrantes de cinco sindicatos y jubilados de la Itaipú Binacional protestan contra los directivos actuales de la Caja Paraguaya de Jubilaciones de la Itaipú Binacional (CAJUBI), lado paraguayo. Los manifestantes cierran el portón de acceso principal a la entidad binacional por espacio de una hora. La concentración genera una larga fila de los transportes de funcionarios que deben ingresar a esa hora. Los trabajadores organizados se oponen al pago de pensión autorizado por el director general interino de la Itaipú, Efraín Enriquez Gamón, a la viuda del ex consejero de la entidad durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner, Carola Dominga Zanotti Cavazzoni, quien incluso deberá percibir los haberes caídos, totalizando aproximadamente 4 millones de dólares –unos 17 mil millones de guaraníes. Los manifestantes también repudian lo que consideran una actitud complaciente de la justicia y las autoridades de la Itaipú al no resolver la recuperación de más de 122 millones de dólares, supuestamente desviados a una empresa fraudulenta en Canadá. Fue durante la administración de Víctor Bernal al frente del Itaipú y Víctor Bogado Núñez, entonces titular de la CAJUBI, ambos parlamentarios actualmente.

Un grupo de cien campesinos sin tierras ocupan una propiedad de 600 hectáreas en el distrito de Gral. Elizardo Aquino, San Pedro. Sin embargo, abandonan el inmueble minutos antes de la llegada de una comitiva fiscal-policial. La propiedad pertenece a la Cooperativa Volendam de la colonia menonita del mismo nombre y está ubicada en la Colonia 4 Vientos del distrito de Gral. Elizardo Aquino. La ocupación se realizó el jueves anterior. Los sin tierras vienen reclamando la misma desde hace varios años y esperan que el INDERT dé curso favorable a sus pedidos. Según expresan, las gestiones están avanzadas. La comitiva fiscal-policial es encabezada por la fiscalía Irma Arias, de Itacurubí del Rosario, San Pedro, y acompañada por unos 20 efectivos policiales de la zona.

Sábado 10

Colonos brasileños y peones de la empresa Benita S.A. protagonizan un nuevo incidente en la zona de conflicto en la colonia Tape Porã, distrito de Mbaracayu, Alto Paraná. Dos empresas, además de un grupo de 30 productores brasileños, se adjudican la propiedad de mil un hectáreas. El apoderado de la empresa Benita S.A., Luis Beggan, denuncia que un grupo de productores les cerró el paso cuando se disponían a ingresar a la propiedad en compañía de una concejala municipal. Relata que los colonos brasileños rompen los parabrisas de los vehículos. Los agresores son ahuyentados por un grupo de policías que monta guardia en el lugar, cumpliendo una orden judicial. El representante de la otra empresa “Nossa Senhora Aparecida”, Abog. Rolando Cáceres, cuestiona el cierre de lo que considera un camino público, dentro de la propiedad en litigio. Señala que Benita S.A. se vale de una orden judicial y la mensura judicial (SD N° 21), además de un amparo judicial firmado por el juez Amílcar Marecos, para aferrarse a las tierras. “En los documentos no dice que la propiedad debe ser cercada y los caminos cerrados”, manifiesta.

Alrededor de 50 campesinos ocupan parte de las tierras pertenecientes a la empresa Agroganadera Pindó, situada en la colonia Tembiaporá, distrito de Campo 9, Caaguazú, según confirma Hermes Aquino, presidente de la Coordinadora Agrícola de Caaguazú. La propiedad pertenece a los menonitas que están ubicados en Campo 9 y tiene mil 700 hectáreas. Según Aquino, la propiedad cuenta con todas las documentaciones al día, que indefectiblemente serán entregadas al Poder Judicial para que pueda emitir una orden de desalojo cuanto antes. Manifiesta que la situación ya se vuelve insostenible en el campo, donde cada vez ocurren más invasiones de propiedades privadas. Acusa al gobierno de promover las ocupaciones.

Lunes 12

Unos 55 empleados del frigorífico Agro Frío, ubicado en la compañía Isla Aranda de Limpio Central, realizan una manifestación frente a la fábrica en reclamo de mejoras salariales. Los trabajadores de la sección de playeros y menudencias afirman que la empresa de capital brasileño-libanés no respeta las leyes laborales y prácticamente obliga a los empleados a trabajar 10 a 12 horas diarias, sin remuneraciones extras. Paga el salario mínimo y en algunos casos menos, indican. Leonardo Figueredo, uno de los afectados, señala que piden mejorar las condiciones laborales dentro del frigorífico como también terminar con las persecuciones laborales para los trabajadores que exigen sus derechos. Asegura que varios empleados tienen un promedio de antigüedad de 5 a 10 años. Sin embargo, las condiciones laborales nunca mejoraron. “Pedimos que nos paguen lo que merecemos por nuestro trabajo”, subraya.

Pobladores de la compañía Loma de San Juan Bautista, Misiones, cierran desde las 9 am, el camino de tierra por donde transitan los camiones que transportan arroz. Los vecinos se quejan del polvo que levantan los semirremolques y exigen que utilicen la Ruta IV “San Ignacio” - Pilar. Los camiones de gran porte son utilizados diariamente para sacar toneladas de arroz y se desplazan hacia San Juan Bautista, cruzando por las compañías Loma y Tape Guasu. Según los lugareños, más de 50 semirremolques llevan toneladas de arroz desde los cultivos situados en la cuenca baja del río Tebicuary a los molinos arroceros ubicados sobre la Ruta I “Mariscal López”. Los vecinos piden solución al problema ambiental, además del asfaltado del tramo de 45 kilómetros que empalma con la Ruta IV. El presidente de la Asociación de Arroceros de la Cuenca Baja del río Tebicuary, José Mazurek, se excusa de brindar declaración a la prensa.

Sin tierras de Concepción que reivindican las tierras del ganadero Luis Mario Saldívar, reclaman al INDERT el reconocimiento de su comisión vecinal y la anulación de otra comisión, que, según ellos, responde solo a cuarenta personas. La comitiva de campesinos se constituye en la oficina regional de INDERT de Concepción, donde estos solicitan al nuevo director su mediación para anular inmediatamente la resolución nro. 237, del 7 de marzo, que reconoce a una nueva comisión que sólo representa a 41 personas. Francisco González, presidente de la comisión de sin tierras Ybytu Pyahu, viento nuevo, indica que cinco personas se retiraron de la comisión original y conformaron otro grupo logrando en forma inexplicable el reconocimiento de la comisión. “Lo simpático es que sólo representan a 41 personas, mientras nosotros somos más de 300 y estamos acampados frente a la propiedad”, explica. Los sin tierras creen que funcionarios del INDERT, tanto de Concepción como de Asunción, se prestaron a algún tipo de juego sucio para anular la comisión anterior y reconocer la nueva. Osmar Díaz, nuevo jefe de la oficina del INDERT, indica que visitará el campamento para realizar un nuevo censo, porque también considera injusto que el grupo que no está organizado ni acampado sea reconocido. Los sin tierras de Concepción se hallan apostados

frente al inmueble de la estancia Tres Hermanos, propiedad de Luis Mario Saldívar, distante a 45km de la ciudad de Concepción. Reclaman una mensura judicial, ya que consideran que en el inmueble de 5 mil 800 hectáreas, hay buena cantidad de excedente.

Agricultores de la zona del kilómetro 30, que ocupan la fracción Piro'y, de Minga Guazú, Alto Paraná, no llegan a un consenso con la Intendencia Municipal respecto a la construcción de un mercado municipal en un terreno próximo a la ruta VI. El intendente, Digno Caballero, pide que abandonen primeramente el predio para iniciar la negociación. Desde hace más de un mes, un grupo de 33 personas ocupa un predio de 50 por 70 metros y con ello busca presionar al intendente, pero este reitera que primero deben salir del sitio, donde ya construyeron algunos puestos de venta precarios. Digno Caballero manifiesta que esas personas deben ser consideradas invasoras, porque lo que hacen es un atropello a la autonomía municipal, ya que el lugar es destinado a plaza y los vecinos del sector exigen también un lugar de esparcimiento para sus hijos.

Martes 13

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS) inicia una huelga, que en principio duraría 45 días, en protesta por la nueva carga horaria que pretende implementar el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Si bien el acatamiento no fue masivo durante el primer día de huelga, la atención en los hospitales con gremios adheridos se ve afectada. No obstante, los principales servicios no son suspendidos. El Dr. César Pimienta, vicepresidente de la FNTS, señala que otros hospitales del país se plegarían a la huelga, de forma escalonada, en el transcurso de la semana. En una reunión tripartita realizada entre los médicos y los ministerios de salud y trabajo, no se llega a un acuerdo, razón por la cual la huelga continua. Filemón Delvalle, director general del Trabajo, explica que no se logra conciliar los intereses de ambas partes. “Se solicita que se levante la medida, pero los sindicatos están dispuestos a seguir negociando pero sin levantar la huelga”, indica Delvalle. Con esto se cierra el proceso de diálogo. “Definitivamente esto se tiene que conversar en una paritaria, en una mesa técnica, porque son grupos heterogéneos, son muchas organizaciones”, explica Delvalle. Por su parte, el doctor Carlos Cubas, dirigente de la FNTS, anuncia que la medida no será levantada porque se mantiene el aumento de la carga horaria como una imposición del Ministerio de Salud. “Exigimos que la carga horaria sea la misma de antes, eso es innegociable. La huelga continúa y se radicalizaría con una huelga de hambre”, afirma al concluir la tripartita.

Un grupo de vecinos ataca a pedradas a los operadores de máquinas que destruyen las viviendas de los ocupantes, durante un desalojo judicial realizado en el barrio Che la Reina de Ciudad del Este, Alto Paraná, por orden del juez Carlos Balmaceda. La policía utiliza gases lacrimógenos para dispersar a los ocupantes. Cuatro personas son detenidas y serán imputados por resistencia, según el fiscal Horacio Bisso. El inmueble donde se realiza el desalojo es de 30 hectáreas, administradas por la empresa Inmobiliaria del Este, conocida como la fracción Colinas del Este, pero perteneciente a la señora María Bordón viuda de Albornoz, quien inicia un juicio para recuperar la posesión sobre los lotes ocupados en forma clandestina desde hace cuatro años. Sin embargo, cuando los operadores de máquinas pesadas comienzan a echar las viviendas, un grupo reacciona y comienza a tirar piedras contra las máquinas, cuyos operadores corren del lugar perseguidos por los manifestantes. La policía resguarda el lugar.

Miércoles 14

Trabajadores y comerciantes del Mercado N° 4, ubicados en el tramo de la calle Pettirossi, se agrupan en horas de la mañana para manifestarse en contra del proyecto de metrobús que pretende unir la ciudad San Lorenzo, Central, con Asunción. Unas dos mil personas de ambos sexos se colocan sobre la calle Pettirossi en el tramo comprendido entre la avenida República de Perú hasta General Aquino, zona del popular mercado municipal N° 4. La manifestación motiva la clausura obligada de la referida calle por algunos minutos, generándose un atascamiento en el tránsito automotor. Una trabajadora explica que la disconformidad con el proyecto consiste en que “si llega a pasar por aquí el metrobús, nosotros nos quedamos sin trabajo, por lo tanto nuestros hijos quedan sin su pan diario” expresa.

Vecinos de la zona de la avenida Molas López de Asunción se manifiestan durante la sesión de la Junta Municipal para que los ediles dejen de aprobar edificios de gran altura en esta arteria y amenazan con llegar hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de ser necesario. Todo esto surge debido a la intención del sector privado de construir edificios de gran altura en zonas donde se debe priorizar la residencia. Para el 13 de abril se tiene prevista una reunión entre vecinos, constructores y concejales, para debatir sobre esta situación, ya que en Molas López existen más de seis proyectos de grandes edificios.

La huelga nacional que comenzaron los gremios médicos y de trabajadores de la salud el pasado martes 13 de este mes continúa en la fecha sin solución a la vista. Representantes de la FNTS sostienen que la medida se radicalizará porque varios médicos y profesionales de la salud iniciarán en breve una huelga de hambre. Sin embargo, autoridades sanitarias sostienen que de acuerdo a reportes recabados desde los principales hospitales del país, la concurrencia de pacientes no se ve afectada y la atención en los principales servicios es normal en la mayoría de los casos. Por otra parte, la mesa tripartita se ha suspendido debido a que no se llegó a un acuerdo acerca del levantamiento de la medida de fuerza como condición para seguir dialogando y negociando, sostiene el comunicado del FNTS.

Autoridades municipales, productores, taxistas y camioneros bloquean la supercarretera Itaipú, a la altura del kilómetro 21 de Hernandarias, Alto Paraná, en protesta por la intención del MOPC de instalar cuatro peajes desde Hernandarias hasta La Paloma, en Canindeyú. Los intendentes consideran que esto frenará la inversión en los distritos afectados. El Ing. Rubén Sanabria, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), filial Alto Paraná, expresa que el gobierno “quiere pasarse de listo y recaudar por algo en el que no invirtió”. Recuerda que la construcción de la supercarretera Itaipú, así como su mantenimiento, fue realizada netamente por la entidad binacional, por lo que el MOPC no puede cobrar peaje en el sector, conforme a sus expresiones. De los 12 intendentes que serán afectados por los puestos de peaje participan de la manifestación ocho. “Estamos luchando por un derecho que les afecta a los transportistas, principalmente a los alumnos que vienen de Santa Fe y van a Hernandarias”, expresa uno de los participantes del acto.

Profesionales nucleados al Sindicato de Trabajadores de la Salud del Alto Paraná (SITRASAP) se acoplan a la huelga que sus pares de Asunción iniciaron desde el martes pasado. En asamblea realizada en el Hospital Regional, el personal de blanco resuelve sumarse a la medida de fuerza. Antes de iniciar una marcha por la supercarretera, recorren los centros asistenciales de la zona para invitar a otros profesionales a sumarse a la protesta. El licenciado Luis Escobar, del SITRASAP,

señala que 500 asociados, distribuidos en centros y puestos de salud del departamento, dejarán de prestar atención en consultorios y cirugías programadas. Los médicos reivindican la inclusión de contratados en planilla, la equiparación de la carga horaria y la corrección de problemas de insalubridad en los hospitales públicos. Señala además que falta mejorar los servicios, y puso como ejemplo el hospital cabecera de Ciudad del Este, en donde –asegura– no se cuenta con los insumos suficientes y la atención se ofrece en medio de precariedades. Los sindicalistas explican que realizaron los trámites de rigor en el Ministerio del Trabajo para iniciar en forma oficial el paro. La asistencia de médicos en el Hospital Regional y municipios vecinos se ve afectada por la movilización del personal.

Jueves 15

Unos 40 artistas que estaban en contra del proyecto de Ley del Músico Profesional se manifiestan frente al Congreso para presionar por la no aprobación del proyecto. Logran su objetivo cuando los senadores por unanimidad votan por el rechazo. La Cámara de Diputados había votado a favor de la ley, lo que movilizó a los músicos. El proyecto había sido impulsado por la Asociación de Músicos del Paraguay (AMP), cuyo presidente es César Burián. Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es que los intérpretes no podrían trabajar sin un carné, que sólo la asociación iba a tener la potestad de otorgar si es que se aprobaba la legislación. La senadora Rocío González, expresa: “Me parece muy grave este punto. Quiere decir que si un músico no tiene el carné no va a poder trabajar y el que le contrata recibirá una multa. Para tener carné tiene que ser socio de la Asociación de Músicos del Paraguay, ¿y quién va a regular a este ente? Ni siquiera se sabe quiénes son los que van a estudiar el caso de si uno es músico o no”, cuestiona. Los músicos expresan su satisfacción por el logro obtenido.

Viernes 16

Docentes y padres de la escuela María Auxiliadora, que funciona en la capilla del mismo nombre, en el distrito J. Augusto Saldívar, Central, se movilizan frente al local del juzgado local para exigir al juez Leonardo Ledezma que abra el lugar. La institución fue cerrada por un equipo pastoral que trabaja en las instalaciones. La escuela se instaló en ese sitio por autorización del arzobispo de Asunción, monseñor Pastor Cuquejo, y el párroco local, James Feehan. Según indica la profesora Lucía Duarte, los niños dan clases en la calle. Indica además que el MEC autorizó la habilitación de la escuela en la capilla. Abel Ovelar, secretario del grupo pastoral, comenta que no están en contra del funcionamiento de la escuela, sino que existe un comunicado del arzobispado de que la capilla no reúne las condiciones adecuadas para el funcionamiento de un centro educativo.

Sábado 17

Unos 150 pobladores de la ciudad de Areguá, Central, se suman a la “sentata” iniciada hace una semana por cinco ediles municipales en repudio a la instalación de vertederos ilegales en las faldas del cerro Chororí. Varios concejales municipales denuncian que el intendente, Osvaldo Leiva, del Partido Colorado, presentó un proyecto de relleno sanitario para cerrar varias cárcavas –erosión del suelo hecha por el agua en el cerro Chororí. Como consecuencia, los barrios Brisas del Lago y Las Mercedes están inundados de basura domiciliaria. La fiscalía del ambiente inició una investigación

por “supuesto hecho punible de procesamiento ilícito de desechos e infracción”, mientras que la Secretaría del Ambiente (SEAM) abrió un sumario administrativo al jefe comunal y ordenó el traslado de los desechos. El director general de planificación de la comuna, Juan Romero, señala que el proyecto de relleno sanitario tiene como fin solucionar los problemas de erosión en el barrio Brisas del Lago. Indica que rellenar las cárcavas con basura es más económico que hacerlo con arena, por lo que la institución buscó trabajar con empresas recolectoras de basura. Aclara, no obstante, que el proyecto fue suspendido.

Por coacción e invasión de inmueble ajeno detienen a unos 23 campesinos en la zona de Paso Yobai, departamento del Guairá. El procedimiento se produce tras una intervención del fiscal de Villarrica, Bernardo Elizaur, acompañado de efectivos policiales de la comisaría de la zona San Francisco, Paso Yobai. El hecho se produce en la propiedad de la Sociedad Civil Berthal. Los detenidos son residentes de las compañías San Francisco, Berthal, San Marcos, todos del departamento de Guairá. Durante el operativo el representante del Ministerio Público ordena que las mujeres y niños que se encuentran en el lugar sean liberados, mientras se procede a la detención de los varones.

Domingo 18

Pobladores de la fracción Feliza, de la localidad de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, se manifiestan contra la habilitación de un vertedero municipal. La municipalidad ya cuenta con una resolución de la SEAM que autoriza el funcionamiento del vertedero. Los vecinos aseguran que no permitirán que se arrojen los residuos en su barrio. “Ni enterados estábamos que la intendencia municipal ya había firmado un contrato de arrendamiento por cuatro años con un colono menonita, propietario de un terreno de dos hectáreas donde pretenden arrojar la basura de toda la ciudad. Los vecinos no fuimos consultados en absoluto por el intendente o alguna otra autoridad comunal sobre el proyecto”, señala David Romero, lugareño afectado. La determinación de la Comuna de instalar un relleno sanitario en esa zona causa sorpresa en los pobladores. Los denunciantes indican que irán a la SEAM a pedir una aclaración sobre el motivo por el cual aprobó el proyecto presentado por la municipalidad para instalar un vertedero, a pocos metros de las nacientes de dos arroyos. Los vecinos afectados son 200 familias y viven a sólo 600 metros del futuro vertedero.

Martes 20

La huelga iniciada por la FNTS el pasado 13 de este mes se radicaliza cada día. A la huelga de hambre que realiza desde hace nueve días el pediatra Raimundo González, ahora se suman una doctora y dos enfermeras de diversos centros asistenciales. La medida de fuerza cumple nueve días en la fecha sin visos de solución. Las funcionarias mencionan que no levantarán la medida iniciada hasta tanto las autoridades sanitarias destraben la huelga que se realiza en los hospitales públicos. Los trabajadores reclaman el no aumento de la carga horaria que el Ministerio de Salud quiere aumentar de 12 a 24 horas, además de la firma de contrato que este año aún no se produjo, por lo que ellos se consideran desempleados. También critican que se les sacó una de las dos o tres vinculaciones que mantenían con dicha cartera de Estado. Los gremialistas anuncian que cada día se irán sumando más huelguistas de hambre.

Cinco trabajadores del Frigorífico Asunción S.A. (FRIASA) inician una huelga de hambre frente al Palacio de Justicia de Asunción, en reclamo de un dictamen del ministro de la Corte Víctor Núñez, sobre un pedido de inconstitucionalidad de una orden judicial que eliminó el contrato de los trabajadores, que luego fueron despedidos. Miguel Zayas, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), explica que la decisión de ir a la huelga de hambre obedece a que esta dilación deja indefensos a los obreros. Agrega que “Núñez debe expedirse para que el expediente pase a los otros ministros, para que finalmente se resuelva la legalidad o ilegalidad de la actuación del Juzgado que pisoteó el contrato colectivo”. El conflicto se originó el año pasado y ya derivó en varios despedidos. Los gremialistas habían exigido la libertad sindical y acusaron al FRIASA de poner a los trabajadores en una “lista negra”. Esta situación llevó a la judicialización, pero los jueces aplicaron una suspensión de contrato justificando el despido de los trabajadores. En su momento, el asesor jurídico del FRIASA, Agustín Olazar, justificó el despido del grupo de sindicalistas mediante una orden judicial del magistrado Julio César Centeno. Resalta que estos dirigentes habrían propiciado hechos de violencia entre el grupo en paro y los trabajadores no adheridos a la medida de fuerza.

Pobladores de Yuty, Caazapá, se manifiestan en rechazo a la desmembración del distrito de Yuty para la creación del distrito de 3 de Mayo, cuyo proyecto de ley está en la Cámara de Senadores. Acusan a los diputados Luis Sarubbi, del Partido Colorado, y Wilson Dávalos, del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (PUNACE), representantes del departamento, de buscar la división del distrito. La manifestación de los pobladores de la zona norte de Yuty se realiza en la ruta que une a esta localidad con San Juan Nepomuceno, del mismo departamento en el cruce Capiitindy. Participan los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Senadores, Lucio Vergara (de la Asociación Nacional Republicana, ANR), Óscar Denis (PLRA), Abel Guastela (PUNACE) y Marcial González Safstrand (PPQ). Los pobladores, en su mayoría del norte de Yuty, señalan que nunca fueron consultados sobre el plan de distritación. Indican que los diputados Sarubbi y Dávalos se dedican a hacer proyectos de ley para perjudicar a localidades de escasos recursos económicos. Tanto Sarubbi como Dávalos aseguran que el proyecto de ley se basa en pedidos de la población.

Miércoles 21

Indígenas de la comunidad Yakye Axa, quienes durante 20 años lucharon por la tierra propia, incluso ante los estrados internacionales, ahora que el Estado les adquirió una propiedad, no pueden llegar al lugar por falta de camino. Siguen a la vera de la ruta Pozo Colorado - Concepción. “Desde hace un mes tenemos tierra propia para el asentamiento de nuestra comunidad, pero no podemos mudarnos porque no tenemos un camino transitable hasta el lugar. Nos preocupa esta situación porque la gente está ansiosa de ocupar su tierra y porque ya no queremos seguir viviendo al costado de la ruta”, señala Albino Gómez, uno de los líderes comunitarios. Yakye Axa fue la primera comunidad indígena en denunciar ante organismos de derechos humanos la violación de sus derechos a la propiedad comunitaria. Tras 20 años de lucha por recuperar su tierra ancestral, esta comunidad presentó su caso ante la CIDH, que en el 2005 condenó al Paraguay por la violación de los derechos indígenas. Emplazó al Estado a devolver a Yakye Axa sus tierras ancestrales, acción que se cumplió recién en enero de este año. Sin embargo, a pesar de contar actualmente con tierras propias, la comunidad no puede acceder hasta el inmueble de 11 mil hectáreas adquiridas por el Estado en la zona de Puerto Colón, ubicado a más de 30 kilómetros del asfaltado de la Ruta X “Coronel Rafael Franco”, en el distrito de Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes,

porque no cuenta con acceso terrestre transitable.

Jueves 22

Padres de familia y alumnos de la escuela N° 2203 San José, de la compañía Mbocayá Pucú de Ybycuí, Paraguari, se manifiestan frente a la Supervisión Educativa para exigir la devolución de un rubro. La medida de fuerza que ya lleva tres días está liderada por la Asociación Escolar, presidida por Silvio Gauto. Los manifestantes exigen a la supervisora administrativa, Dalia Estigarribia, la devolución de un rubro docente, que ahora estaría en poder de la supervisión. La escuela está ubicada a 45 kilómetros de la ciudad, en una zona inhóspita; cuenta con más de 90 alumnos desde el preescolar hasta el tercer año y algunos grados van en plurigrados. Sin embargo, Estigarribia expresa que la petición no puede tener el eco deseado, principalmente debido a la muy limitada cantidad de alumnos matriculados. “Si yo firmo el pedido estaré violando los reglamentos; técnicamente no se puede”, afirma la funcionaria. Para buscar la solución más adecuada, los padres deciden dar una tregua de 15 días a la supervisión, con lo cual levantan la medida de fuerza.

Unas mil personas pertenecientes al Movimiento Campesino Paraguayo, integrantes de la MCNOC, el Frente Guazú y otras organizaciones sociales y políticas se manifestaron ayer para exigir a las actuales autoridades de la Itaipú Binacional la ejecución de proyectos de desarrollo social que beneficien a los sectores menos desarrollados del Alto Paraná y Canindeyú. Bloquearon por varias horas la supercarretera a la altura del desvío que conduce a la barrera de entrada de la hidroeléctrica y posteriormente realizan una marcha. Entre las reivindicaciones se menciona la continuidad de los proyectos Seguridad Alimentaria, la reforestación con participación de comunidades campesinas y la asistencia a las Escuelas Agrícolas. Fermín Bobadilla, de la MCNOC, señala que se trata de una movilización legal y justa. Recuerda que la Itaipú Binacional tiene un área de responsabilidad social, sobre todo para acompañar en el ámbito del desarrollo el área de influencia de la zona de embalse, lado paraguayo, en gran parte ocupada por asentamientos y comunidades campesinas. Menciona que un proyecto que recién se estaba ejecutando fue cortado por los actuales administradores encabezados por Efraín Enríquez Gamón, actual director general de la entidad. “Como organización campesina, presentamos un proyecto denominado Seguridad Alimentaria, que busca un desarrollo productivo”, y no simple asistencialismo. Se trata de un proyecto de desarrollo económico social a base de la producción, comenta el dirigente al señalar que apenas comenzó el proyecto asumieron las nuevas autoridades de la binacional y lo dejaron de lado. “Lastimosamente hasta ahora así funcionan las instituciones del Estado. Entendemos que este nuevo director tiene otra línea política de aplicación. Nos da la sensación de que estamos volviendo atrás”, asegura Bobadilla.

Viernes 23

Unos 300 indígenas, en su mayoría niños y mujeres, liderados por Tomás Domínguez y Jorgelina Gómez, llegan a Asunción para exigir tierra, apoyo productivo, camino y atención sanitaria. Se instalan al costado del Ferrocarril, sobre la peatonal de Paraguari entre Eligio Ayala y Mcal. López. En un momento del día intentan entrar en la plaza Uruguaya, pero son persuadidos por los efectivos policiales para no ingresar al espacio público en proceso de enrejado. El INDI promete asistencia, pero pide tiempo. El presidente, Óscar Ayala, explica a los indígenas los trámites que está realizando para cumplir con sus reclamos. Tomás Domínguez, por su parte, expresa: “Vinimos de

nuevo porque ya no queremos mentiras. El presidente del INDI no nos apoya. Nos promete, pero hasta ahora no llega la asistencia”, indica. Domínguez es un indígena que ya accedió a dos terrenos comunitarios –Puentecita y Arroyo Guasu– y acostumbrado a las ocupaciones de la plaza Uruguaya. El grupo que llega pertenece a comunidades de San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema, integrada con los ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes y Miguel Óscar Bajac, declara nulo el fallo de segunda instancia que resolvió la ilegalidad de una huelga emprendida por trabajadores del FRIASA. Según el Acuerdo y Sentencia de la Corte N° 175 del 23 de marzo de 2012, los trabajadores, de forma pacífica, realizaron la medida de fuerza para exigir el cumplimiento del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. La máxima instancia sostiene que se incumplieron los beneficios de “asistencia alimentaria” y “recategorización de profesionales” por parte de la patronal. La Fiscalía dictaminó a favor de los trabajadores. En opinión del abogado de los trabajadores, Juan José Bernis, con el fallo de la corte se debe ordenar la reposición de unos 62 empleados que fueron despedidos del frigorífico, entre ellos 11 con estabilidad sindical. También indica que la patronal debe pagar los salarios caídos correspondientes a 17 meses. A cada uno le corresponden unos 35 millones de guaraníes, en promedio, indica el abogado. La medida de fuerza se inició el 21 de octubre y se prolongó hasta el 20 de diciembre de 2010, y fue realizada por medio de dos sindicatos de FRIASA, según los antecedentes.

Padres de alumnos de la escuela número 504 Sagrado Corazón de Jesús, de Puerto Ybapobó, distrito de San Pedro, San Pedro, clausuran esta institución desde el lunes pasado en protesta por la mala ejecución y la falta de terminación de la obra emprendida por el gobierno departamental. Casi 200 niños quedan sin clases. El plazo establecido fue de 60 días; sin embargo, ya pasaron cinco meses y los trabajos no están terminados, según la denuncia de los padres. Erica Florentín, una de las madres, indica que llegan al extremo de cerrar la escuela y sacrificar a sus hijos, porque el edificio mal construido no ofrece garantías a sus escolares ni a los docentes. Informa que no levantarán la medida hasta tanto haya gente trabajando en el lugar de obras y con el compromiso de rehacer las obras mal hechas. “Acá vamos a estar y aguantaremos hasta tanto haya respuesta a nuestro pedido”, reitera la madre. Por su parte, el ingeniero Aníbal Ayala, responsable de la obra, reconoce que hubo contratiempo en la provisión de materiales, ya que el lugar es muy lejano. No obstante, promete reiniciar las obras desde el miércoles próximo y que concluirá en dos días aproximadamente. El secretario de Educación de la Gobernación de San Pedro, Lasislao Torres, indica que el problema es con la empresa constructora, que no concluyó su tarea aún. Explica que es un antiguo edificio que se trata de recuperar, pero que lamentablemente el presupuesto de 90 millones de guaraníes va quedando corto. Para el secretario de Educación es lamentable que los padres hayan tomado la determinación de cerrar la escuela, ya que hay docentes que quieren trabajar y padres que envían a sus hijos. Destaca que en el fondo hay una cuestión político-partidaria entre colorados de la comunidad.

Domingo 25

Alrededor de 50 carperos abandonan las tierras que estaban ocupando en Ñacunday y se trasladan al distrito de Santa Rosa del Monday, ambos en Alto Paraná, en tierras atribuidas al Banco Nacional de Fomento (BNF), pero que son reclamadas por brasileños. Con este traslado, se abre un nuevo foco de conflicto entre los carperos y los colonos brasileiros. El gobierno dice que la propiedad de unas mil hectáreas pertenece al BNF, pero inmediatamente se presentan dos brasileños de apellido

Lazzarotto que dicen ser los dueños de las tierras y que cuentan con los títulos. Según el abogado de las familias brasileñas, éstas llevan años residiendo en la zona y cuentan con los títulos que los acreditan como dueños. Aún así los carperos se instalan en el lugar.

Lunes 26

Unos 60 funcionarios de la Dirección de Extensión Agrícola y Ganadera (DEAG) llegan hasta el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el objetivo de reclamar más recursos para la asistencia técnica a los campesinos. Un poco más de 36 mil millones de guaraníes es el presupuesto de 2012 de la DEAG, cifra que representa apenas el 6% del presupuesto general del MAG, informa el secretario general del Sindicato de Funcionarios de la DEAG (SIFUDEAG), Ing. Agr. Líder Medina. Explica que debido al reducido presupuesto que se viene ejecutando en la DEAG, la asistencia técnica a los pequeños productores también es ínfima. “El campo está abandonado, no hay asistencia técnica y la producción está muy resentida. Todos los programas agrícolas son botines de guerra de los políticos de turno y de las ONG. Lastimosamente la DEAG está muy debilitada, con el agravante del reinicio fuerte de las internas partidarias”, señala. “Hace seis meses que en la DEAG no tenemos combustibles, no hay remuneraciones extraordinarias como tienen otras direcciones, nuestros salarios están muy desfasados con relación al MEC y a Salud, eso desmotiva a los técnicos”, acota. Los sindicalistas se reúnen con el viceministro de agricultura, quien promete, mediante un acta de acuerdo, dar participación a los dirigentes sindicales en el estudio del anteproyecto de presupuesto para el 2013. También se compromete a potenciar la DEAG.

Los huelguistas de hambre de Salud siguen apostados desde hace ocho días frente al Ministerio de Salud y responsabilizan a la ministra Esperanza Martínez de lo que les pueda pasar, teniendo en cuenta que no hay visos de solución al conflicto. Los directivos de la FNTS intentan mediar para que las mujeres que realizan la huelga de hambre levanten su medida, pero éstas se mantienen en su postura y levantarán la huelga sólo si la ministra les convoca. Piden igualmente, la intermediación de los parlamentarios para que se pueda buscar salida al conflicto. Los trabajadores reclaman menos carga horaria, la no desconstrucción de sus vínculos y que se estudie la ley de la carrera sanitaria. La huelga en los hospitales se inició el 13 de este mes y hasta la fecha no hay acuerdo para levantarla. La ministra de Salud, por su parte, pide a los huelguistas que la depongan atendiendo la situación epidemiológica del dengue. Agrega además que habrá descuento salarial para aquellos que realizan la huelga. “No sé qué vamos a dialogar, pues les pedimos por escrito que nos pasen sus propuestas y no obtuvimos respuesta; ellos quieren que todo continúe igual, pero no se puede”, manifiesta en forma tajante la ministra de Salud.

Los indígenas aché de la comunidad Puerto Barra, del distrito de Santa Rosa del Monday se manifiestan frente al juzgado de Santa Rita, ambos en Alto Paraná. Exigen el retiro de los carperos trasladados por el gobierno a las tierras supuestamente del BNF, pero ocupadas por unas familias brasileñas y también por los indígenas. “Ellos (los carperos) ingresaron a la tierra donde están nuestras raíces, donde cazamos y extraemos miel. En este lugar está un cementerio donde descansan nuestros ancestros y donde mantenemos una reserva natural de 500 hectáreas, de las 800 que tenemos. En las 300 restantes, cultivamos rubros de autoconsumo”, manifiesta José Anegui, uno de los líderes de los aché. Esta comunidad mantiene un convenio con la familia Lazzarotto, propietaria de las tierras ocupadas por los sin tierras, para desplazarse libremente. En el lugar viven 40 familias aché, compuestas por 200 personas, aproximadamente. Tienen su iglesia, su escuela, crían animales

y realizan cultivos mecanizados con ayuda de la Unión de Gremios de la Producción (UGP). Por su parte, Ángel Tatunambia Krajagi, líder principal de la comunidad, dice que le apena que este gobierno, que se había comprometido en asistirles y darles protección, ahora les expulse de sus tierras.

Beneficiarios del programa Tekoporã, de la Secretaría de Acción Social (SAS), de Concepción, se manifiestan en esta ciudad. Explican que desde hace siete meses no perciben los beneficios del Estado. Pabla Caballero, una de las afectadas, señala que desde hace siete meses no reciben la suma de dinero que les fue asignada y que venían cobrando regularmente. Los manifestantes llegan hasta la sede del BNF. De allí se trasladan a la Junta Municipal y posteriormente a la gobernación, donde conversan con el gobernador Emilio Pavón Doldán (PLRA), quien promete hablar con los funcionarios de la SAS para buscar solución.

Unos 200 taxistas de la ciudad de Encarnación, Itapúa, y de distritos vecinos, realizan una marcha por la ciudad contra el sistema de Inspección Técnica Vehicular (ITV) establecido por la Ley 3850, que entró en vigencia desde febrero. Una caravana de más de dos kilómetros parte desde las inmediaciones del puente San Roque González de Santa Cruz hasta el centro de inspección vehicular de la empresa Coarco, ubicado en el km 3 de la Ruta VI. No estamos ajenos a que se nos exija, lo que no aceptamos es la forma, la rigurosidad con que se quiere aplicar una inspección técnica para la que no estamos preparados, sostiene el titular del gremio, Julio García. “Mediante esta manifestación pacífica nos hacemos eco del reclamo del ciudadano común. Nos sumamos al reclamo ciudadano en contra de una medida que algunas autoridades imponen por sus intereses personales, porque no sabemos a dónde va a parar lo que se cobra por la inspección”, reclama. Los manifestantes anuncian que si no se deroga la ley, las movilizaciones se harán con más fuerza en distintos puntos del departamento de Itapúa.

Martes 27

Un grupo de vecinos de la avenida Molas López de Asunción se manifiesta contra la proliferación de proyectos que buscan levantar edificios de gran altura en zonas residenciales. Piden a los ediles de Asunción que se respeten estas zonas, y que no aprueben obras de gran envergadura. Sostienen que las construcciones en altura aniquilarán para siempre la tranquilidad de sus barrios. Con pancartas que portan leyendas como “Arnaldo, cuida nuestro barrio, no lo destruyas” o con cánticos como “Queremos ver el sol, más parques y menos edificios”, los pobladores cierran por algunos minutos Molas López, frente a un edificio que busca aprobación de la Junta Municipal de Asunción. Los vecinos ya se presentaron en varias ocasiones a protestar durante las sesiones de la Junta Municipal, pero no han conseguido una postura clara de los ediles a favor de las zonas residenciales.

Los trabajadores de la salud que continúan con su huelga iniciada el pasado 13 de este mes, cierran por unos minutos la calle Pettirossi, frente al Ministerio de Salud, exigiendo la solución al conflicto que hasta la fecha se mantiene sin visos de solución. Mientras tanto, la huelga de hambre de unos cinco funcionarios también continúa.

Numerosos pobladores del barrio Tablada de Asunción se manifiestan frente a la comisaría 20ª metropolitana, para exigir mayor seguridad. Fue ante el asalto que sufrieron dos víctimas del siniestro del supermercado Ycuá Bolaños. Los vecinos señalan que la zona se convirtió en la

preferida de los delincuentes para perpetrar atracos. Exigen que la policía, además de otros organismos del Estado, marque mayor presencia. La reacción de los vecinos obedece a que en horas de la tarde, una pareja víctima del Ycuá Bolaños fue despojada de 85 millones de guaraníes en asalto por “motochorros”, que eran la última parte de la indemnización por la muerte de una hija de 12 años.

Unos 62 médicos anestesiólogos del Hospital de Clínicas de Asunción inician un paro en los servicios, por lo que son suspendidas 70 cirugías programadas previstas tanto en el Centro Materno Infantil de San Lorenzo como en Clínicas de Sajonia. Los huelguistas exigen a las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) seguir en sus cargos pero sin concurso. Además hablan de que hay profesionales despedidos. El doctor Aníbal Peris, decano de Medicina, explica que para ocupar cargos asistenciales, auxiliares y docentes se deben presentar a concurso, cada dos y cuatro años, lo que permite la transparencia administrativa en la Función Pública. Este año se presentaron en concurso para todas las áreas mil 400 médicos y hay otro grupo que no se presentó, que son los médicos anestesiólogos. “Se niegan a concursar y están creando una serie de inconvenientes en el área asistencial del Hospital de Clínicas”, indica Peris. Las autoridades de Medicina pedirán la calificación de la huelga al MJT, alegando que no fueron comunicados en tiempo y forma de la medida de fuerza.

Un grupo de 160 indígenas marcha desde la antigua Caballería hasta el Ferrocarril en reclamo de víveres. Dicen que permanecerán allí hasta conseguir los alimentos. Los nativos llegaron el viernes para exponer las necesidades que tienen en sus comunidades en materia de salud, educación, documentación, vialidad y tierras, pero no se quieren ir sin llevar víveres. Además, se quejan de no ser alimentados durante su estadía en la antigua Caballería, aunque según el INDI se les proveyó de insumos. El presidente del INDI, Óscar Ayala, señala que todos sus pedidos están encaminados, pero la entrega de víveres, colchones y frazadas escapa a las posibilidades de la institución y depende de la SEN. Posteriormente reciben los víveres solicitados de la SEN y retornan a sus comunidades, además de otras promesas, como la reparación de caminos, la construcción de pozos y más víveres para los próximos días. Anuncian que volverán si en 10 días las autoridades no cumplen su palabra.

Jueves 29

Unos tres mil 500 campesinos, mujeres y jóvenes de la Federación Nacional Campesina (FNC) realizan su XIX Marcha en la ciudad de Asunción. Teodolina Villalba, secretaria general de la organización, denuncia que el gobierno tiene una política de mendicidad y de asistencialismo que quita la dignidad al campesino y genera mayor pobreza. Denuncia también que el gobierno está dejando en abandono a la mayoría de los asentamientos rurales, sin asistencia para la producción, sin educación, salud, ni servicios básicos que permitan impulsar el desarrollo. Los campesinos exigen la creación de un fondo de garantía de la producción y de un sistema seguro agrícola para los pequeños y medianos productores, que esté basado en índices agroclimáticos. Los manifestantes salen desde el Seminario Metropolitano hasta la plaza del Congreso donde realizan el acto central de su movilización. La FNC asume como un desafío la lucha contra los latifundios, porque este es un grave problema que impide la reforma agraria y el progreso de los campesinos pobres, según sostiene Ermo Rodríguez, de la Corriente Sindical Clasista (CSC). Rodríguez, del sector docente, dice que por culpa del latifundio miles de campesinos están sin tierra, pero que el gobierno no hace nada a favor de ellos. Enfatiza que no es posible que unos cuantos tengan todo en nuestro país,

como educación y salud, mientras la gran mayoría no tiene nada y padece por la carencia. Pide política de producción a favor de los campesinos pequeños productores.

Vecinos del asentamiento San Miguel, del barrio 29 de Setiembre, de Villa Elisa, Central, se manifiestan frente a la municipalidad local para exigir a la Junta la aprobación de planos de la propiedad que ocupan hace 20 años. El intendente Líder Amarilla (PLRA) señala que los planos están correctos y que no comprende la negativa de los ediles.

Viernes 30

Sindicalistas de Salud piden la renuncia del presidente Fernando Lugo y la destitución de la ministra de Salud Pública, Esperanza Martínez, en una manifestación realizada frente al Sanatorio Migone, donde el presidente realiza su tratamiento de rutina contra el cáncer. A la salida, un grupo de 60 sindicalistas de Salud y de otros gremios se presenta frente al citado sanatorio –en la calle Eligio Ayala casi Curupayty– y con altavoces, bombas y batucada critican el abandono del gobierno hacia el sector de la salud. Los sindicalistas exigen: 1) la reposición de los médicos contratados, entre ellos el Dr. Carlos Cubas (quien estaba presente en la manifestación); 2) la flexibilización de los derechos de los trabajadores; y 3) una solución a la falta de atención de los servicios públicos de la salud. También le cuestionan a Lugo que realiza todo su proceso de tratamiento contra el cáncer linfático en el Hospital Sirio-Libanés de São Paulo y en el Migone, y no en el Hospital Nacional del Cáncer del país, para no conocer la realidad de los hospitales públicos que carecen de infraestructura e insumos por negligencia gubernamental.

Pobladores del distrito RI 3 Corrales, Caaguazú, realizan una manifestación para exigir el cese de la exploración y explotación minera en la zona. La movilización se realiza frente a la Municipalidad para solicitar la intervención de las autoridades nacionales y de la Fiscalía del Ambiente. Según la denuncia, los pozos y arroyuelos de la zona se van secando a consecuencia de las desmedidas excavaciones realizadas en diferentes puntos del distrito. Una de las pobladoras, Zunilda Fretes, denuncia que las autoridades locales, departamentales y nacionales han permitido que empresas multinacionales inicien excavaciones destruyendo las nacientes y dañando el medio ambiente. “No sabemos lo que hacen. Vienen camiones y llevan en cajas no sabemos qué y tememos que la explotación perjudique a nuestra naturaleza y, sobre todo, a nuestra salud”, expresa. Según el concejal Jorge Ramírez (PLRA), las perforaciones se iniciaron hace 30 años. Desde entonces han llegado diferentes empresas multinacionales en busca de uranio u otro mineral. Señala que la Junta Municipal desconoce toda negociación existente con la empresa *Piedra Rica Mining S.A.*, que subcontrata a otras firmas para las tareas. “Esta empresa empezó nuevamente con los trabajos desde los últimos meses del 2011 y no sabemos quién es su representante”, expresa Ramírez.

Sábado 31

Un grupo de jóvenes, integrantes del PPQ, ciudadanos independientes y miembros de la Asociación Fuera Lista Sábana del Paraguay, se manifiestan en la Plaza de la Democracia en repudio al aumento presupuestario otorgado al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), asegurando que los cerca de 50 millones de dólares serán utilizados con fines proselitistas para contratar operadores políticos. Gritando “se va a acabar, la corrupción del Congreso Nacional”, los jóvenes exponen carteles, alegando que continuarán con medidas de presión similares para evitar que el Senado

ratifique el reajuste de 150 mil millones de guaraníes destinados a la inscripción para el voto en el exterior, además de los 65 mil millones de guaraníes para contratar a más “inscriptores”. “La ciudadanía no es estúpida”, exclama Carlos Bécker, titular del Equipo Joven de PPQ, encabezando el escrache a los 55 diputados que apoyan el aumento.

Unas 10 personas de la Asociación de Amas de Casa y Trabajadoras de la ciudad de Villarrica, Guairá, acampan frente a la sede de la Compañía de Luz y Fuerza Sociedad Anónima (CLYFSA). Exigen que el gobierno establezca que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encargue de la distribución de la energía en la capital del Guairá, que está a cargo de la empresa privada. Denuncian que la empresa supuestamente no quiere proveer a las personas de escasos recursos de la tarifa social. Al respecto, el Ing. Luis María Ocampos, presidente de la firma denunciada, asegura que la manifestación no les molestará, “mientras tanto no interrumpan los trabajos de la empresa”. Con relación al precio de la energía proveída, afirma que la tarifa es regulada por ley, por lo que una disminución del costo se tendría que hacer por la vía del Congreso Nacional. Indica además que cualquier persona puede acercarse a la empresa a solicitar la tarifa social. Sin embargo, tienen que reunir los requisitos establecidos en la Ley 3.480/08, como, por ejemplo, ser de escasos recursos y tener un consumo menor de 300 KW/hora con una llave de 16 amperes. A raíz de este problema, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) procede a verificar unos 20 medidores de la empresa en los domicilios de algunos usuarios que denunciaron cobros irregulares, pero el informe del INTN reveló que las lecturas de los medidores son regulares y que no existen las sobrefacturaciones.

Un grupo de personas, que forman parte del movimiento Poder Ciudadano en Acción, se manifiesta en el casco urbano de Ypacaraí –Ruta II– en contra del método de fotomultas por exceso de velocidad que aplica el municipio de esa ciudad desde el año 2008. En la ocasión, constatan muchas irregularidades en la aplicación del sistema. El vehículo utilizado para el procedimiento carece de identificación y era monitoreado por un civil con apoyo de un policía de tránsito. Los ciudadanos también muestran notificaciones de las supuestas infracciones que llegaron meses después, sin la firma de ninguna autoridad de Tránsito de la Municipalidad ni la de un testigo que corrobore la falta, lo que vuelve nula el acta. Las multas llegan al millón 400 mil guaraníes, de los cuales apenas 300 mil van a las municipalidades, lo que puede entenderse como un “negocio” para la empresa Sertran –implementadora del sistema–, que lleva el resto de cada falta. Cuestiona que sea la Comuna la encargada de multar en esa zona, ya que según la ley la fiscalización del tránsito en las rutas es competencia de la Policía Caminera. El intendente de Ypacaraí, Fernando Negrete, da explicaciones contradictorias. Señala que constitucionalmente les correspondía multar a conductores infractores por ser un tramo urbano, y que, sin embargo, la ley es clara en que las rutas nacionales están a cargo de la Policía Caminera, dependiente del MOPC.

Glosario de siglas

AMP	Asociación de Músicos del Paraguay
ANDE	Administración Nacional de Electricidad
ANR	Asociación Nacional Republicana
BNF	Banco Nacional de Fomento
CAJUBI	Caja Paraguaya de Jubilaciones de la Itaipú Binacional

CAP	Coordinadora Agrícola del Paraguay
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CLYFSA	Compañía de Luz y Fuerza Sociedad Anónima
CNT	Central Nacional de Trabajadores
CSC	Corriente Sindical Clasista
CSJ	Corte Suprema de Justicia
DEAG	Dirección de Extensión Agrícola y Ganadera
EBY	Entidad Binacional Yacyretá
FNC	Federación Nacional Campesina
FNTS	Federación Nacional de Trabajadores de la Salud
FRIASA	Frigorífico Asunción S.A.
INDERT	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra
INDI	Instituto Nacional del Indígena
INTN	Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
IRP	Impuesto a la Renta Personal
ITV	Inspección Técnica Vehicular
LUCHA	Federación Libertad y Unión de Choferes en Acción
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
MJT	Ministerio de Justicia y Trabajo
MOPC	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
MSPyBS	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
OLT	Organización de Lucha por la Tierra
P-MAS	Partido Movimiento al Socialismo
PLRA	Partido Liberal Radical Auténtico
PPQ	Partido Patria Querida
PUNACE	Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos
SAS	Secretaría de Acción Social
SEAM	Secretaría del Ambiente
SEN	Secretaría de Emergencia Nacional
SFP	Secretaría de la Función Pública
SIDEHC	Sindicato de Enfermeras del Hospital de Clínicas
SIFUDEAG	Sindicato de Funcionarios de la DEAG
SITRASAP	Sindicato de Trabajadores de la Salud del Alto Paraná
TSJE	Tribunal Superior de Justicia Electoral
UCN	Unión Campesina Nacional
UGP	Unión de Gremios de la Producción
UNA	Universidad Nacional de Asunción

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Paraguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinación: Quintín Riquelme.

Relevamiento: Justino Romero.

Sistematización: Elsy Vera.

Fuentes: diarios Abc Color y Última Hora.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Paraguay

Abril de 2012

Editada en agosto de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1135

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Paraguay***



Integrantes	Quintín Riquelme Justino Romero Elsy Vera
Fuentes	diarios ABC Color y Última Hora

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Paraguay

Cronología del conflicto social

Abril de 2012

Domingo 1

Integrantes de la filial Alto Paraná de la Asociación de Funcionarios, Empleados y Operarios de Telecomunicaciones (AFEMOT), realizan una manifestación frente a su local en Ciudad del Este para oponerse a la venta del mismo. La venta del local fue determinada en una asamblea celebrada en Asunción el 23 de febrero pasado. El tesorero de la central de AFEMOT, Néstor Báez, argumenta que el gremio está sin dinero y que para salvarlo de la quiebra recurren a la venta del inmueble en Ciudad del Este. Ante la acusación hecha por sus compañeros de que la sede de la AFEMOT en Asunción ya fue hipotecada como parte de un negociado, Báez niega que el predio esté gravado en algún banco de plaza. “Porque no queremos recurrir a eso es que planteamos a la asamblea vender este terreno y se aprobó en febrero pasado”, agrega.

Martes 3

Un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud, agremiados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS), se manifiesta en las esquinas del Palacio de Gobierno. Los huelguistas intentan ingresar hasta la explanada del palacio, pero efectivos de la Policía Nacional les impiden el paso, por lo que hay forcejeos con los gremialistas, que se quedan en ese lugar buscando llamar la atención del presidente Fernando Lugo. Los huelguistas de hambre, Dr. Raimundo González y la Lic. Lourdes Saldívar, se acuestan en el medio del asfalto caliente y deciden incluso dejar de ingerir líquido hasta tanto se busque una salida al conflicto. Las funcionarias Carmen Alonso y Sandra Benítez ingresan al palacio y conversan con el asesor jurídico de Lugo, Roberto Salomón, quien les informa que la ministra Esperanza Martínez y el ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, les recibirían en el gabinete de Salud. Sin embargo, la ministra de Salud anuncia que no les va a recibir hasta que decidan levantar su huelga. En la ocasión, los trabajadores califican de insensible a la titular de Salud, pues se cumplieron 16 días de la huelga de hambre y 20 días de la huelga general en los hospitales. Ellos reclaman la disminución de la carga horaria. Ante la falta de diálogo y de solución a la crisis, los miembros de la federación están analizando la posibilidad de que los cinco funcionarios huelguistas levanten la huelga de hambre “por lo menos por humanidad, porque ya están todos descompensados”, indican.

Miembros de la coordinadora de ex trabajadores de Itaipú, de organizaciones sociales y de derechos humanos se manifiestan frente a la entrada de Itaipú, en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. Piden el cambio de orientación política de la entidad y la salida de referentes de la dictadura stronista. Los manifestantes reclaman la salida del director general Efraín Enríquez Gamón, el director técnico José Sánchez Tillería y el director jurídico Diego Bertolucci V. También protestan por la no aprobación de proyectos sociales a favor de la población, enmarcados en el proyecto del gobierno de Lugo, como ser la soberanía alimentaria, entre otros. Exigen reencauzar la marcha institucional hacia la línea política trazada en el plan de gobierno desde abril de 2008.

Un grupo de manifestantes cierra momentáneamente la ruta que une la ciudad de Ayolas con Yabebyry, Misiones, exigiendo al gobierno que el trayecto de 24 kilómetros sea asfaltado. Los pobladores dicen que están cansados de las mentiras de las autoridades y del pésimo estado de la

vía. La protesta es convocada por la comisión pro asfaltado y están presentes los diputados departamentales Juan Roberto Espínola, de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado (ANR) y Hugo Capurro, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). También concejales municipales de Ayolas y Yabebyry. “Las movilizaciones seguirán hasta que lleguemos al objetivo, que es lograr el asfaltado de la ruta”, asegura Ramón Ríos, lugareño. El poblador señala que el tramo está intransitable y que la comunidad de Yabebyry hace décadas se encuentra aislada por la falta de una ruta en buen estado.

Padres y alumnos del colegio Gral. Bernardino Caballero, ubicado en la Zona Sur de la ciudad de Fernando de la Mora, Central, se manifiestan contra la designación de la nueva directora, Lic. Nimia Dávalos, designada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). La docente ganó el concurso de méritos y aptitudes. Los manifestantes exigen que el profesor Jorge Riveros Rodas, quien se venía desempeñando como encargado del despacho, continúe al frente de la institución. César Ropon, padre de familia, señala que en la institución se hicieron dos asambleas y, por mayoría, decidieron pedir al MEC que el profesor Jorge Riveros siga al frente del colegio. Ante la férrea oposición de la comunidad educativa, el supervisor administrativo del MEC, Lic. Sergio Huber, y las supervisoras pedagógicas, María Benítez y Nimia Dávalos, labran un acta y se retiran del lugar.

Los sindicalistas de la Corriente Sindical Clasista (CSC) protestan por las penurias que sufren todos los días los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). Anuncian que la acción sindical por un mejor servicio médico se extenderá hasta que se solucionen los inconvenientes en la previsional. Los miembros del gremio denuncian frente al Hospital Central del IPS la falta de medicamentos, los maltratos y humillaciones, las largas esperas en el *call center*, la suspensión de los turnos en ventanillas y la demora excesiva en las consultas. En medio de pancartas de protestas, el líder de la CSC, Eduardo Ojeda, destaca que la política de incremento de asegurados implementada por el IPS desde hace tres años debía ir acompañada de mejoras en las instalaciones y de un refuerzo de los profesionales médicos, para evitar el rebasamiento total del servicio que se da en la actualidad. Una encuesta realizada por la CSC durante 45 días en las instalaciones del IPS reflejó que el 60% de los asegurados se queja por la falta de medicamentos, mientras que el 35% manifestó que sufrió la ausencia de médicos y el maltrato verbal de enfermeras y funcionarios.

Miércoles 4

Fuentes sindicales de la Cooperativa Universitaria (CU) denuncian un despido casi masivo de empleados de la entidad, hecho del que responsabilizan al sector oficialista liderado por Jorge Cruz Roa. El pecado de los afectados sería el de simpatizar, supuestamente, con grupos de oposición. La lista inicial incluye a 26 trabajadores. Pese a los intentos, no se pudo obtener la versión institucional. Los afectados señalan que los despidos son sin causa justificada, lo que refuerza la idea de que se trata de una revancha del movimiento oficialista. Por ahora la única determinación que ha tomado la mayoría es la de no firmar la notificación, pero la cooperativa ya les ha comunicado que su liquidación de haberes estará disponible en el Departamento de Recursos Humanos a partir de la fecha.

La FNTS decide continuar la huelga iniciada en los hospitales, hace más de 20 días, tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud. No obstante, se levanta la huelga de hambre realizada por unos cinco trabajadores. El Dr. Abdón Villamayor, presidente de la FNTS, señala que tras intentar

negociar con los representantes de Salud Pública no se llegó a un acuerdo, por lo que seguirá la medida de fuerza iniciada hace unos 22 días. “Nosotros estamos dispuestos a negociar”, enfatiza el galeno. El reclamo del gremio consiste en la disminución de la carga horaria y la recontractación de unos 256 profesionales de blanco. Por su parte, la viceministra de Salud, Raquel Escobar, señala que están abiertos a poder hablar cuando los profesionales levanten la medida de fuerza. Escobar señala que la huelga no tiene consistencia y remarca que “se dio como nunca un aumento salarial en el sector salud”. En este sentido, destaca que lo que están haciendo es ordenar la casa, mediante el establecimiento de nuevas cargas horarias.

Sábado 7

Vecinos de la ciudad de Guayaybí, San Pedro, se manifiestan para exigir a la fiscalía y a la Secretaría del Ambiente (SEAM) el traslado o eliminación de los desechos tóxicos que están “guardados” en el depósito del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Los pobladores afirman que el fuerte olor que emanan los químicos, por no estar bien resguardados, son una bomba de tiempo para toda la zona. Según los vecinos, en el depósito habría unas 13 toneladas de remanentes de semillas de algodón vencidas e inoculadas con químicos, además de tubos matapicudo almacenados desde el año 2001, que cada año van creciendo en cantidad debido a que los productores devuelven los tubos sobrantes. Lucina Delgado, una de las vecinas afectadas, indica que a raíz del fuerte olor, muchos niños y personas adultas sufren dolores de cabeza y náuseas. Asegura que es un problema de larga data, pues desde hace 11 años se guardan en el depósito los remanentes venenosos. La vecina afirma que ya han recurrido a todas las instancias, como la SEAM, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el propio CAH, pero siguen sin respuesta. El jefe de la oficina regional del CAH, Lic. Julio Lugo, manifiesta que la salida al inconveniente escapa a sus posibilidades y que solamente la SEAM puede ordenar qué hacer de los desechos.

Nativos de la parcialidad mbya guaraní siguen asentados a la vera de la Ruta VII “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia”, en el kilómetro 135, en cercanías del IPS en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. En el lugar se mantiene un promedio de 10 a 15 familias, que llegan con el objetivo de luchar por un pedazo de tierra para cultivar. Eduardo Domínguez, uno de los líderes, informa que en el lugar existe un promedio de 50 niños de hasta siete años, que deben soportar adversidades meteorológicas en la extrema pobreza. Según el líder, el culpable de la mala condición de vida de los nativos es el gobierno nacional. Argumenta que seguirán en el lugar como único recurso para conseguir la atención y el respaldo de las autoridades nacionales.

Lunes 9

Unos cien indígenas de la parcialidad Toba Qom de la localidad de Cerito, Presidente Hayes, se manifiestan a la altura del kilómetro 49 de la Ruta Transchaco para reclamar a la SEAM la aprobación de la licencia ambiental del proyecto de aprovechamiento sustentable de animales silvestres. Los nativos realizan cortes intermitentes sobre la vía. María Domínguez, líder de la comunidad Santa Lucía, explica que hay unas 120 comunidades indígenas de los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, que están a la expectativa desde hace unos ocho meses, esperando la respuesta de la secretaría estatal sobre el proyecto. Relata que en varias ocasiones concurren a la SEAM para conversar con el titular, Óscar Rivas, sobre el tema. Sin

embargo, nunca fueron recibidos. Domínguez indica que los aborígenes utilizaron durante años la caza de los animales silvestres como principal medio de subsistencia, pero ahora todos dependen de la licencia ambiental.

Martes 10

Un grupo de vecinos expulsa del asentamiento Santiago Luis Franco, del distrito de Simón Bolívar, Caaguazú, a la abogada Blanca Aranda, al topógrafo Odilón Valdez y a un funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra (INDERT), quienes en esos momentos estaban reunidos con dirigentes campesinos de la zona. En medio de altercados verbales entre vecinos, la intendenta Nilsa Hidalgo pide explicaciones a los funcionarios, quienes sin contar con algún pedido de intervención en las propiedades de la zona llegan en horas de la noche al asentamiento junto con quince campesinos de otra ciudad para la reunión realizada en una vivienda particular. Menciona que ella no fue comunicada del procedimiento y que muchos de los campesinos que llegan son transportados en una camioneta alquilada por Itaipú Binacional al servicio del INDERT, según explica.

La Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI) denuncia que un grupo de campesinos, instigados por políticos colorados y liberales de Caaguazú, están desplazando a los indígenas de la comunidad Paraje Puku, quienes estaban ocupando una propiedad que les adjudicó el INDERT. El inmueble de mil 65 hectáreas se encuentra en el distrito de San Joaquín, departamento de Caaguazú. La propiedad fue adjudicada a los nativos por Resolución 195/12 del INDERT en enero del presente año. Según la ONAI, el artículo 64 de la Constitución, así como la Ley 2654/2005, favorecen a la comunidad; sin embargo, de las mil 65 hectáreas que les corresponden actualmente sólo 20 son habitadas por las familias indígenas, debido a la ocupación masiva y progresiva de los campesinos desde el 2005. Los nativos solicitan la intervención del Estado para frenar las incursiones y que el INDERT Regional defienda sus intereses, porque ya fueron adjudicados con esta propiedad. En ese sentido, ya han acudido al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que ha iniciado los trámites para el desalojo y garantizar la propiedad a favor de los naturales. En la comunidad Parahe Puku viven cerca de 50 familias, con más de 150 personas.

Un grupo de funcionarios del *call center* del IPS se manifiesta frente a la sede de la previsional, en rechazo a las modificaciones previstas para el servicio. A fin de mejorar el saturado sistema de agendamiento de consultas médicas, el doctor Luis López –presidente de la institución– expresa su intención de modificar el horario de recepción de llamadas, suspendiendo el horario nocturno. Esto debido a que la mayor demanda telefónica se registra en horas de la mañana y la tarde, pero se reduce considerablemente a partir de las 22hrs. Tras conocer el plan, un grupo de funcionarios del servicio de *call center*, específicamente los que cubren el turno de 22 a 6hrs, expresan su desacuerdo con la medida, debido a que pone en riesgo su puesto de trabajo, alegan. El perjuicio para el grupo de trabajadores sería enorme, ya que no sólo tendrían que cambiar su horario habitual de trabajo, sino que además de área, indican los manifestantes. Alegan que este último cambio representaría un problema, debido a que muchos de ellos tienen algún tipo de discapacidad. Trabajadores y directivos no llegan a un acuerdo, por lo que la discusión sobre el tema continúa.

Miércoles 11

Pobladores de San Lorenzo, Central, se manifiestan para exigir a los diputados que aprueben el pedido de intervención de la municipalidad local. Se habla de un faltante de 12 mil 500 millones de guaraníes en la administración de Albino Ferrer (ANR). La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que la administración municipal, a cargo del intendente Albino Ferrer (ANR), no presentó los documentos respaldatorios de gastos realizados por más de 12 mil 573 millones de guaraníes durante el ejercicio 2008. Basado en la irregularidad, el ente contralor solicitó la intervención de la comuna. “Esperamos que los diputados conformen ya una comisión para que puedan tratar el pedido, así como lo hicieron con la Gobernación de Misiones, que fue intervenida. Además, el intendente sigue sin atender los reclamos de los vecinos en materia de medio ambiente; por ejemplo, habilitó de nuevo el matadero”, afirma Julio César Benítez, ex candidato a intendente por el PLRA. Agrega que el servicio de recolección de basura es muy caro y que en contrapartida la prestación es pésima en los barrios. Recuerda que la comuna convierte en vertederos clandestinos de basura a numerosos baldíos, que incluso fueron intervenidos por la fiscalía María Bernarda Álvarez.

Alumnos y padres de la Escuela Cristo Rey de la compañía Panchito López, distrito de Yabebyry, Misiones, realizan una protesta frente al local escolar en exigencia de que se les devuelva un rubro de docente que el MEC decidió llevar a otra comunidad. Los padres informan que el Prof. Raúl Amarilla dejó la escuela y se llevó consigo el rubro que pertenece a la institución. El coordinador de supervisores de Misiones, Lic. César Silva, aclara que los rubros son del Estado y no de una institución. Señala que no habría problema para reponer el rubro y justifica que el Prof. Amarilla tuvo que trasladarse por un problema personal.

Viernes 13

Los funcionarios de Ciudad del Este, Alto Paraná, agremiados al Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE), realizan una huelga en repudio al incumplimiento del reglamento interno y del contrato colectivo por parte de la entidad, administrada por el ingeniero Alex Duré. Los usuarios que no sabían de la medida de fuerza acuden a la institución para pagar sus facturas, pero permanecen en las largas filas debido a que es habilitada una sola ventanilla. Ambos sectores empiezan a vociferarse y casi llegan a los golpes, hasta que intervienen agentes de seguridad privada de la ANDE.

Funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (SINTATTEL), se manifiestan frente a la sede central de la empresa para exigir su mejoramiento económico. Mientras un grupo se manifiesta frente al edificio, otro se reúne con el titular del ente, Mario Esquivel, y con los directores Nilton Amarilla y Celso Vera. La reunión es a puertas abiertas. Por las pérdidas económicas en 2010 y 2011 los sindicalistas solicitan la declaración de emergencia. Se ofrecen a trabajar domingos y feriados para mejorar la situación financiera de la entidad. Esquivel les explica que la situación se debe al abandono de la empresa por varios años. “Ni siquiera se debe culpar a los ex presidentes sino a la intención privatista de los gobiernos anteriores”, asegura.

Permisionarios del Mercado 4 cierran el cruce de la avenida Pettirossi con Mayor Fleitas como protesta ante el aumento de los cánones que le pagan a la municipalidad de Asunción por el uso del

espacio público. Según los manifestantes, la municipalidad no les comunicó sobre la nueva disposición que afecta a los trabajadores, por lo que deciden manifestarse de esa manera, en horas donde el tránsito por la avenida se encuentra más saturado. Aldo Pérez, de la Asociación de Permisionarios y Comerciantes del Mercado 4, cuestiona el reajuste del canon señalando que la Comuna recauda más de 300 millones de guaraníes al mes y que eso no se invierte en el local municipal. Señala que los vendedores tienen mucha competencia con el crecimiento de los supermercados y centros de compras, y que el reajuste del tributo de alguna manera impactará en la economía de los afectados. Finalmente se levanta la medida, luego de que el director del lugar, Iván Arévalos, se comprometiera a seguir cobrando el mismo monto de 2011. Se estima que en el mercado hay más de cuatro mil permisionarios y, en este sentido, el director del centro comercial anuncia que verificará el uso del espacio de cada puesto de ventas. Por su parte, los permisionarios manifiestan que en realidad hay alrededor de cinco mil permisionarios y solicitan que parte del dinero que ellos abonan en concepto de cánones sea reinvertida en el lugar, donde a la fecha sólo funciona un baño público para miles de personas que llegan todos los días.

Continúa el conflicto por el supuesto nombramiento de dos directoras en el turno tarde, en el Colegio Nacional “Juan Manuel Frutos” de la ciudad de Mariano Roque Alonso, Central. Un grupo de alumnos, padres y docentes realiza una manifestación a favor de la Lic. Gladys Diez Pérez. Exigen que la docente permanezca en el cargo de directora, que ocupa desde el año 2004. El problema se desató hace una semana, cuando la Lic. Estela Maris González se presentó junto a autoridades de la Supervisión del MEC para tomar posesión del cargo de directora del turno tarde. La declararon ganadora de un concurso realizado en febrero último; sin embargo los padres y alumnos no la reconocen a la nueva directora.

El sindicato de empleados de la CU acude ante el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) para denunciar despidos masivos y persecución sindical. Los representantes sindicales denuncian que fueron despedidos 26 funcionarios como consecuencia de una persecución sindical y política, ya que 22 de los 26 despedidos pertenecen al sindicato y una de las personas se desempeñaba como dirigente. Los representantes solicitan que las autoridades laborales medien una tripartita con los representantes del Consejo de Administración de la cooperativa. Los empleados despedidos consideran que la medida es a consecuencia de no haber trabajado en la campaña del movimiento oficialista o por pertenecer a otros movimientos. Por su parte, la presidenta de la cooperativa, Marta Sosa, asegura que los despidos son parte de una reingeniería interna y que no serían parte de una persecución sindical como afirman los empleados. Reafirma además que la contratación y desconstrucción es una potestad del consejo.

Unos 400 docentes, que están dentro del convenio entre el MEC y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), exigen durante el paro que duró una jornada el pago de sus salarios atrasados y la firma del convenio para el 2012. Con esta situación, unos 10 mil alumnos de más de 30 instituciones educativas se quedan sin dar clases a raíz de la medida de fuerza. Corresponden a los distritos de Encarnación, Cambyretá, Carmen del Paraná y Coronel Bogado, del departamento de Itapúa. Los docentes, que no cobran sus haberes desde el pasado mes de enero, sostienen que la situación es crítica y dan tiempo hasta el 18 del corriente para que se efectivice el pago. Caso contrario, van a iniciar una huelga por tiempo indefinido. El ministro Víctor Ríos, en su última visita a la ciudad de Encarnación, había manifestado que el convenio ya se había suscripto con la EBY y que los docentes debían seguir trabajando con total tranquilidad durante el 2012. Sin embargo, el documento aún no fue refrendado entre las instituciones, y la EBY no puede entregar los fondos. Dirigentes docentes indican que la principal traba es la duplicación de la cantidad de docentes por

parte del MEC, según datos de la EBY.

Lunes 16

El grupo SOS Patrimonio Histórico de Asunción realiza una sentada en la escalinata de la calle Antequera de la ciudad como medida de protesta ante el rumor de que a nivel parlamentario se estaba preparando un proyecto para demoler este lugar y habilitar en el sitio una vía de circulación vehicular, según Ana Rosa Lluís O'hara, fundadora del citado grupo creado en la red social de *Facebook*. La misma manifiesta que en esta ocasión cuentan con la participación del Instituto de la Imagen, que es del profesor Mario Franco, que también es miembro del grupo. Explica que la idea es preservar el patrimonio modesto de la capital, ya que otros edificios, como la Catedral y el Palacio de López, ya cuentan con un respaldo para su preservación. “Los edificios históricos del centro, por ejemplo, están cayendo y nadie hace absolutamente nada”, expresa. Asegura que realizarán este tipo de actividades todas las veces que sea necesario, con tal de mantener el patrimonio de la ciudad. La Escalinata de Antequera es un ícono de la ciudad de Asunción. Fue inaugurada el 15 de agosto de 1928, durante la administración municipal de Baltasar Ballario, y tiene un monumento dedicado a la victoria de los ideales libertarios de la nación paraguaya.

Alumnos de la Escuela Leopolina Ramírez de la compañía Kyaty, del distrito de Eugenio A. Garay, Guairá, no asisten a clases desde hace tres semanas como medida de presión. Los padres de familia rechazan el comisionamiento de la directora de la institución, Lic. Perla Arriola, a otra escuela de esta localidad. Teófilo Báez, presidente de la comisión de padres, señala que el rubro de directora es de la escuela. Advierte que si continúan estos “comisionamientos”, la institución se cerrará. Por su parte, el supervisor pedagógico del MEC en la zona, Elvio Areco, garantiza que desde la fecha la escuela abrirá sus puertas para que los niños asistan a clases. Anuncia que la Lic. Zulma Ávalos, docente de la escuela, asumirá como directora interina.

Un total de 11 funcionarios administrativos del Hospital Nacional de Itaguá, Central, inician una huelga de hambre en reclamo de que las autoridades respeten la carga horaria de seis horas y el beneficio de insalubridad por el cual vienen percibiendo un *plus*. Los empleados forman parte del Sindicato de Funcionarios Administrativos, que el 13 de marzo se había acoplado a la huelga de la FNTS. Lourdes Saldívar manifiesta que también reclaman la no persecución y sanción a funcionarios plegados a la huelga y que se forme una mesa de trabajo para reglamentar la distribución equitativa y correcta de las bonificaciones y gratificaciones. Otro punto es la devolución de rubros profesionales que consiguieron mediante gestiones en el Parlamento Nacional, y que el nivel central devuelva los rubros que llevaron del hospital. Saldívar señala que la medida de fuerza extrema es hasta tanto se integre una mesa negociadora, para estudiar los puntos planteados.

Unos 80 taxistas de Areguá, Central, repudian la decisión municipal de circunvalación del tránsito en el microcentro de la mencionada ciudad. Alegan que tras el cambio de itinerario de las empresas Cerro Kõi –Línea 11– y La Aregüeña –Línea 111–, disminuyó la cantidad de pasajeros y la recaudación. Los trabajadores se manifiestan en las adyacencias del municipio local y anuncian el cierre de las principales entradas a la ciudad si los ediles no revierten la normativa. Por su parte, los alfareros apoyan la aplicación de la ordenanza porque la consideran una necesidad, debido al aislamiento que sufrían ante la falta de colectivos en los barrios Las Mercedes y San Pablo, en tanto los ediles indican que la ordenanza será modificada en algunos puntos. Pero luego de un consenso

con ambas partes, agregan que los colectivos continuarán ingresando en la zona de los alfareros, por lo cual exigen al intendente Osvaldo Leiva (ANR) la instalación de carteles de señalización.

Dos manifestaciones, a favor y en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se realizan frente al local del Consejo de la Magistratura, mientras los miembros de este organismo están en plena sesión. Hacia un lado de la vereda está un grupo de abogados, entre ellos, miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que reclama el cambio de ministros en el máximo tribunal de la República del Paraguay. Hacia otro lado, pero sobre la misma vereda, están los activistas del gremio de funcionarios del Poder Judicial. Este grupo pide el respeto a la inamovilidad de los ministros de la corte. De repente, ambos grupos intercambian estribillos, pero finalmente no se producen incidentes.

Martes 17

Afectados por la represa de Yacyretá de diez diferentes organizaciones inician una manifestación por tiempo indeterminado para presionar por el estudio de sus reclamos de indemnizaciones por afectación. El 29 de marzo fue conformada una comisión especial en la entidad para el estudio de los casos, pero a un mes todavía no hay resultados, cuestionan. Los manifestantes se instalan en un espacio verde adyacente a las oficinas administrativas de la EBY en el barrio buena vista de la ciudad de Encarnación, Itapúa, donde, aseguran, permanecerán hasta que el ente atienda los reclamos de cada una de las 10 organizaciones de afectados, entre las cuales se encuentran ex empleados de comercio, lancheros, paseras del desaparecido puerto de Encarnación, taxifleteros, vendedores de chipas, entre otros.

Unos cien camioneros paraguayos y argentinos aglutinados en diferentes sindicatos bloquean por alrededor de ocho horas el paso fronterizo de Puerto Falcón, departamento de Presidente Hayes, Paraguay, y Clorinda, Argentina, ante las abusivas trabas de las autoridades aduaneras argentinas. Por más de ocho horas este paso fronterizo es bloqueado por alrededor de cien camioneros paraguayos y argentinos. Los transportistas reclaman el cese de la serie de trabas argentinas, específicamente en la agilización de los trámites aduaneros para el paso de mercaderías. Celfirio Cena, uno de los manifestantes, expresa que anteriormente por el sitio ingresaban más de 200 camiones por día. Sin embargo, en las últimas semanas el ingreso o salida de camiones de Paraguay por la aduana argentina disminuyó a unos 20 camiones diarios. Recuerda que en menos de dos meses ya han realizado como cuatro bloqueos en este paso fronterizo para reclamar la situación. Ante este problema en la frontera, rápidamente se organiza una reunión entre los representantes de los transportistas y las autoridades de la aduana argentina. Del encuentro los camioneros reciben la propuesta de otorgar una prórroga de 72 horas a los aduaneros argentinos para buscar la contratación de más funcionarios para agilizar los trámites en el control, ya que esta fue la excusa por los retrasos en los procedimientos. Los choferes no aceptan esta propuesta en principio, pero luego acuerdan un plazo de 24 horas con los aduaneros argentinos para una solución a este conflicto.

Unas 500 personas, entre quienes hay intendentes de 240 municipios, reclaman el cobro de royalties sin presentar una rendición de cuentas al Ministerio de Hacienda. Esto en el marco de la II Marcha a Asunción por la Descentralización y la Defensa de la Autonomía Municipal que se realiza en el microcentro capitalino. Los jefes comunales cuestionan el hecho de que para acceder a los royalties tengan que presentar previamente un informe financiero de ingresos y gastos, que incluye estos

recursos y las compensaciones transferidas por el Ministerio de Hacienda. Ricardo Núñez, intendente de Villa Hayes y titular de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), afirma que esta presentación de informes es un atropello a la autonomía y a la descentralización de los municipios. En este sentido, los intendentes solicitarán al Congreso Nacional la modificación del Presupuesto General de Gastos en los puntos que versan sobre requisitos para la rendición de cuentas. Manuel Acosta, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, afirma que en el Presupuesto General de la Nación se incluyeron exigencias que no estaban previstas en el proyecto de presupuesto que la cartera de Estado envió al congreso. Las otras reivindicaciones de la marcha son la ley de descentralización, la nueva ley tributaria municipal, la autonomía municipal en el tránsito, la municipalización de las chapas de motos, la competencia municipal sobre las rutas nacionales, la unificación de las licencias de conducir y la infraestructura municipal y su financiamiento para la prestación de servicios de alumbrado público y desagüe pluvial, alcantarillado sanitario y agua potable.

Jueves 19

Camioneros paraguayos apostados en la frontera entre Puerto Falcón, departamento de Presidente Hayes, Paraguay, y Clorinda, Argentina, que iniciaron un bloqueo del paso en el día de ayer, levantan la medida luego de llegar a un acuerdo con la Aduana del segundo país. Tras la lectura de un acuerdo de compromiso de mejorar la atención en el área de control de la aduana de Clorinda, Argentina, los cerca de 200 camioneros paraguayos entre algunos argentinos apostados en Puerto Falcón, Paraguay, deciden levantar la protesta y todas las intenciones de bloquear la frontera entre ambos países. Los choferes denuncian que los largos procedimientos burocráticos surgieron desde la habilitación de un depósito fiscal privado a cargo de la firma Defiba S.A., a unos cinco kilómetros de la frontera con Paraguay y en donde la Aduana argentina tenía previsto llevar todos los controles y despachos. Sin embargo, las autoridades aduaneras argentinas aseguran que los retrasos se estaban dando por la falta de funcionarios. El acta de compromiso lleva la firma de la directora de administración de la Aduana de Clorinda, María Virginia Paredes, el jefe de la Gendarmería Nacional de Clorinda, Ramón Ángel Tejerina, y el titular de la Aduana en Falcón, Justo Pastor Gavilán.

Delegados de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) de diferentes puntos del país marchan hasta el despacho del ministro de Educación, Víctor Ríos, en el microcentro de Asunción. Los docentes reclaman mejor infraestructura en general, mobiliario en buenas condiciones, materiales para los docentes y un plan de capacitación efectivo y sostenido para los maestros, que permita incidir en la mejora de la calidad educativa. También denuncian que los *kits* escolares distribuidos a los alumnos no son eficientes, ya que a muchos lugares llegan tarde y sin todos los ítems.

Funcionarios del Hospital Nacional no logran un acuerdo tras la reunión tripartita realizada en el local del Viceministerio del Trabajo. “Nosotros dimos toda predisposición, pero no logramos ningún acuerdo y la huelga de hambre sigue”, manifiesta Enrique Román, uno de los funcionarios. La huelga de hambre, iniciada el pasado martes 17 del presente mes, se trasladaría hasta el Ministerio de Salud Pública, donde se instalarán en la explanada de dicha institución, anuncia Román. Los trabajadores piden el respeto a los logros obtenidos por los dirigentes del sindicato, como aumentos salariales, al igual que rechazan las ocho horas de trabajo y demandan el aumento de 400 mil a 600 mil guaraníes en concepto de bonificación por insalubridad, según informan.

Más de 200 nativos, entre ellos chamanes, niños y ancianos, se unen a otros 400 nativos asentados en el área metropolitana –los llamados indígenas urbanos– que marchan desde el cerro Lambaré hasta la Plaza de Armas para reclamar sus derechos. La marcha es organizada por el Movimiento de Pueblos Originarios en el marco del Día del Indio Americano. Mario Rivarola, de la ONAI, denuncia que actualmente se produce una migración masiva de nativos a Asunción por causa de la “usurpación de tierras” y la destrucción de los suelos y los bosques. Asimismo, lamenta que estén perdiendo poco a poco su identidad, debido a la desculturización que promueven los “enemigos” de los pueblos indígenas. “Sin su cultura el pueblo desaparece”, afirman. Los indígenas del Chaco, quienes también participan del acto, y que están soportando inundaciones, se quejan de la poca asistencia que reciben.

Alrededor de mil pobladores de la colonia Blas Garay, distrito de Coronel Oviedo, Caaguazú, bloquean en forma intermitente la ruta 7, en el kilómetro 150. Con la medida de fuerza, los manifestantes pretenden exigir a los miembros de la Cámara de Diputados que aprueben el anteproyecto de ley que crea un nuevo distrito en el departamento, con la denominación de Blas Garay, que actualmente es una colonia. El grupo de manifestantes está conformado por representantes de la sociedad civil, maestros, estudiantes y ciudadanía de esa zona. Ellos solicitan independizarse de la capital departamental, Coronel Oviedo, pues aseguran que los recursos municipales prácticamente no llegan a su comunidad. El anteproyecto de ley de creación de distrito de esta comunidad ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Baja. Debía tratarse el tema en la Cámara de Diputados, pero fue pospuesta. Ellos aseguran también que la creación del distrito de Blas Garay ayudará al crecimiento de esa zona del país, que se caracteriza por ser una de las mayores productoras de productos fruti-hortícolas del Paraguay. Los manifestantes marchan hasta el cruce San Antonio, donde se realiza un acto de cierre de la movilización.

Viernes 20

Funcionarios de la ANDE de la ciudad de Encarnación, Itapúa, realizan una medida de protesta por el incumplimiento de algunos términos del contrato colectivo de trabajo. “Esta es la segunda jornada de protesta, lo mismo hicimos el viernes pasado, para exigir el cumplimiento de algunos puntos del contrato colectivo que tienen que ver con ajustes de beneficios”, sostiene el secretario general adjunto del SITRANDE, José Villalba. Los reclamos se refieren específicamente a un ajuste de 150 mil guaraníes que no llega a los funcionarios del interior del país, y que se refieren al rubro de aumento del costo de vida. En la oficina local existen unos cien empleados afectados. Tampoco se paga un plus por peligrosidad, que afecta principalmente a los contratados que realizan tareas en los tendidos eléctricos, y tampoco se cumple con la compensación por cobros de factura, explica el sindicalista.

Los funcionarios de la ANDE de Ciudad del Este, Alto Paraná, paralizan la atención a los usuarios, en protesta por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. El secretario general del SITRANDE, José Pineda, acusa al presidente de la entidad, Alex Duré, de hacer campaña política con el dinero público y de ignorar a los trabajadores. Amenaza con cerrar en forma permanente los servicios de cobranza, emisión y distribución de facturas si para la próxima semana no obtienen respuesta favorable.

Pobladores de la localidad de Puerto Guaraní, Alto Paraguay, se manifiestan contra los directivos de

la empresa Abialor S.A., propietaria de las 27 mil hectáreas donde viven hace más de medio siglo. La protesta es también contra la decisión del Congreso, que sancionó una ley por la cual declara a las tierras en conflicto como reserva privada. El documento pasó ahora al poder ejecutivo. Los sin tierras esperan que el presidente Fernando Lugo decida el veto. Idalino Garcete, presidente de la comisión Pro Tierra de la comunidad, tilda a los diputados de ser unos “vendepatria”, ya que una vez más permitieron que se imponga el poder económico ante las necesidades de los pobladores de esta comunidad. “Esta misma situación lamentable se produjo en 2009 en nuestro departamento, cuando los diputados decidieron hacer desaparecer la localidad de Puerto Boquerón. En aquella oportunidad no fueron capaces de expropiar cien hectáreas para unas 30 familias que durante 50 años vivieron en el lugar, se lamenta Garcete. Abialor S.A., de origen uruguayo, es dueña de unas 27 mil hectáreas. La firma adquirió el inmueble en el 2009 de Prados Verdes S.A., de capital brasileño, según datos. Gran parte de la finca es ocupada desde hace unos dos años por los sin tierra.

Sábado 21

Integrantes del grupo “Movilización Ciudadana” cierran en forma intermitente la supercarretera de Itaipú contra los controles de Sertran Paraguay S.A. Los pobladores de Hernandarias, Alto Paraná, se instalan a unos 300 metros de la entrada a la recepción de visitas de la binacional. Durante la manifestación, los conductores que pasan por el lugar expresan su adhesión con bocinazos. La campaña se inicia a raíz de que la municipalidad de esta ciudad, administrada por Mario Castillo (PLRA), aprobó un contrato con Sertran. La firma realiza controles de velocidad a través de radares móviles. Los manifestantes cuestionan que la fiscalización podría generar multas por exceso de velocidad de hasta un millón 80 mil guaraníes. Consideran que esto se suma a un contrato leonino que había firmado antes la ex intendenta colorada, Carmen Álvarez, por cruce de luz roja, también sobre la supercarretera, cuyos ingresos van a parar en la empresa privada en un 80%.

Lunes 23

En medio de una marcha, horticultores piden a Hacienda la transferencia de 15 millones de guaraníes para el plan productivo del MAG. También hacen reclamos a Aduanas, al SENAVE y al Congreso. Se trata de solicitudes hechas por la Cámara Frutihortícola del Paraguay (CAP) y la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (FENAPROFHP), en busca de mayor apoyo al sector. Al SENAVE solicitan la no expedición de Acreditaciones Fitosanitarias de Importación (AFIDI). A la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), los productores piden una lucha real anticontrabando, ya que los productos extranjeros inundan el mercado local y, en su mayoría, según dicen, ingresan de forma ilegal. Finalmente, los productores van hasta el Congreso Nacional y presentan un proyecto de ley que prevé la transferencia de royalties de Itaipú, de 80 mil millones de guaraníes al año, para un plan productivo frutihortícola.

Unas 12 personas, hombres y mujeres miembros del sindicato de funcionarios administrativos del Hospital Nacional de Itauguá, persisten con la huelga de hambre iniciada desde hace siete días. Los trabajadores del centro asistencial reclaman una distribución más equitativa de las bonificaciones, a la vez que rechazan el aumento de carga horaria. Estos planteamientos ya fueron analizados en una reunión tripartita llevada a cabo entre los huelguistas, representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPy BS) y el MJT. En la ocasión no se llegó a ningún acuerdo, por lo

que el sindicato pedirá una nueva reunión, indica Lucía Rolón, una de las trabajadoras en huelga. “Vamos a pedir una nueva tripartita, con lo que pensamos se va a dar una nueva posibilidad de llegar a un acuerdo”, indica Rolón. La medida no afecta la atención a pacientes en el hospital.

A los gritos, funcionarios judiciales y del Colegio de Abogados piden el desafuero del senador liberal Miguel Abdón Saguier (PLRA) y del diputado Gustavo Mussi (del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, PUNACE), ante la postura de ambos de apoyar la no confirmación de siete ministros de la CSJ. Exigen además a la Fiscalía que los investigue por atentar contra el estado de derecho. El grupo, denominado Vigilia por la República, realiza una ruidosa manifestación a favor de la Corte. Se encuentran frente a la sede de la Escuela Judicial con batucadas y banderas, mientras se lleva a cabo la sesión del Consejo de la Magistratura. Al término de la reunión, los manifestantes critican duramente a ambos legisladores, cuestionamientos que tomaron más fuerza cuando ambos abandonan el lugar de la reunión. Los miembros de la Coordinadora de Abogados, junto con organizaciones sociales y referentes del Partido Tekojoja, quienes están a favor de la remoción de los ministros de la Corte, también realizan una manifestación paralela, pero deciden abandonar el lugar cuando ya la tendencia marcaba que iba a perder la tesis del Senado. Katty González, uno de los referentes, afirma que resuelven dejar el lugar para evitar enfrentamientos con el otro sector a raíz de que la suerte ya estaba echada. Dicen que pierden una batalla pero no la guerra y que continuarán con sus manifestaciones en la plaza ubicada frente el Palacio de Justicia.

Martes 24

La Federación Nacional Campesina (FNC) realiza una protesta frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con objeto de exigir la provisión de camiones para la comercialización del algodón. Teodolina Villalba y Marcial Gómez, secretaria general y secretario general adjunto de la FNC, señalan que la provisión de camiones para transportar la cosecha algodonera de los asentamientos a las desmotadoras fue un compromiso asumido por el MAG al inicio de la zafra, en el marco de un convenio con la federación, que incluye la reproducción de la semilla de la variedad nacional, realizada por los agricultores. Los labriegos lamentan el desinterés del Estado y específicamente del MAG para reactivar la producción agrícola, ya que prácticamente abandonaron a su suerte a los campesinos. La respuesta de la cartera de Estado es que tienen combustible para dos semanas de operación de los camiones, mientras que el gremio de referencia espera al menos tres o cuatro semanas, atendiendo a que se debe trasladar alrededor de 500 mil kilos de algodón. La FNC aprovecha la ocasión para insistir sobre la necesidad de tener un seguro agrícola, porque el pequeño productor está expuesto a situaciones desfavorables, como la sequía y otros fenómenos naturales, que de ocurrir perjudican a cientos de compatriotas. En este caso, la respuesta del MAG es que se estudiará el pedido, aunque las autoridades adelantaron que no tienen presupuesto para solventar un emprendimiento como este.

La CSJ emite su fallo sobre la ilegalidad de las fotomultas y la incompetencia de los municipios de Ypacaraí, Ñemby, Areguá, Central, Yaguarón y Caapucú para controlar el tránsito en las rutas nacionales e internacionales que atraviesan zonas urbanas. La medida de la Corte desata masivos festejos ciudadanos. En Hernandarias, Alto Paraná, y Coronel Oviedo, Caaguazú, los ciudadanos salieron a las calles a festejar lo que consideran una “victoria ciudadana”. Los automovilistas, que forman parte de la Coordinadora Ciudadana de Hernandarias y de Fuera Sertrán realizan una caravana hasta el municipio de esa ciudad, en reclamo “del robo descarado”, según menciona Walter Villagra, coordinador del evento. En las redes sociales, los ciudadanos repudian el accionar

de los intendentes. También hacen énfasis en que el negociado de la empresa Sertrán “por fin se acabó”.

Miércoles 25

Organizaciones civiles se movilizan frente al congreso para exigir la aprobación del proyecto de ley de Fondos para el Desarrollo Social (FONDES) que distribuye la compensación por energía que paga Brasil. La convocatoria es de la Coordinadora Nacional por la Integración Energética y la Soberanía (CONISE). El monto en cuestión ronda los 300 millones de dólares por año. “Realizamos esta manifestación para que verdaderamente la soberanía energética deje de ser beneficio solo para el grupo que está en el poder. Nos parece importante que estos recursos dejen de ser botín de los políticos de turno y sean usados para política asistencialista en las binacionales”, señala Mariela González, una de las integrantes de la CONISE. González añade que de nada servirá que el gobierno se pusiera de pie y la coordinadora lograra conseguir más recursos para el país si estos terminan engrosando la cuenta bancaria de gobernadores, intendentes, empresarios y funcionarios. Los dirigentes se quejan además de que pese a los reiterados reclamos al gobierno y a las entidades binacionales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, no se han conformado las mesas ni campesina ni indígena ni sindical.

Un grupo de 39 familias sin tierra ocupan un terreno de cultivo de maíz en la colonia Naranjito, San Pedro, afirmando que el INDERT declaró “sin dueños” a las fincas, pero que jamás sus funcionarios se hicieron presentes en la zona para la adjudicación de los lotes a los campesinos. El grupo campesino, agrupado en la comisión vecinal de desarrollo de sin tierras de Naranjito, aglutina a 30 familias, y el dirigente Virginio Vera asegura que realizaron varias gestiones, pero que finalmente por la falta de acción del INDERT decidieron “tomar las tierras con cultivo agrícola”. Agrega que han denunciado a la SEAM y a otras instituciones ambientales los delitos en los lotes que ocupan, ya que se echó todo el monte y sólo existen cultivos de maíz y soja sin cumplir con las normas preservacionistas. Por su parte, Ricardo Ayala asegura ser propietario de 60 hectáreas del lote ocupado por los sin tierras, igualmente que explica que la otra parte del terreno pertenece a Víctor Penayo.

Al menos 30 personas se manifiestan cerca de la Comisaría 6ª Metropolitana de Asunción en reclamo de un castigo para el policía Osmar Darío González Caballero, acusado por asaltos y violaciones en serie. Representantes de diversos sectores de la sociedad, especialmente de la Pastoral Social de la parroquia San José Obrero y de la comisión vecinal del barrio Villa Morra, de Asunción, se manifiestan en repudio a la violencia y la impunidad de los hechos delictivos perpetrados, especialmente por agentes del orden público. Los asistentes reclaman un severo castigo para el suboficial inspector Osmar Darío González Caballero, detenido hace una semana tras ser identificado por varias víctimas.

Unos cien usuarios de la Asociación de Campo Comunal de Costa Irala del distrito Quiindy, Paraguarí, se manifiestan frente a la fiscalía local para solicitar al representante del Ministerio Público, Geraldino Casal, el cese de persecución que sufren unos 20 pobladores. Los afectados fueron denunciados por Gustavo Raúl Dos Santos por el supuesto hecho de invasión a la propiedad y coacción. El fiscal asegura que está atendiendo la denuncia presentada por Dos Santos y que “solo porque se manifiesten” no va a suspender la investigación. El denunciante, en marzo último, mediante orden judicial tomó posesión de unas 50 hectáreas de un inmueble, que los lugareños

reclaman como campo comunal. La propiedad habría sido titulada dos veces por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), actualmente INDERT. Esto permitió que se despoje a los usuarios de una parte del campo comunal, según el presidente de la organización, Demetrio Barrios. El director de Campos Comunales del INDERT, Óscar Rodríguez, manifiesta que el ente agrario judicializó el caso, pero la justicia le favoreció a Dos Santos. Alega que esas tierras ya no serán reclamadas institucionalmente y que queda a cargo de los usuarios del campo comunal iniciar un juicio contra Dos Santos.

Pobladores de la Colonia San Alfredo, Concepción, se encuentran en manifestación permanente en contra de la empresa T&C, una de las encargadas de la pavimentación de la ruta que une la ciudad de Concepción con Vallemí, Concepción. Los vecinos explican que a la medida la tomaron debido al incumplimiento de la constructora vial para el asfaltado de la calle principal del asentamiento y la falta de mantenimiento de la ruta que cruza por el lugar, entre otros reclamos. Antonio Mazacote, presidente de la Comisión Vecinal de San Alfredo, señala que el trazado de la ruta que será pavimentada no pasa por la comunidad, sino a 9 kilómetros. Actualmente los responsables de la constructora no permiten que se utilice el camino que ya fue acondicionado para el asfaltado. Entonces se debe seguir utilizando el tramo antiguo, pero es imposible por la falta de mantenimiento. Los manifestantes exigen la presencia de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Unos cien pobladores de Remansito, Presidente Hayes, realizan una manifestación con el objetivo de reclamar la violación de las leyes ambientales por varias empresas instaladas en esta localidad como los vertederos de las firmas El Farol, Sermat S.A., el Frigorífico Neuland y la curtiembre Cencropod Limitada. Mientras, otro grupo de unas 300 personas se manifiesta en defensa de los puestos de trabajo que dan las industrias instaladas en la zona. Ambos grupos se acusan mutuamente de defender intereses ajenos y se enfrentan, lo que obliga la intervención de los efectivos policiales apostados en el lugar.

Pobladores se hacen presentes en la sesión ordinaria de la Junta Municipal de la municipalidad de Asunción para protestar ante la posibilidad de que se concreten proyectos de edificios de más de 20 pisos sobre la avenida Molas López. Los vecinos de la zona exigen que se limite hasta 5 pisos las construcciones sobre esta vía de comunicación. En la fecha, la Comisión de Planificación de la Junta comunal debía dar respuesta al pedido de los contribuyentes, sin embargo la corporación resuelve tratar el polémico tema en su sesión del 2 de mayo, atendiendo a que existe mucha presión de los contribuyentes sobre el particular. Los mismos, de nuevo, se manifiestan ante el pleno para expresar su desaprobación ante la pretensión del Municipio de habilitar edificios de más de 10 pisos. Los manifestantes anuncian que seguirán realizando movilizaciones y manifestaciones, porque consideran que la construcción de estas obras en altura causará serios inconvenientes a la zona donde residen. Entre los problemas que puede traer aparejada la materialización de esos edificios sobre la mencionada avenida citan la sobrecarga en el sistema de desagüe pluvial y cloacal, que no está en condiciones de soportar toda la carga que tendrá a partir de cientos de familias que habitarán el área.

Jueves 26

Periodistas se movilizan en el marco del Día del Periodista en Paraguay. Los reclamos son lanzados por el titular del Sindicato de Periodista del Paraguay (SPP), Vicente Páez, ante el monolito del

periodista asesinado Santiago Leguizamón. La intervención de empresas periodísticas que violan las leyes laborales y evaden el aporte a IPS, el fin de la impunidad y justicia para periodistas asesinados, además de un llamado de alerta ante las presiones vía judicial de grupos de poder para amedrentar a los comunicadores, son los ejes principales del mensaje del gremio. El SPP critica la complacencia del Estado en cuanto a la tolerancia a las violaciones de los derechos laborales y llama a la alerta y movilización para salvaguardar el derecho de la libre expresión.

Viernes 27

Los funcionarios de la Fundación Tesãi de Ciudad del Este, Alto Paraná, inician una huelga que se extenderá por 30 días. La medida fue calificada como ilegal por los gerentes de la entidad, dependiente de la Itaipú Binacional. Los empleados exigen el cumplimiento de acuerdos y denuncian supuesta persecución sindical. El gerente ejecutivo de Tesãi, Dr. Ignacio Iramain, denuncia que contrariamente a lo que manifiestan los funcionarios “hay persecución gerencial”, ya que exigen la destitución de todos los gerentes, supuestamente sin motivo alguno. Resalta que no está especificado con claridad el reclamo de los trabajadores. Los funcionarios piden el cumplimiento de la ley de enfermería en lo referente a la carga horaria del personal de esta área, la situación de los contratos individuales de trabajo y la remuneración adicional para encargados del sector, y cuestionan las sanciones arbitrarias a funcionarios y se refieren a la situación de empresas tercerizadas. Por su parte, el asesor jurídico de la institución, abogado Jorge Romero, señala que no se dejarán chantajear por los empleados.

Taxistas de la ciudad de Curuguaty, Canindeyú, se movilizan contra la intención de la municipalidad de obligarles a usar un logotipo exclusivo expedido por la comuna local. Los socios de la Asociación de Taxistas Unidos de Curuguaty (ATUC) proponen el uso de logotipo con referencia, en una parte del diseño, a las 12 paradas habilitadas para cinco organizaciones dependientes del gremio. La propuesta es para evitar la incursión de “taxis mau” en el distrito, según indican los trabajadores. La propuesta contó con la aprobación de la Junta Municipal; sin embargo, el intendente municipal, Vega Barreto, vetó la determinación de los concejales alegando que todas las paradas deben contar con logotipos identificatorios uniformes, por ser de un mismo municipio. Juan Morínigo, presidente de ATUC, explica que la causa del conflicto iniciado hace meses es que la municipalidad objetó la expedición de la habilitación de los vehículos de los taxistas de la ciudad. El dirigente resalta que la Comuna exige el pago de cien mil guaraníes por cada logotipo, mientras el diseño en uso de las unidades tiene un costo de sólo 32 mil guaraníes. Durante la sesión de la Junta Municipal, los concejales se ratifican en la determinación inicial. Esto obligará al jefe comunal a promulgar en un plazo de 20 días la nueva disposición basada en la propuesta de los trabajadores del volante de esta ciudad.

Alumnos de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), del departamento de Guairá, se manifiestan frente a la sede de la casa de estudios en rechazo de una resolución de los directivos que centraliza los cobros de los aranceles en una sola oficina. Unos 300 estudiantes cortan el tránsito en la calle Cnel. Bogado por un par de horas para exigir que continúe vigente el mismo sistema de pago. Eugenio Román, uno de los dos representantes estudiantiles ante el Consejo universitario, asegura que al centralizar los pagos en un solo local se creará una aglomeración con largas filas de alumnos en la época del año en que se abona por los derechos a exámenes. El Ing. José González, rector de la UNVES, explica que el objetivo es proteger la integridad de los funcionarios, que todas las noches tenían que depositar en la caja nocturna de los

bancos el dinero recaudado durante la jornada. Agrega que quizá revean la resolución, si los estudiantes hacen el planteamiento a través de canales adecuados.

Sábado 28

Dirigentes de la CSC se manifiestan frente a la Caja Central del IPS ante la falta de respuesta de sus autoridades a una serie de reclamos de los trabajadores. Eduardo Ojeda, dirigente, explica que la desidia histórica de las autoridades de la previsual se evidencia en la falta de planes para hacer frente al colapso de todos sus servicios, empezando por el *call center*. “El servicio de agendamientos de consultas por teléfono no funciona. Los asegurados pasan horas o incluso un día entero esperando que algún operador les atienda. Nos hemos quejado de esta situación por todos los canales, pero no hay respuesta”, sostiene Ojeda. “El IPS tiene la vida de los trabajadores en sus manos. Muchos de ellos, y tenemos casos concretos, han perdido la vida porque no recibieron la atención médica necesaria a tiempo”, afirma. Este año, la movilización de la CSC tendrá como eje principal el reclamo por el paupérrimo servicio que brinda el IPS a los miles de asegurados. En ese sentido, instan a la clase trabajadora a estar alerta para iniciar una serie de movilizaciones en reclamo de una mejor calidad en la atención a los asegurados.

Unos cien pobladores de diferentes barrios de la ciudad de Salto del Guairá, Canindeyú, temen ser desalojados de los inmuebles que ocupan. Los afectados se manifiestan frente a la municipalidad y el juzgado para pedir apoyo ante la posibilidad de ser expulsados de sus viviendas. Los propietarios de los terrenos que ocupan iniciaron acciones judiciales para recuperar la posesión. Según el dirigente local del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Fausto Notario, los miembros de la Junta Municipal les brindan su respaldo y se comprometen a declarar de interés social las ocupaciones amenazadas. Agrega que iniciarán acciones para legalizar las ocupaciones, ya que tienen derechos adquiridos por los años de ocupación de los inmuebles. Explica que las demandas concretas son pocas, pero en la ciudad hay más de mil familias residiendo en propiedades privadas, que fueron ocupadas hace más de diez años. En todo ese tiempo, los terrenos fueron vendidos y revendidos en forma irregular, sin que los poseedores de títulos reaccionen. Muchos lugares que hace una década eran considerados impropios para habitar, actualmente están muy cerca de grandes shoppings y galerías, motivo por el que adquirieron gran valor comercial.

Domingo 29

Unos 250 funcionarios del Centro de Operación de Base, Central Acaray, Departamento de Mantenimiento y del Centro Técnico de la ANDE de Ciudad del Este, Alto Paraná, inician una huelga. La huelga afecta también a las agencias de Encarnación, Itapúa, y Pedro Juan Caballero, Amambay. Miguel Ángel Salim, delegado de base de SITRANDE en Ciudad del Este, señala que no se están cumpliendo los beneficios laborales contemplados en el contrato colectivo, tales como el pago por peligrosidad, la ayuda alimentaria y la conversión del cargo de operador a técnico, lo que se traduce en una mejor remuneración. El gremialista destaca que hasta el momento todos los intentos de acuerdos con los directivos fracasaron, por lo que se ven obligados a endurecer la medida para forzar una negociación que les permita alcanzar su objetivo.

Lunes 30

Carperos ocupan una propiedad que se encuentra a unos 3kms de la ciudad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. La propietaria del inmueble es Liz Melgarejo de Silva y el año pasado desalojó del mismo a un grupo de sin tierras y cuenta con un amparo judicial para que nadie ingrese en la propiedad. La ocupación es encabezada por Eulalia Vázquez Pintos, que es detenida por orden del fiscal Víctor Vera Ovelar. Además de la mujer se encuentran detenidos dos hombres y hay orden de captura contra otros nueve carperos, según los datos. La dueña de la propiedad ocupada, Liz Melgarejo, señala que un grupo de 50 personas se encuentran acampadas en la vera del camino frente a la propiedad, listo para ingresar, mientras que otro grupo se dedica a construir ranchos dentro del inmueble y que los policías se niegan a acompañar al fiscal para desalojarlos. El titular de la comisaría tercera de esta ciudad, Cristóbal García, informa que la detención de las tres personas se realiza en el marco del mencionado procedimiento, pero que una orden del Ministerio del Interior era que para el desalojo se tenía que respetar el protocolo de desalojo.

Glosario de siglas

AFEMOT	Asociación de Funcionarios, Empleados y Operarios de Telecomunicaciones
AFIDI	Acreditaciones Fitosanitarias de Importación
ANR	Asociación Nacional Republicana
ATUC	Asociación de Taxistas Unidos de Curuguaty
CAH	Crédito Agrícola de Habilidad
CAP	Cámara Frutihortícola del Paraguay
CGR	Contraloría General de la República
CONISE	Coordinadora Nacional por la Integración Energética y la Soberanía
COPACO	Compañía Paraguaya de Comunicaciones
CSC	Corriente Sindical Clasista
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CU	Cooperativa Universitaria
DNA	Dirección Nacional de Aduanas
EBY	Entidad Binacional Yacyretá
FENAPROFHP	Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay
FNC	Federación Nacional Campesina
FNTS	Federación Nacional de Trabajadores de la Salud
FONDES	Fondos para el Desarrollo Social
IBR	Instituto de Bienestar Rural
INDERT	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra
INDI	Instituto Paraguayo del Indígena
IPS	Instituto de Previsión Social
MAG	Ministerio a Agricultura y Ganadería
MCP	Movimiento Campesino Paraguayo
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
MJT	Ministerio de Justicia y Trabajo
MOPC	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MSPyBS	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ONAI	Organización Nacional de Aborígenes Independientes
OPACI	Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal
OTEP	Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay
PLRA	Partido Liberal Radical Auténtico
PUNACE	Partido Unión Nacional de Ciudadanos Eticos
SEAM	Secretaría del Ambiente
SENAVE	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
SINATTEL	Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones
SITRANDE	Sindicato de Trabajadores de la ANDE
SPP	Sindicato de Periodista del Paraguay
UNVES	Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Paraguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinación: Quintín Riquelme.

Relevamiento: Justino Romero.

Sistematización: Elsy Vera.

Fuentes: diarios Abc Color y Última Hora.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Paraguay

Mayo de 2012

Editada en septiembre de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1154

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Paraguay***



Integrantes Quintín Riquelme
Justino Romero
Elsy Vera

Fuentes Diario Abc Color, Diario Última Hora

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Paraguay

Cronología del conflicto social

Mayo de 2012

Martes 1

Con movilizaciones y concentraciones en varios puntos del país, las centrales obreras conmemoran el Día del Obrero con un reclamo clave: la creación de más fuentes de empleo. En un acto en conmemoración al Día Internacional de los Trabajadores, realizado frente a la sede del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), expresa: “En los discursos dicen que se han creado empleos, pero hasta ahora ni una sola fábrica se ha reactivado, faltan un millón y medio de empleos dignos en el país”, destaca el dirigente. Además del reclamo de más empleos, los gremios expresan su rechazo a la Ley de Mipymes y solicitan un reajuste salarial, la creación de más empleos y la creación de un Viceministerio del Trabajo y Seguridad Social. Del acto también participa la Central Nacional de Trabajadores (CNT). El viceministro de Trabajo, Raúl Mongelós, por su parte, señala que en el segundo semestre de este año presentarán un proyecto de ley que modifica el Código Laboral y que plantea que el reajuste salarial ya no dependa del 10% de inflación como sucede actualmente. Por su parte, una política laboral abarcadora, con más fuentes de empleo, descartando todo asistencialismo “mendicante” estatal como solución, es uno de los principales reclamos al Gobierno realizado por la Corriente Sindical Clasista (CSC), en un acto realizado frente al Panteón Nacional de los Héroes. “El Gobierno apunta al asistencialismo mendicante y no procura generar una política de empleo y de desarrollo”, señala el dirigente Eduardo Ojeda. El evento se realiza luego de una marcha por el microcentro de Asunción. El dirigente sindical plantea la reactivación del sector productivo agrícola-industrial como salida a la desocupación, además de proponer la creación de un “Seguro de desempleo”.

Cerca de 400 personas, integrantes de varias organizaciones civiles, se manifiestan en el microcentro de Ciudad del Este, Alto Paraná, contra los abusos de la patronal, en el marco del Día del Obrero. Los manifestantes obligan al cierre de los negocios que permanecen abiertos, alegando que se debe liberar a los trabajadores para celebrar su día. La convocatoria es realizada por la Asociación de Movimientos Teko Porã Rekávo –buscando un mejor modo de vida– (AMOTER). Bernardino Fernández, uno de los dirigentes, señala que apenas el 5% de los jóvenes que terminan sus estudios secundarios consigue un empleo. “El 95% restante está expuesto a la delincuencia y a la violencia”, expresa.

Unos 50 niños y adolescentes que integran la Coordinadora Nacional de Niños y Trabajadores Adolescentes del Paraguay (CONNATS) piden “no criminalizar el trabajo infantil” con el proyecto de Ley de Protección contra la Explotación Infantil en Lugares Públicos, presentado por los senadores Herminio Cáceres y Zulma Gómez. Una de las manifestantes, Felicia Cabera, argumenta que no todo el trabajo infantil en los espacios públicos se realiza en condición de explotación. “Nosotros defendemos nuestro trabajo. Lo que queremos es una mejora de las condiciones. Esta ley quiere meternos a todos en una misma bolsa”, asegura. Otro proyecto de ley muy cuestionado por la coordinadora es el que presentó el diputado José López Chávez, que quiere reducir la edad de

imputabilidad penal a los menores de edad hasta los 12 años.

Miércoles 2

Funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) se movilizan en protesta por la declaración de cuarto intermedio de la asamblea general ordinaria para la confirmación de autoridades. De acuerdo a las informaciones de fuentes sindicales, el acto se pospuso porque el procurador general de la República, Enrique García, no se presentó a la hora indicada. La razón de su ausencia sería un posible cambio en el directorio de la aguatera del Estado. La destitución de Emiliano Insfrán se debió a una serie de denuncias de los sindicalistas sobre irregularidades tales como el desvío de fondos millonarios para la ejecución del plan verano 2009-2010 y el ingreso masivo de funcionarios –500–, todos simpatizantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), entre otras.

Unos 385 docentes y personales administrativos y de servicios que integran el convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) inician una huelga para exigir el pago de sus sueldos atrasados. La medida de fuerza afecta a unos 5 mil niños de 18 escuelas, en Itapúa y Misiones. “Hay un grupo de docentes que tiene dos meses de atraso, pero el grueso de educadores, el personal de limpieza y mantenimiento de las escuelas y colegios tiene nada menos que cuatro meses de atraso en el cobro de sus salarios”, señala Silvio Piris, representante del gremio. Por su parte, la EBY señala que el 26 de abril pasado aprobó el presupuesto y elevó el expediente al Consejo de Administración para su aprobación final.

Más de 280 funcionarios sanitarios, enmarcados dentro del convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la EBY, de la zona de Encarnación, Itapúa, inician una medida de fuerza para exigir el pago de sus salarios atrasados, que ya llegan a tres meses. Los afectados solo garantizan las atenciones de urgencias en los diferentes centros asistenciales. La medida de fuerza es por tiempo indefinido en esta oportunidad. Los trabajadores argumentan que no existe voluntad política de las autoridades del gobierno y que están jugando con la necesidad de las personas. De acuerdo a las explicaciones de las autoridades sanitarias, el documento entre el Ministerio de Salud y la EBY necesita la firma de la ministra de Salud, Esperanza Martínez, y luego se daría la orden para los pagos.

Jueves 3

Cerca de mil ex trabajadores de la hidroeléctrica Itaipú se manifiestan en el acceso a la entidad, ubicado en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, por beneficios laborales que nunca percibieron. Son ex empleados de empresas contratistas brasileñas, que ingresaron a la entidad desde la década de los '80, según Carlos Eugenio González, portavoz de los manifestantes. Destaca que entre las reivindicaciones figuran el vale de alimentación, el adicional regional –por desarraigo–, el anuenio –que es un adicional del 13% sobre el salario por antigüedad–, el adicional de 66% sobre salarios de vacaciones, el de productividad, del 4%, y la participación por lucro. “Los afectados serían aproximadamente 40 mil paraguayos, que prestaron sus servicios en la Itaipú y no percibieron los beneficios que les correspondían”, puntualiza González. Los diputados María Elva Martínez y César López presentaron el proyecto de ley que compensa a los ex empleados, trabajadores de empresas contratistas y docentes.

Funcionarios de la Administración Nacional de Energía (ANDE) de Ciudad del Este, Alto Paraná, inician una medida de fuerza por tiempo indefinido, en protesta por los nombramientos de dos nuevos jefes provenientes de Asunción. Los manifestantes señalan que con las designaciones se están violando los reglamentos internos de la ANDE. Aseguran que no están en contra de los nombrados, pero que los cargos en Ciudad del Este deben ser cubiertos por gente de la zona.

Viernes 4

Unas 130 familias enxet, de la comunidad Sawhoyamaxa de Pozo Colorado, Presidente Hayes, denuncian talas ilegales de árboles en tierras ancestrales. Los nativos están acampados en el kilómetro 374 para impedir que los rollos sean cargados a los camiones de los madereros. Carlos Marecos, cacique de la comunidad, indica que presentaron una denuncia en la fiscalía del ambiente de Asunción, porque creen que los árboles cortados se encuentran dentro de las fincas que reclaman. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había condenado al Paraguay a restituir las tierras ancestrales a los indígenas de la parcialidad Enxet, de la comunidad Sawhoyamaxa. Además, se impuso al Estado la obligación de asignar un fondo de desarrollo comunitario de un millón de dólares, que deberá ejecutarse una vez que los nativos vuelvan a sus tierras.

Sábado 5

Un grupo de indígenas de los departamentos de San Pedro y Canindeyú llega hasta Asunción y se instala en las inmediaciones de la Plaza Uruguaya. El retorno de los nativos guarda relación con las promesas incumplidas por parte del gobierno, entre ellas la transferencia de tierras y mejores condiciones de vida en sus comunidades, según explican sus líderes. Los mismos señalan que se quedarán en la capital hasta que logren resultados concretos, ya que la última vez que abandonaron la ciudad fue tras la firma de un compromiso interinstitucional para llevar adelante micro proyectos para las comunidades indígenas, además de la instalación de servicios básicos como los de luz y agua. Tres meses después, no hubo respuesta, asegura Daniel Gómez, líder de la parcialidad Ava Guaraní. Adelanta que se aguarda la llegada de dos camiones más que trasladan a más de 200 indígenas provenientes del departamento de Caaguazú.

Domingo 6

Unas 70 familias cuyas viviendas están afectadas por la crecida del río Paraguay en la zona de la Chacarita, conocida como 3 de Febrero, ocupan un inmueble en Asunción. Petrona Álvarez, una de las personas que ingresa al citado predio, explica que a raíz de que no recibieron ayuda alguna por parte del municipio e instituciones del Estado, decidieron instalarse en ese sitio. Toda la gente damnificada se dedica al reciclaje. Por su parte, el intendente Arnaldo Samaniego anuncia que dialogará con este grupo de personas para reubicarlas en el predio de las Fuerzas Armadas en Viñas Cué.

Lunes 7

Unas 25 familias instaladas desde hace 30 años en la plaza Suiza, ubicada en el límite de la

compañía Yka'a y el barrio Bella Vista de la ciudad de Luque, Central, se resisten a ser desalojadas. Cerca de cien policías se presentan en el lugar con una cuadrilla de la Dirección de Obras y Medio Ambiente para llevar a cabo el operativo, pero los residentes se oponen generando breves incidentes. Los vecinos se rehúsan a ser reubicados en las ciudades aledañas a través de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). Luego de largas discusiones y empujones, el asesor jurídico otorga 15 días de tregua a los ocupantes para que despejen el lugar referido. En la plaza se encuentran edificadas unas 15 casas de material y otras 10 de tabla, por lo que los ocupantes se resisten a desalojarla.

Unas cien personas de la tercera edad, integrantes de la Asociación de Adultos Mayores de Hernandarias, Alto Paraná, se manifiestan frente al domicilio del diputado colorado Andrés Retamozo, y luego ante la sede de la Municipalidad local. Los adultos mayores exigen el pago de subsidios que por la Ley 3.728/09 les corresponden. La misma establece que todo paraguayo natural, mayor de sesenta y cinco años de edad y en situación de pobreza, residente en el territorio nacional, recibirá del Estado una pensión mensual no menor a la cuarta parte del salario mínimo vigente, es decir, alrededor de 380 mil guaraníes. Afirman que, a pesar de las promesas, todavía no reciben los beneficios que por la ley les corresponden, y que muchos de ellos ni siquiera pueden seguir trabajando para ganarse el sustento diario. Afirman que en el caso de que las autoridades locales no los ayuden, los mismos pretenden llegar hasta la capital del país.

Martes 8

Más de mil personas integrantes del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y de la Coordinadora Departamental por la Emergencia de Alimentos del departamento de Alto Paraná, así como organizaciones del departamento de Itapúa e integrantes de la Coordinación Nacional de Emergencia Campesina e Indígena del departamento de Cordillera, se manifiestan para exigir el cumplimiento del Decreto 8282/12 del poder ejecutivo, por el cual se establece un plazo de tres meses para la emergencia alimentaria, periodo en el cual el gobierno debe proporcionar alimentos y semillas a las familias más carenciadas. Los campesinos, de varios distritos de la zona noreste del departamento de Itapúa, bloquean el tránsito vehicular. Daniel Duarte, vocero de los manifestantes, expresa que pretenden que el plazo del estado de emergencia se extienda hasta el mes de noviembre, y exigen un plan de reforma agraria integral, que comprenda el desarrollo sustentable de las familias campesinas. El mismo cuestiona la falta de atención, tanto del gobierno central como de los municipios.

Un grupo de aproximadamente 700 adultos mayores de la localidad de Caacupé y Arroyos Esteros, Cordillera, se manifiesta en reclamo de la pensión alimentaria para la tercera edad. Los mismos solicitan el pago de pensión a todos los adultos mayores. Exigen que las personas que tengan 65 años sean beneficiadas y no solo los que cuentan con 80 años y más, como figura en la nueva resolución emitida por el Ministerio de Hacienda.

Unos 50 carperos de la colonia Tres Pinheiros, del distrito de Santa Rosa del Monday, San Pedro, son expulsados de una propiedad de 300 hectáreas perteneciente a los colonos brasileños Maximino y Marcelo Lazzaroto. Los propietarios denuncian la tala de árboles y la faena de animales silvestres en la zona ante la fiscal de Iruña, María del Carmen Meza. Los ocupantes son liderados por el dirigente José Rodríguez, quien manifiesta que en la orden de desalojo no se especifican las coordenadas de la propiedad. Finalmente, un enviado del Ministerio del Interior, Elvio Cousirat,

logra que los ocupantes se trasladen a 500 metros de la propiedad. Como resultado del operativo, cuatro personas son imputadas y cuentan con orden de prisión por delito ambiental.

Más de 60 nativos de la etnia Avá y Mbyá Guaraní procedentes de San Pedro y Canindeyú llegan a Asunción y se instalan al costado del ferrocarril. Según afirman, permanecerán hasta que las autoridades respondan a sus pedidos. Indican que decidieron volver a la capital porque no les cumplieron con ninguno de sus pedidos. Juan Galeano, uno de los dirigentes, apunta que hasta ahora no reciben los proyectos agrícolas ni las mejoras en salud y educación que les prometieron. Además, denuncian a las organizaciones no gubernamentales por “utilizarlos para recibir dinero” mientras que la ayuda que reciben no se reflejan en sus acciones. Seis representantes indígenas presentan al secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, el pedido de destitución de Oscar Ayala, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), y hablan sobre las necesidades en las comunidades. Por su parte, el presidente del INDI, Óscar Ayala, asegura que el ente hace todo lo que está a su alcance para responder a los reclamos.

Unos 50 comerciantes informales de la ciudad de Luque, Central, son desalojados, por cuarta vez en lo que va del año, del paseo central de la avenida Humaitá y de las veredas adyacentes. El operativo es realizado por funcionarios de la comuna local con acompañamiento policial. Los funcionarios municipales indican que los vendedores tienen un local en el mercado municipal N° 2, por lo que no se justifica la ocupación.

Miércoles 9

Simpatizantes de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado (ANR) pertenecientes a la seccional 44 de Asunción, cierran la calle 25 de Mayo, frente a la Junta de Gobierno, en repudio a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que falla a favor de Graciela Bernal y deja fuera de la presidencia de la sucursal partidaria a Julio Javier Ríos. Los seguidores de Ríos atribuyen la sentencia favorable a Bernal, a la amistad que tiene el senador Juan Carlos Galaverna, líder de su movimiento, con el ministro del TSJE, el también colorado Juan Manuel Morales.

Alrededor de 300 personas participan de una concentración ciudadana en la Plaza de los Héroes de la ciudad de Villarica, Guairá. Exigen que la ANDE desplace a la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (CLYFSA), que distribuye el servicio de energía eléctrica en esta localidad. Denuncian que CLYFSA realiza cobros excesivos por el servicio y que sobrefactura los costos reales. A pedido de este mismo sector y con el apoyo del senador Sixto Pereira, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) meses atrás procedió a realizar la verificación técnica a los medidores de CLYFSA, cuyo resultado revela que la empresa no realiza tales sobrefacturaciones.

Alumnos de la Universidad Nacional del Este (UNE) se manifiestan frente al Ministerio de Hacienda de la ciudad de Asunción. Exigen la reposición de 6 mil 400 millones de guaraníes recortados al presupuesto de la universidad en el presente ejercicio fiscal. El presidente de la Federación de Centros de la UNE señala que hace cinco años Hacienda viene aplicando recortes a la universidad, lo cual afecta a programas educativos de las diferentes facultades.

Pobladores y autoridades de la localidad de Cambyretá, Itapúa, realizan un cierre de ruta para exigir seguridad a las autoridades policiales por los constantes casos de abigeos que causan zozobra en la población. Las familias afectadas denuncian que la Policía Nacional realiza el trabajo de capturar a

los sospechosos, pero que sin embargo los ladrones permanecen menos de 24 horas en las comisarías y son nuevamente liberados por el Ministerio Público. La población está muy desanimada a raíz del problema, situación ante la cual algunos productores vendieron sus fincas para trasladarse a otros sitios. Para el jefe comunal la situación es triste, porque no se puede dar una solución ni parcial ni definitiva al tema.

Unos 300 docentes y funcionarios de las escuelas de Encarnación, Itapúa, reclaman el pago de cinco meses de salarios atrasados que está enmarcado dentro del convenio firmado entre el MEC y la EBY. Los manifestantes cierran el acceso al Puente Internacional “San Roque González de Santa Cruz”, que une a la ciudad con Posadas, Argentina. El cierre total del puente internacional se extiende por más de una hora y media, tiempo en el cual se realizan las negociaciones, primero con los efectivos policiales, que exigen la liberación del tránsito en la frontera, y segundo con los docentes, que exigen la presencia de un representante de la EBY quien daría un documento firmado para la solución inmediata del problema. Los docentes también solicitan la renuncia del ministro de Educación, Víctor Ríos, por no dar respuestas a los problemas del sector. Dicen que prioriza las campañas políticas antes que atender temas tan esenciales como la merienda escolar o el vaso de leche y la llegada de los kits escolares en Itapúa.

Jueves 10

Ex obreros de la cantera y de la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú se adhieren a las medidas de protesta iniciadas en el país en reclamo de sus reivindicaciones de la soberanía laboral. Con la consigna “Somos diferentes en nacionalidad, pero iguales en dignidad y derecho”, los ex trabajadores de la entidad binacional inician una manifestación en la plaza Gral. Eduvigis Díaz, de la ciudad de Carapeguá, Paraguarí, y emprenden una marcha por la Ruta N° 1 “Mcal. Francisco Solano López”. La decisión es tomada atendiendo a que hace 23 años que vienen luchando por el cumplimiento del Protocolo Adicional del Trabajo y Seguridad Social, que solo se cumplió con los obreros brasileiros, según indica Esteban Armo, dirigente local. El mismo anuncia que si no reciben antes respuesta del gobierno de Lugo realizarán una concentración nacional frente a la portería de la Itaipú hasta lograr el objetivo.

Unos 400 ex obreros de la Itaipú Binacional se manifiestan en el cruce internacional de la ciudad de Coronel Oviedo, Caaguazú. Justo Rodríguez, coordinador del grupo base de esta comunidad, explica que la movilización es para ir “forzando” el pago a los ex obreros sobre un acuerdo al que llegaron en la mesa de diálogo que se abrió hace más de dos años con los directivos de la entidad binacional. Rodríguez añade que las instancias de conversación prácticamente están agotadas y que los acuerdos ahora deben ser cumplidos. La medida de protesta se irá haciendo con mayor frecuencia hasta que cobren sus indemnizaciones, agrega el coordinador.

Más de 70 nativos cierran la calle Eligio Ayala, frente al ferrocarril de la ciudad de Asunción. Reclaman la presencia de autoridades del INDI con las que mantienen un acuerdo y que no ha sido cumplido por las mismas. Posteriormente marchan hasta las sedes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde exigen el nombramiento de técnicos agrícolas indígenas en sus comunidades. Piden, además, semillas e implementos agrícolas. Por su parte, el INDI justifica la inversión realizada en varias comunidades, que asciende a 771,3 millones de guaraníes, destinada a microproyectos para las comunidades de Canindeyú, Caazapá, Amambay, Caaguazú, Boquerón, San Pedro e Itapúa.

Unos 150 sin techos marchan por las calles de Asunción, se instalan frente a la sede de la SENAVITAT y exigen hablar con el presidente del ente. Los mismos requieren que se elimine la burocracia y las exigencias monetarias para acceder al techo propio. El dirigente campesino Martín Brandell señala que el gobierno no cumple con la “emergencia habitacional” que decretó en 2011 y que los sin techos no aprueban la contrapartida que la Secretaría de la Vivienda exige que la gente ponga en los bancos. Indica que son unas 900 mil las personas que se encuentran sin viviendas.

Tres docentes del asentamiento Planta I de Tacuatí, San Pedro, se encadenan a las rejas de la Escuela N° 2892 “6 de Enero”. Los mismos exigen la destitución de la directora Ana de Jesús Pérez, a la que acusan de perseguirlos y de cumplir una mala gestión al frente de la institución. Uno de los encadenados es el vicedirector de la institución, Víctor Velázquez, quien expresa que hace varias semanas han remitido notas a diferentes entidades para solucionar el conflicto, pero no encuentran solución. Velázquez dice que si no renuncia la directora con esta medida de presión, en los próximos días se crucificarán, y que si es necesario llegarán hasta el MEC para realizar una huelga de hambre. Por su parte, la directora Ana Pérez niega las acusaciones y manifiesta que esto se genera a partir de un conflicto personal con el vicedirector.

Más de cien pobladores de la zona de la avenida Molas López se manifiestan ruidosamente en la plaza de Las Residentas de la ciudad de Asunción. Los manifestantes piden al intendente de la comuna la promulgación de la ordenanza municipal que limita a cinco pisos la altura de los futuros edificios sobre esta arteria. Los vecinos exigen que el jefe comunal expida lo antes posible la promulgación de la ordenanza por temor a que los constructores estén presentando nuevos planos a la Intendencia y que estos sigan siendo estudiados bajo la ordenanza anterior. Por este motivo solicitan al intendente que no se dé el visto bueno, por parte de la comuna, a ningún plano hasta tanto se apruebe la nueva ordenanza que establezca ese límite de cinco pisos.

Viernes 11

Unos 150 nativos llegan a la capital procedentes de San Pedro y Canindeyú, y se suman a los indígenas que acampan al costado del ferrocarril, marchan hasta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y cierran la calle Oliva casi Alberdi de la ciudad de Asunción. Juan Galeano, dirigente del grupo, apunta que están haciendo el trabajo que debería realizar el presidente del INDI, Oscar Ayala. “Por eso queremos que este señor se vaya del ente y que venga una persona interesada en dignificar a los nativos”, expresa el mismo. Los aborígenes ya logran que la Secretaría Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) y el MEC cumplan sus promesas, pero aún no consiguen los víveres en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Galeano lamenta la falta de acompañamiento a sus reclamos, por eso claman por la destitución de Ayala. El INDI, en cambio, rechaza las quejas de los nativos y asegura que los está asistiendo. Menciona que en los últimos tiempos invirtió 165,7 millones de guaraníes en micro proyectos en distintas comunidades y que queda pendiente la verificación en otros asentamientos.

Sábado 12

Más de 50 empleados de la empresa Zayr y Asociados, que realiza servicios de limpieza general de todo el hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS), de la ciudad de Asunción, se manifiestan frente a la sede del nosocomio para reclamar a las autoridades del ente que mantengan

el contrato. Los mismos aseguran que están por perder ante la firma que apadrina el diputado colorado José Chamorro. Uno de los encargados de la citada empresa, Cristhian Ramírez, explica que el contrato con el ente es por tres meses, pero esperan que se firme por lo menos por un año, para no perder el aguinaldo y todos los beneficios laborales asignados.

Cerca de un centenar de ciudadanos se reúne al costado del Panteón Nacional de los Héroes de Asunción, para exigir reclamos puntuales como la modificación de la Ley 4584/12 para el desbloqueo real de las listas sábanas, la inscripción automática universal en el registro cívico permanente, el cese del despilfarro de los recursos del pueblo, la derogación de la ley de Inspección Técnica Vehicular, un transporte digno y justo y una Policía Nacional eficiente, eficaz y depurada, que son parte de las reivindicaciones específicas de los indignados locales.

Nativos procedentes de los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Caaguazú, que se encuentran acampando en la estación del ferrocarril de la ciudad de Asunción, nuevamente cierran la calle Eligio Ayala en su intersección con Paraguari como una “manera de hacerse notar” a las autoridades en reclamo de sus múltiples pedidos de asistencias. Los nativos se movilizan frente al INDI, el MOPC, la SEN, la Secretaría de Acción Social (SAS), el MEC y el MAG. El líder indígena Daniel Gómez señala que gracias a las marchas y protestas logran el compromiso con algunas instituciones, mientras que con otras esperan una respuesta en breve tiempo. En tanto esperan las respuestas de estas entidades, alegan que continuarán con los cierres de calles y movilizaciones.

Domingo 13

Los miembros de Ciudadanos en Acción (CEA) y de otras organizaciones se manifiestan en la Plaza de los Héroes de Asunción. Reclaman a las autoridades del gobierno de Fernando Lugo y del Congreso Nacional varios asuntos de interés general. Uno de ellos es la promesa hecha por varios diputados de que la inspección técnica vehicular (ITV) sería anulada. Señalan que la Ley 3850/09, en la que se establece la inspección técnica vehicular obligatoria para todo propietario de automotores y que crea los centros de inspección, atenta contra los derechos de las comunas y de los dueños de rodados. Añaden que la ley viola el artículo 107 de la Constitución Nacional, que dice: “se garantiza la competencia en el mercado. No será permitida la creación de monopolios”. El Dr. José Mayans, uno de los líderes de CEA, dice que este grupo está de acuerdo con el control técnico, no así con la forma en que son adjudicados los certificados de ITV. Reclaman el fin del oligopolio formado por las antiguas concesionarias de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRA).

Un grupo de estudiantes de la UNE se moviliza en el microcentro de Ciudad del Este, Alto Paraná, exigiendo la aplicación del Impuesto a la Renta Personal (IRP). William Ferreira, de la carrera de Derecho, dice que ya es un gran paso que el proyecto de ley haya tenido media sanción en la Cámara de Diputados. Los estudiantes sostienen que la ciudadanía no debe permitir que el dinero que ingrese con el IRP sea para subsidios de partidos políticos o para incrementar aún más el presupuesto del TSJE. Además exigen la restitución de 6 mil 400 millones de guaraníes al presupuesto de la institución, recortado semanas atrás por el Ministerio de Hacienda.

Lunes 14

La Liga Nacional de Carperos (LNC) de la colonia Agüerito, de Yaguareté Forest, San Pedro,

realiza una marcha en el lindero del inmueble de Ulises Rodríguez Teixeira en la localidad de Santa Rosa del Aguaray. En un breve acto, cerca de un retiro del establecimiento, resuelven emplazar por 15 días al gobierno para la compra de 7 mil 800 hectáreas de las 22 mil que comprende. Advierten que la espera termina y que comienza de nuevo la guerra por conseguir el inmueble. Durante la marcha, José Bordón, uno de los dirigentes de la zona, explica que la razón de la movilización es detener los delitos ambientales que se están cometiendo en la estancia. También reclaman que los guardias de Teixeira son civiles armados. “El gobierno debe cumplir con su compromiso y adquirir las tierras”, expresa. Finalmente, los campesinos quedan bajo carpas frente al inmueble de Teixeira y amenazan con ocupar la propiedad si dentro de 15 días no se inicia la compra del inmueble. Según Teixeira el inmueble ya no está a la venta.

Martes 15

Unos 250 padres de familia de alumnos del Colegio Nacional “Cadetes del Chaco”, de la ciudad de Areguá, Central, realizan una manifestación en reclamo de aulas para sus hijos. Según los padres, no es que falten las aulas, sino que la Supervisión del MEC utiliza las salas para sus reuniones, mientras los estudiantes dan clases en el patio, bajo los árboles. Lidia Acuña, una de las manifestantes, asegura que ya agotaron todas las instancias, por lo que no encuentran otra forma de actuar sino manifestarse. El titular del Sindicato Nacional de Directores (SINADI), Miguel Marecos, dice que la falta de aulas para alumnos se debe a una falta de planificación adecuada del MEC y alega que no existen proyectos para que esta realidad cambie.

Miércoles 16

Cerca de 50 nativos vuelven a ocupar la vereda del INDI, que recientemente volvió a su antiguo local. A principios de 2009, el entonces interventor del INDI, Horacio Galeano Perrone, había dispuesto el cierre del local por insalubre. Los indígenas acuden al lugar para reclamar atención a sus comunidades. Se instalan en precarias carpas de hule y en medio de estas cocinan en el suelo.

Un grupo de sindicalistas de la empresa de transportes Mariscal López S.R.L. se manifiesta en reclamo de la reposición en sus funciones de ocho conductores despedidos. El administrador de la empresa de transportes, Vidal Rodríguez, acusa a los sindicalistas de ser responsables de apedrear unos 12 buses de la línea de transporte de la empresa. El mismo indica que los trabajadores iniciaron los incidentes cuando se dieron cuenta de que la convocatoria para plegarse a la huelga no obtuvo la participación esperada. El secretario del sindicato, Óscar Soto, niega las acusaciones, indicando que ellos no son los autores del incidente y que el despido de los conductores se realizó de manera injustificada. Por su parte, Rodríguez señala que las desvinculaciones tienen que ver con políticas de la empresa.

Más de 120 nativos ava y mbya guaraní marchan por segunda vez hasta el Palacio de López en la ciudad de Asunción para exigir una audiencia con el presidente de República, Fernando Lugo. Reclaman el cumplimiento de un acuerdo firmado entre líderes, el INDI y otras instituciones para la asistencia a comunidades. Además, exigen la destitución de Óscar Ayala, titular del INDI, y se pronuncian contra las organizaciones no gubernamentales. “Queremos hablar de nuestros problemas, queremos que el presidente convoque a sus ministros para que se interioricen y solucionen la problemática indígena de diferentes departamentos. Lastimosamente, las autoridades

no tienen voluntad de atendernos”, señala el líder Tomás Domínguez, de Caaguazú.

Una vigilia y colecta de firmas se inicia frente al Congreso Nacional para lograr el juicio político contra los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En el inicio de la protesta, Katty González, dirigente de la Coordinadora de Abogadas del Paraguay, critica que la justicia no actúe de la misma manera con todos y que uno de los ministros de la corte tenga tierras mal habidas. Durante la jornada se procede a la colecta de firmas para pedir un juicio político a los siete ministros. Esta lista será elevada a la Cámara de Diputados, pidiendo el inicio de dicho proceso constitucional. Varios de los participantes iniciaron un ayuno de 24 horas.

Un grupo de nativos de las parcialidades Mbya y Avá Guaraní acampan en el predio del ex aeropuerto Alejo García de Ciudad del Este, Alto Paraná, como medida de presión al INDI para la compra de un terreno de 702 hectáreas, al lado del Parque Nacional “Moisés Bertoni”, en el distrito de Presidente Franco, Alto Paraná. Las tierras fueron apropiadas por Tranquilo Favero, pero los indígenas las ocupan desde 1959. El líder del grupo, Richard Vargas, dice que varias veces se vendieron las tierras con ellos adentro y ahora ya están prácticamente a orillas del río Paraná sin que el Estado cumpla el compromiso con ellos.

Jueves 17

Integrantes de la Asociación de Cuidadores de Vehículos de Asunción y Área Metropolitana realizan un acto de protesta contra la intención de la Policía Nacional de detener a todas las personas que pidan algún cobro por cuidar el automóvil en la vía pública. Daniel Sánchez, en representación de la nucleación de cuidadores, señala: “no saldremos de las calles. Nos quieren sacar de nuestros puestos de trabajo. Por eso queremos hablar con el ministro del Interior, así como con el intendente de Asunción y hasta con el presidente Fernando Lugo”. Según Sánchez, existen unos 2 mil 300 cuida coches en Asunción y se trata de un problema social que no se solucionará con solo sacarlos de la vía pública.

Unas 200 personas, integrantes de organizaciones sociales y políticas, se movilizan en la zona céntrica de Santa Rita, Alto Paraná, en repudio a los ministros de la CSJ. Los pobladores temen que el colono brasileño Fabio Ruffato, presunto autor del triple homicidio ocurrido en el distrito de San Cristóbal, sea liberado. El intendente de dicho municipio, Idelfonso Santander, del PLRA, pide a las autoridades judiciales que “dejen morir al asesino en la cárcel”. Alega que si los “Judas del Poder Judicial” no disminuían la pena de 23 a 10 años, esto podría haberse evitado. El triple homicidio ocurrió el 1 de mayo pasado. El presunto autor material es Fabio Ruffato, mientras que su cómplice sería su padre Valdir Ruffato. Ambos están en la cárcel regional de Ciudad del Este, en Alto Paraná.

Unos cuatrocientos manifestantes se concentran en la plaza frente a la sede del Poder Legislativo de la ciudad de Asunción para exigir que la Cámara de Diputados inicie el mecanismo de juicio político a los siete ministros de la CSJ. La manifestación es convocada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Participan simpatizantes del Partido Popular Tekojoja y de otras organizaciones que ya habían tomado parte del Juicio Político Ciudadano a los miembros de la corte. Muchos manifestantes reclaman la necesidad de “limpiar” el Poder Judicial, a cuyas máximas autoridades responsabilizan del descrédito generalizado que existe hacia la labor de los jueces.

Unos 70 funcionarios civiles de cinco reparticiones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) realizan una

ruidosa manifestación frente a la sede del Ministerio de Defensa, sobre la avda. Mcal. López de la ciudad de Asunción, en reclamo a la firma de los contratos colectivos. Los sindicalistas aseguran que tras haberse documentado en acta la promesa de la firma de los contratos por el ministerio de Defensa, Gral. Brig. (R) Catalino Roy Ortiz, el mismo se niega a firmarlos. La medida de fuerza cierra media calzada en forma intermitente.

Unos 150 nativos ava y mbya guaraní instalados a un costado del Ferrocarril, cierran nuevamente las calles Eligio Ayala y Paraguarí de la ciudad de Asunción. Posteriormente marchan hasta las oficinas del MAG en reclamo de implementos agrícolas y asistencia técnica para trabajar la tierra. Luego llegan hasta el MEC para solicitar rubros para los docentes indígenas que enseñan en sus comunidades. La viceministra de Educación, Cynthia Brizuela, recibe a los líderes y llegan a un acuerdo. El líder indígena Daniel Gómez señala que ya tienen respuestas del SENASA y del MOPC, pero que aún faltan las respuestas de la SEN y la SENAVITAT.

Entre besos, abrazos, apoyo y rechazo se lleva adelante el tercer Besatón de la organización Somosgay frente al Congreso Nacional, donde acuden más de cien personas para unirse a la actividad en el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y Transfobia. La fecha busca promover la igualdad y el respeto por la diversidad. Por su parte, un grupo de jóvenes llega hasta la Plaza de Armas de Asunción y se manifiesta con insultos hacia los participantes. En la Fiscalía Central se presenta una denuncia en contra de los organizadores del Besatón por considerar que se realiza un “exhibicionismo que atenta contra la moral y las buenas costumbres”.

Viernes 18

Unas 200 personas encabezadas por el intendente de Luque, Central, César Meza Bría (PLRA), y concejales liberales y colorados, cierran la entrada y salida de vehículos sobre el puente del arroyo Itay, al límite de Luque con Asunción, en protesta por la suspensión de la adjudicación de uno de los tramos de la pavimentación del camino entre Luque y San Bernardino, en Cordillera. La medida ciudadana se origina luego de que el MOPC, a través del viceministro de Obras, Leoncio Rojas Molinas, decidiera anular la adjudicación de una de las secciones del tramo vial de la mencionada ruta y volver a llamar a una licitación. Los manifestantes indican que de no solucionarse las trabas burocráticas clausurarán la ruta por más tiempo, incluso por días, hasta conseguir que la obra se inicie.

Indígenas de las parcialidades Mbya y Ava Guaraní de la zona de Puerto Bertoni, Presidente Franco, Alto Paraná, bloquean la avenida Bernardino Caballero de Ciudad del Este, Alto Paraná, frente a la gobernación, en forma intermitente. Piden la mediación de las autoridades departamentales para la adquisición de 702 hectáreas de tierras ancestrales que hoy están en manos de Tranquilo Favero. Los nativos, portando pasacalles, denuncian la desidia del INDI y el abandono en que el Estado los tiene. Con cantos y danzas típicas se manifiestan y anuncian que será en forma permanente, hasta que las autoridades les den una respuesta definitiva sobre las 702 hectáreas que peticionan para afincarse en forma definitiva y segura.

Sábado 19

La Juventud del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), con el respaldo de representantes de la

Coordinadora de Abogados del Paraguay, se concentra frente al Panteón de los Héroes de Asunción. Con pancartas animan a los transeúntes y automovilistas a estampar su firma a favor de exigir que la Cámara de Diputados inicie el mecanismo de juicio político a siete cuestionados ministros de la CSJ. El objetivo es recolectar unas 5 mil firmas que serán presentadas luego ante la Cámara de Diputados. Los dirigentes señalan que seguirán insistiendo, a pesar de que evidentemente algunos sectores políticos quieren mantener el *status quo* que seguirá provocando un grave daño institucional.

Lunes 21

Cinco funcionarios de la Fundación Tesãi inician una huelga de hambre. Los directivos de la entidad, dependiente de la Itaipú Binacional, sostienen que se trata de una persecución política cuyo objetivo es la destitución del gerente ejecutivo, Ignacio Iramain. Los manifestantes están apostados frente al hospital ubicado en el Área 2 de Ciudad del Este, Alto Paraná. Los funcionarios del materno infantil Los Ángeles, de los policlínicos del kilómetro 41 de Yguazú, y de Presidente Franco, se adhieren a la medida de fuerza, que se realiza a raíz del incumplimiento de los acuerdos contemplados en el contrato colectivo de trabajo. Por su parte, la gerencia de la Fundación Tesãi solicita la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza.

Un grupo de 10 funcionarios de la fiscalía regional de la localidad de Villa Hayes, Presidente Hayes, denuncia varios supuestos malos manejos dentro de la institución local. Expresan que varios trabajadores son perseguidos, trasladados y amedrentados por no encubrir hechos de corrupción. Amado Gabriel Guerrero, uno de los funcionarios, se encadena a una de las rejas de la sede del Ministerio Público local como protesta. Relata que unos 50 trabajadores fueron trasladados porque estaban en contra de varias decisiones de las autoridades fiscales locales. Manifiestan además que la fiscalía puede ser calificada como un antro de corrupción y afirman que existen pruebas que involucran a uno de los fiscales en la repartición de dinero de algunas intervenciones sobre vehículos incautados en procedimientos.

Campesinos sin tierras del Movimiento Popular Agrario (MPA) realizan una serie de ocupaciones en la comunidad de Zapatini Cue, distrito de Yhu, Caaguazú. Ocupan maizales y zonas ganaderas, y alegan que la medida es “institucional”. Los afectados son productores agrícolas y de ganado que en su momento compraron las tierras a campesinos, que entonces eran del asentamiento Zapatini Cue, cuya expropiación se realizó en 1995. El Estado adquirió 3 mil 999 hectáreas para las familias que en ese momento estaban asentadas allí. Los ocupantes son denunciados en la fiscalía de Yhû por destruir los cultivos y alambrados de las referidas propiedades.

Más de 120 nativos avá y mbyá guaraní apostados frente a la sede del Ferrocarril, marchan hasta la sede de la Vicepresidencia de la República, donde dialogan con el presidente en ejercicio, Federico Franco, quien luego conforma una mesa de diálogo para responder a los reclamos de los aborígenes. Con víveres y promesas de asistencia en educación, salud y mejoras de caminos, los indígenas, que se encuentran acampando al costado del ferrocarril desde hace 18 días, levantan su jornada de protesta para retornar a sus respectivas comunidades.

Unos 50 campesinos sin tierra de la comisión Ybytu Pyahu que reivindican las tierras del ganadero Luis Mario Salvídar, ocupan la oficina regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de Concepción. Exigen la mensura judicial del inmueble y la anulación de la

resolución que reconoce a otra comisión de la zona.

Dos grupos antagónicos protagonizan en la ciudad de La Colmena, Paraguari, una manifestación para impedir la posesión al cargo de coordinador departamental de educación a Isaac Moisés Olmedo, nombrado por el MEC. La movilización es organizada por docentes y padres de familia de instituciones educativas de varios distritos del departamento, con el respaldo de varios intendentes y del titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Atilano Fleitas. El dirigente gremial se reúne con el ministro de Educación, Víctor Ríos, a quien expuso las denuncias de acoso sexual protagonizadas por Olmedo en instituciones educativas donde ejerció sus funciones. Fleitas informa a los manifestantes que el titular de la cartera de Educación desconoce los negativos antecedentes del educador y les promete que anulará la resolución firmada. Por su parte, Olmedo, junto a sus adherentes, se ubica dentro del local y asegura que asumirá el cargo.

Martes 22

Unos 500 empleados descontratados del TSJE se manifiestan frente al Puesto Comando de Honor Colorado (HC) en Asunción, liderado por el presidenciable Horacio Cartes. Los representantes de los manifestantes intentan dialogar con Cartes para pedir que revea su postura y solicite a los parlamentarios de su movimiento el rechazo del veto presidencial a la ampliación presupuestaria de 50 millones de dólares al organismo electoral, pero el mismo no aparece en dicho local. Samuel Flores, funcionario del Registro Electoral de la ciudad de Luque, Central, dice que “son 8 mil personas descontratadas” que esperan que Cartes revea su postura, porque viven de sus sueldos que ahora no pueden más cobrar, porque el presidente Lugo vetó la ampliación presupuestaria para el TSJE. Anuncian que decidirán tomar otras medidas para presionar a favor del rechazo del veto.

Alumnos de instituciones educativas de Ciudad del Este, Alto Paraná, se manifiestan frente a la sede de la Gobernación departamental. Repudian el rechazo del pedido de cesión del predio de la institución departamental para construir un albergue para niños, con recursos de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koika). Con caricaturas, cánticos de repudio y bloqueos en la avenida Bernardino Caballero, los estudiantes exigen también el acatamiento del boleto estudiantil por los conductores de ómnibus y denuncian los maltratos que reciben los jóvenes en sus puestos de trabajos, donde concurren por necesidad.

Pobladores del barrio Villa Jardín de la ciudad de Limpio, Central, se manifiestan para solicitar que la ESSAP administre la planta de tratamiento de agua potable instalada en la zona. Unas 600 familias del barrio beben agua sucia proveída por una aguatera privada. La planta de tratamiento de la empresa, ya es obsoleta, y los usuarios sufren las consecuencias de tal situación. Por su parte, Modesto Espínola, interventor y administrador de la planta de tratamiento de agua, reconoce la mala calidad del servicio y señala que el problema se debe a las obsoletas maquinarias de la aguatera.

Más de 120 indígenas ava y mbya guaraní cierran el cruce de las calles Presidente Franco y O'leary de la ciudad de Asunción, frente a la vicepresidencia. Reclaman el incumplimiento de promesas, entre ellas, la vuelta a casa. Según el nativo Daniel Gómez, en horas de la tarde del día anterior debían pasar camiones a recogerlos para retornar a sus pueblos, pero no aparecieron sino hasta horas de la noche en donde un autobús de la Policía Nacional se acercó para trasladarlos hasta sus comunidades, pero no pudieron retornar todos por la falta de espacio en el ómnibus. El líder Juan Galeano dice que de los 420 nativos que se encuentran instalados frente al local del Ferrocarril y

otros sitios, la mitad ya había retornado a sus comunidades en Caaguazú, no así el grupo de los departamentos San Pedro y Canindeyú.

Miércoles 23

Un grupo de vecinos y miembros de partidos políticos de la ciudad de San Lorenzo, Central, monta una vigilia frente a la Cámara de Diputados de Asunción a fin de que los legisladores de la ANR designen representantes para integrar la comisión que debe estudiar el pedido de intervención de la Municipalidad de San Lorenzo. El pedido de intervención de la Comuna se fundamenta en un informe final de una auditoría presupuestal que le fuera practicada en el año 2008, en atención a las graves irregularidades encontradas, de conformidad a la Constitución Nacional y a la Ley Orgánica Municipal. Los manifestantes denuncian haber sido víctimas de amenazas de muerte durante la vigilia por parte de personas innominadas y piden el refuerzo de la custodia policial durante el tiempo que permanecen frente a la Cámara de Diputados.

Jueves 24

Estudiantes de varias universidades del Paraguay acampan en la Plaza de la Democracia de Asunción. Protestan contra el proyecto de Ley de Educación Superior presentado por la Comisión Bicameral del Parlamento. Los estudiantes reclaman que no fueron incluidos en la redacción de la legislación. “La educación es un derecho y, como tal, tiene que estar garantizada para todas las personas, no solo para aquellas que pueden costearla”, expresa Verónica Ruíz Díaz, miembro de Los Gatos de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Los manifestantes convocan a una discusión sobre el tema en la Plaza de la Democracia.

Viernes 25

Una generalizada reacción de pobladores de la localidad de San Estanislao, San Pedro, se produce a raíz del asesinato del comerciante Daniel Jiménez por dos delincuentes que lo asaltaron en su negocio ubicado en el barrio 8 de Diciembre de la misma localidad. Los pobladores exigen a las autoridades una mayor acción contra los delincuentes y amenazan con hacer justicia por “manos propias”. Familiares y vecinos se congregan en masa en el domicilio de los familiares de la víctima y piden a las instituciones que no quede impune el crimen.

Alrededor de 5 mil personas acuden a la protesta ciudadana denominada *After Office* Revolucionario, auto convocada a través de las redes sociales *Facebook* y *Twitter*. Los manifestantes copan la Plaza de Armas, ubicada frente al Congreso en Asunción, para manifestar su repudio a la ampliación presupuestaria de 150 mil millones de guaraníes para los operadores políticos a través del TSJE determinada por la Cámara de Diputados. La convocatoria reúne a miles de personas de todas las edades, principalmente jóvenes, quienes al grito de “Fuera” corean los 46 nombres de los diputados de los partidos políticos que votaron a favor del aumento presupuestario. Los organizadores aclaran que de nada servirán las manifestaciones si no se enfocan en dos aspectos: primero, forzar a la Cámara de Senadores a rechazar lo resuelto por diputados y aprobar las modificaciones al desbloqueo de listas y, segundo, exhortar a aplicar el voto castigo en las próximas elecciones generales a los diputados eschachados. Se reparten boletines con el nombre y

rostro de los diputados que votaron a favor de la ampliación presupuestaria, con la intención de que la ciudadanía identifique a los legisladores y ya no vote por ellos en las próximas elecciones.

Tres funcionarios de la Inspectoría de la Municipalidad de Luque, Central, resultan con lesiones luego de ser agredidos por vendedores informales durante el procedimiento para despejar los sitios donde se instalaran unos 60 vendedores en las aceras y el paseo central de la avenida Humaitá y Corrales. Los agredidos acuden al hospital distrital y hacen la denuncia ante la policía. El intendente de la comuna, César Meza Bría, ordena continuar con el despeje de la avenida, ya con presencia policial.

Un grupo de estudiantes, que responde a la organización Jóvenes por la Patria (JPP), de la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, expresa su indignación contra los diputados que permitieron la aprobación del aumento de 150 mil millones de guaraníes para que el TSJE contrate operadores políticos, y distribuye unos 400 panfletos entre transeúntes y automovilistas. En el centro de Ciudad del Este, Alto Paraná, también se realiza una caravana para repudiar la actitud de los legisladores.

Sábado 26

Campesinos sin tierras ocupan una propiedad perteneciente a la estancia Capivara. El establecimiento abarca unas 2 mil 100 hectáreas y se encuentra en la compañía Santo Domingo, del distrito de Guayaybí, departamento de San Pedro. El propietario del establecimiento es Miguel Ángel Montaner, quien denuncia que los sin tierras estaban comercializando madera ilegalmente. Interviene una comitiva fiscal-policial encabezada por la fiscal Lilian Ruiz y el jefe de Orden y Seguridad de la Policía Nacional en San Pedro, Crio. Princ. Antonio Ruiz. Por disposición de la fiscal, la zona queda bajo vigilancia para evitar el retorno de los ocupantes.

En el marco del Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, cerca de 500 personas se movilizan sobre la calle Palma de Asunción. Reclaman a las autoridades nacionales más interés y una atención efectiva al problema. Niños y niñas expresan sus pensamientos por medio de escritos y dibujos sobre la violencia hacia la niñez durante la celebración. La ministra de la Niñez, Liz Torres, les responde que “cada planteamiento que realizan es para nosotros una guía, algo que sirve. Es súper importante esta marcha. Quiero reconocerles, felicitarles, por sostener este espacio, y por seguir gritando fuerte, poniendo palabras fuertes a esto”. Uno de los pedidos es que “lleguen a nuestras comunidades con un centro de atención”. Ese es el desafío mayor.

Un desalojo violento, con la quema de viviendas y de una escuela, en el asentamiento 13 de Mayo, ubicado en la compañía rural de Triunfo, km 64, distrito de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, es denunciado por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). El procedimiento fiscal-policial es dirigido por los fiscales Alfredo Báez Pedotti y Rodrigo Vergara. Por su parte, el fiscal Pedotti rechaza las acusaciones y asegura que el procedimiento se realizó en una propiedad de la familia Cano Ortiz, en la zona de Tomás Romero Pereira. “Es mentira. No hay ninguna escuela que fue destruida”, manifiesta. Luis Fernando Cano Ricciardi afirma que la propiedad es de su familia desde 1979 y que fue adjudicada a través de la reforma agraria. Tiene 842 hectáreas, de las cuales 150 hectáreas se encuentran invadidas desde el 1 de abril. El conflicto entre los campesinos y la familia Cano Ricciardi se remonta a unos 10 años, cuando los sin tierras se instalaron en un predio de 800 hectáreas. Esta finca fue denunciada como

tierra mal habida ante la Procuraduría General de la República, que solicitó la nulidad del título al poder judicial, pero el juez Silvino Delvalle señaló como válido el documento. La familia Cano sostiene que las tierras fueron adquiridas legalmente, pero los campesinos indican que son empleadas con fines especulativos porque se alquila la chacra a productores extranjeros de soja.

Domingo 27

Unos cien usuarios de la empresa de transporte San Agustín, de la ciudad de Areguá, cierran de manera intermitente la ruta que une a Areguá con Capiatá, ambos distritos en Central. Se manifiestan contra el pésimo servicio ofrecido por la empresa de transporte. Los ediles respectivos, que se hacen presentes en el lugar, denuncian que la empresa no cumple con la frecuencia exigida por la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana (SETAMA) y que las unidades de la firma están en muy mal estado. Un grupo de lugareños, como medida de presión, decide acampar desde tempranas horas de la mañana en el lugar en donde se realiza la manifestación.

Lunes 28

Vecinos del asentamiento 24 de Junio, de San Lorenzo, Central, se manifiestan frente a la fiscalía local. Los mismos urgen la imputación y prisión de cuatro policías que violaron a la pareja del dirigente sin techo Cándido Valenzuela, tras la detención de la mujer en el 2010. Los denunciados pertenecen a la brigada de Capiatá, Central, y es acusada como cómplice de los policías la oficial mayor Zulma Ruiz, de la misma brigada. La abogada Graciela Verón, defensora de Zulma Ruiz, señala que aquella mujer y su pareja soportan varias denuncias por la venta de tierras del asentamiento, y que el hecho de violación sería una artimaña en busca de zafarse de los procesos que tienen. Por su parte, la denunciante ratifica que fue abusada por agentes de la brigada de investigación de Capiatá. Señala que no hizo antes la denuncia del hecho porque los policías la tenían amenazada.

Un grupo de empleados del Hospital Central del IPS de Asunción se manifiesta para pedir que la empresa SEVIMAC, que ganó la licitación para hacer la limpieza del hospital, pague el sueldo mínimo vigente. Ante esta situación, los empleados del IPS hacen escuchar su voz de protesta y piden que el mismo MJT tome cartas en este asunto.

Martes 29

En diversos puntos del país, estudiantes, productores y la ciudadanía en general critican a los “dipuchorros”, que ratificaron el aumento para contratar a los planilleros. La Conferencia de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional del Este, Alto Paraná, encabeza la vigilia para la no aprobación de la ampliación de 150 mil millones de guaraníes para el TSJE. La movilización se realiza en la Plaza de la Paz para demostrar que no están ajenos a las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país para repudiar a los “dipuchorros”, que rechazaron el veto presidencial a la ampliación presupuestaria. Las movilizaciones también son realizadas en Villarrica, Guairá, y Filadelfia, departamento de Boquerón.

En una explosión de júbilo e indignación, alrededor de 3 mil ciudadanos celebran frente al Senado

su triunfo con la aceptación del veto del Ejecutivo. Exigen también “la cabeza” del senador colorado Juan Carlos Galaverna y anuncian otra manifestación para pedir el desbloqueo de listas. Bajo la mirada de la policía antidisturbios dotada con dos carros hidrantes, los gritos de desprecio están enfocados contra el senador Juan Carlos Galaverna (ANR) y el titular de la Cámara Alta, Jorge Oviedo Matto, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), el primero por ser el único que votó en disidencia y el segundo por haber minimizado la convocatoria. La manifestación fue convocada a través de las redes sociales *Facebook* y *Twitter* bajo consignas democráticas sin bandería política.

Unos 150 carperos ocupan desde el 3 de mayo pasado la propiedad de mil 198 hectáreas del empresario Blas N. Riquelme. El inmueble está en la colonia Yvyra Pytã, del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. El abogado Gustavo Penzi, representante legal de la firma Campos Morombi, denuncia que grupo de encapuchados fuertemente armados, presuntamente los ocupantes, tomaron por asalto una de las casetas de los guardias de seguridad, ubicada dentro de la propiedad, el 17 de mayo pasado. Despojaron al personal de seguridad de la estancia de sus armas y enseres, amenazándolos con asesinarlos si regresaban al lugar, señala Penzi. El fiscal general adjunto, Éver Ovelar, señala que aguardará el informe final de la Policía Nacional para ejecutar el procedimiento de desalojo.

Unas 250 personas de grupos de sin techos marchan en Asunción hasta el local de la SENAVITAT y luego se dirigen hasta el ex local de la SAS para volver a manifestarse frente al Gabinete Social de la Presidencia de la República. Reclaman celeridad en la compra de propiedades para viviendas y la entrega de subsidios por parte de la SENAVITAT. El dirigente de los sin techos, Blas Vera, indica que existen más de 30 proyectos presentados hace dos años, pero que hasta la fecha no se ejecutaron. Señala que puede tratarse de cuestiones políticas. Por su parte, el ministro de la SENAVITAT, Gerardo Rolón, niega que la construcción de casas se trate de una cuestión política y alega que más bien se debe a inconvenientes con la adquisición de las propiedades.

Unas 300 personas cierran la ruta 5 Bernardino Caballero a la altura del kilómetro 65, distrito de Horqueta, departamento de Concepción. Los ciudadanos manifiestan su repudio contra los tres diputados departamentales, por haber aprobado el abultado presupuesto para la Justicia Electoral. Por su parte, en la plaza de la misma ciudad se reúnen unos 200 funcionarios del Registro Electoral, quienes se manifiestan a favor del aumento presupuestario para la entidad.

Vendedores de la vía pública marchan para pedir la restitución de nueve hectáreas de tierra que fueron expropiadas a favor de los trabajadores del microcentro de Ciudad del Este, Alto Paraná, y que ahora habrían sido cedidas por 25 años a un grupo empresarial. De la marcha participan referentes sociales, sindicatos, gremios y partidos políticos, estudiantes de secundaria y universitarios, los pioneros, Lenteros Unidos, la Asociación de Vendedores de la Vía Pública, personas de la agrupación Tercera Edad y carperos de Ñacunday. A los reclamos se suma la pensión alimentaria para la tercera edad, la salida de los jueces corruptos y la liberación del líder carpero Victoriano López, entre otros.

Miércoles 30

Unos cien integrantes de la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay (LOMP) cierran la ruta internacional que une la comunidad de Remansito con la localidad de Puerto Falcón, Presidente

Hayes. Denuncian la falta de cumplimientos de los acuerdos firmados por el titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y piden su destitución. Solicitan además la reivindicación del transporte fluvial, como uno de los puntos de ingreso de productos fruti-hortícolas, al igual que el terrestre y aéreo al mercado paraguayo. Agregan que la situación afecta excesivamente a varias familias ribereñas, en su mayoría lancheros y estibadores, que ante tal situación pierden sus fuentes de empleo. Tras la llegada de los cascos azules al lugar, los obreros marítimos deciden levantar la medida de fuerza sobre la ruta. Sin embargo, anuncian que en breve continuarán con sus reclamos frente a la sede central del servicio.

Grupos de ciudadanos autoconvocados por las redes sociales se manifiestan en distintos puntos del país con el fin de escrachar a los diputados que votaron a favor de la ampliación presupuestaria al TSJE. Los manifestantes además solicitan la modificación de la ley de bloqueo de las listas sábana, listas cerradas.

Alrededor de mil personas se convocan en la Plaza de Armas, ubicada frente al Congreso, en Asunción, para celebrar los resultados de la presión ciudadana ejercida sobre el Senado para la aceptación del veto del Ejecutivo a la ampliación presupuestaria para el TSJE. La multitud exige a viva voz que en la sesión extraordinaria del día los senadores aprueben las modificaciones necesarias para un desbloqueo real de la lista denominada “sábana”, de carácter cerrado. El segundo reclamo más coreado es el pedido de juicio político a los siete jueces de la corte que se declararon inamovibles. Los organizadores resaltan el carácter apolítico del evento exhibiendo en el escenario un cartel de repudio a parlamentarios de todos los partidos.

Un grupo de vecinos se congrega frente a la catedral de la ciudad de San Lorenzo, Central, para reclamar a la Cámara de Diputados la intervención de la municipalidad local, debido a irregularidades registradas en el ejercicio de la administración en el 2008 bajo la intendencia de Albino Ferrer (ANR), según la Contraloría General de la República. “Hace un año que reclamamos la intervención de la municipalidad, y hoy de nuevo estamos haciendo esto”, señala la Dra. María Luisa Brunelli.

Obreros municipales de la ciudad de Asunción se declaran en huelga. Reclaman al intendente capitalino el incumplimiento del acuerdo arribado con sindicatos municipales de reponer en el presupuesto la suma de 36 mil millones de guaraníes y disponer un reajuste salarial del 5% sobre el salario mínimo. Mirtha Arias, del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (SITRAMA), explica que de producirse el recorte de dinero un total de mil 500 jornaleros puede perder sus puestos de trabajo. Señala además que lograron que ingrese a la junta municipal el pedido de ampliación presupuestaria reclamada, y que a pesar de que la asamblea ya declaró la huelga cumplirán con los pasos exigidos por la ley para su realización, si es que hacen caso omiso al pedido presentado.

Jueves 31

Cerca de mil estudiantes de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA) y de la UNA marchan desde la Facultad de Medicina, de la ciudad de Asunción, para luego dirigirse frente al Congreso Nacional. Varios oradores se suceden y todos apuntan contra el ministro de Educación, Víctor Ríos, y sus asesores, por la intención de llevar a la privatización a las universidades públicas. Cuestionan también que el proyecto de ley pretende restar atribuciones importantes al Consejo

Nacional de Educación y Cultura (CONEC), la falta de consideración al estamento estudiantil, la intención de desarticular a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la intención mercantilista. Los universitarios esperan que los parlamentarios retiren el proyecto de ley. En caso contrario, las medidas de protesta irán en aumento, anuncian.

Vendedores informales se manifiestan contra el desalojo de sus puestos de trabajo frente a la Caja Central del IPS de Asunción. Como resultado, el Consejo de Administración acepta negociar nuevamente una reubicación. Isidro Ramírez, presidente de la Asociación de Vendedores, señala que no están ajenos a negociar, pero que no coinciden en la medida de los puestos y en la ubicación que les propone la institución. Alega que el espacio asignado para cada uno es pequeño e incómodo. Uno de los principales cuestionamientos hacia los vendedores es que los mismos no pagan ningún canon.

Glosario de siglas

AMOTER	Asociación de Movimientos Teko Pora Rekavo
ANDE	Administración Nacional de Energía
ANEAES	Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANR	Asociación Nacional Republicana
CEA	Ciudadanos en Acción
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CLYFSA	Compañía de Luz y Fuerza S.A.
CNT	Central Nacional de Trabajadores
CONEC	Consejo Nacional de Educación y Cultura
CONNATS	Coordinadora Nacional de Niños y Trabajadores Adolescentes del Paraguay
CSC	Corriente Sindical Clasista
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CUT-A	Central Unitaria de Trabajadores Auténtica
EBY	Entidad Binacional Yacyretá
ESSAP	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
FEP	Federación de Educadores del Paraguay
HC	Honor Colorado
INDERT	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
INDI	Instituto Paraguayo del Indígena
INTN	Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
IPS	Instituto de Previsión Social
JPP	Jóvenes por la Patria
LNC	Liga Nacional de Carperos
LOMP	Liga de Obrero Marítimos del Paraguay
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MCP	Movimiento Campesino Paraguayo
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
MJT	Ministerio de Justicia y Trabajo
MOPC	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MPA	Movimiento Popular Agrario
PLRA	Partido Liberal Radical Auténtico
PRF	Partido Revolucionario Febrerista
SAS	Secretaría de Acción Social
SEN	Secretaría de Emergencia Nacional
SENASA	Secretaría Nacional de Saneamiento Ambiental
SENAVE	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
SENAVITAT	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat
SETAMA	Secretaría del Transporte del Área Metropolitana
SINADI	Sindicato Nacional de Directores
SITRAMA	Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción
TSJE	Tribunal Superior de Justicia Electoral
UCA	Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
UNA	Universidad Nacional de Asunción
UNE	Universidad Nacional del Este

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Paraguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinación de Quintín Riquelme.

Relevamiento de Justino Romero.

Sistematización de Elsy Vera.

Fuentes: Diario Abc Color y Diario Última Hora.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Paraguay

Junio de 2012

Editada en diciembre de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1176

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Paraguay***



Integrantes	Quintín Riquelme Justino Romero Elsy Vera
Fuentes	diarios Abc Color y Última Hora

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Paraguay

Cronología del conflicto social

Junio de 2012

Viernes 1

Unos doscientos estibadores agremiados a la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay (LOMP) toman el predio de la Dirección Nacional de Aduanas, en Itá Enramada, Central, y bloquean parte de sus portones. Los fleteros piden la destitución del titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Miguel Lovera. Señalan que este no cumple la promesa de dividir el transporte de productos frutihortícolas por tierra y vía fluvial. Esteban Arzamendia, secretario general de la LOMP, informa que decidieron levantar el bloqueo luego de reunirse con las autoridades y llegar a un acuerdo.

Unos mil colonos cierran la supercarretera de Itaipú, a la altura del cruce Itakyry, Alto Paraná. Los manifestantes piden la restitución de unas mil cinco hectáreas para 30 colonos, quienes fueron despojados de sus tierras por la Empresa Benita S.A. Los colonos colocan sus máquinas al costado de la supercarretera y marchan por casi dos kilómetros. Solicitan al ministro del Interior, Carlos Filizzola, que deje de apoyar a los bandidos. El presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), filial Alto Paraná, ingeniero Rubén Sanabria, explica que la manifestación es contra la empresa Benita S.A., que ocupa las tierras que pertenecen a los agricultores. También lanzaron duras críticas contra el presidente Fernando Lugo. Los indígenas del asentamiento Kirito de Itakyry también se pliegan a la movilización, cuestionan a la citada firma por el cierre del camino que conduce a su comunidad, dejándolos aislados, y denuncian además que son ignorados por el gobierno nacional.

Unos mil afiliados de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) marchan desde la plaza Italia hasta la sede del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de la ciudad de Asunción. Los maestros llevan consigo carteles con fotos de las escuelas donde trabajan, denuncian las precariedades en que se desenvuelven las actividades en el sistema educativo público y reclaman el nombramiento de los docentes interinos. Por su parte, el ministro de Educación, Víctor Ríos, indica que con respecto al reclamo puntual de nombrar definitivamente a los educadores que ocupan un cargo de manera interina la salida es que se sometan a un examen de competencias y que puedan ser nombrados solamente si lo aprueban. “No puedo emitir una resolución contraria a la ley”, señala en alusión a que el acceso a los cargos docentes debe realizarse por concurso.

Unos cien pobladores de las inmediaciones del Cerro Kavaju, de la localidad de Atyra, Cordillera, se manifiestan contra la grave destrucción que ocurre en el lugar. Grandes perforaciones y excavaciones son realizadas en el cerro a fin de ejecutar un proyecto turístico presentado por supuestos propietarios del área afectada. El fiscal José Luis Casaccia señala que el permiso fue otorgado porque según el proyecto presentado las obras que se realizan en el lugar no dañan el medio ambiente ni el ecosistema. Por su parte, el propietario de la zona afectada, Cayo Manuel Báez, manifiesta sentirse perseguido por los medios de comunicación y los vecinos, que no lo dejan trabajar tranquilo. Señala que aún no se está haciendo ningún tipo de obras en la zona, sólo estudios preliminares del lugar.

Trabajadores de la calle Camilo Recalde, del microcentro de Ciudad del Este, Alto Paraná, se manifiestan reclamando el fin del cobro de coimas a los buses de turismo que ingresan a los estacionamientos de los *shoppings* de la zona. La situación hace que los buses con turistas ya no ingresen a la citada calle y afecta directamente a la economía de los trabajadores formales e informales que están ubicados en el lugar. Otro reclamo es el sentido de circulación doble sobre dicha calle: piden que la misma sea nuevamente utilizada en sentido este-oeste, como vía de salida del microcentro de la capital.

Unos trescientos docentes nucleados en la Asociación de Educadores del Paraná (AEP) realizan una movilización por las calles de Encarnación, Itapúa, reclamando el pago de salarios a profesores contratados dentro del convenio entre el MEC y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Silvio Piris, presidente de la AEP, señala que darán al MEC un tiempo prudencial para regularizar los temas pendientes y que en caso contrario iniciarán una huelga general por tiempo indefinido.

Sábado 2

Un grupo de 25 jóvenes pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado (ANR) se manifiesta con batucadas y pancartas frente al aeropuerto internacional Silvio Pettitrossi, de Luque, Central. Escritos como “Bienvenido hermano extranjero” y “El pueblo ya pasa hambre”, entre otros, son los reclamos expresados contra Fernando Lugo por los numerosos viajes al extranjero realizados por el presidente de la República.

Domingo 3

Pobladores del barrio Los Laureles, de Asunción, se manifiestan porque la municipalidad capitalina no exige el cumplimiento de las ordenanzas, permitiendo que una institución educativa siga creciendo en una zona residencial en total contravención a las normas. Las continuas actividades estudiantiles desarrolladas en la institución generan ruidos molestos y dificultan el tránsito en los alrededores de la misma. Los lugareños mencionan que las autoridades comunales son responsables de la violación de la Ordenanza 43/94 “Plan regulador de la ciudad de Asunción”, que establece que en las áreas residenciales, “no se permitirá la localización de programas que produzcan molestias al vecindario por aglomeración de personas o vehículos” y “por generar olores, polvos, ruidos o desperdicios de volumen”. Por su parte, la arquitecta Alicia Sánchez, de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Asunción, puntualiza que la carpeta con el plano de la institución está en trámites y que existen multas para los propietarios que presentan los planos a la institución municipal después de iniciada la obra.

Pobladores del barrio Santo Domingo de Asunción se manifiestan frente a la residencia del fiscal antidrogas Francisco de Vargas luego de que éste atropellara la casa de uno de sus vecinos y que lanzara al piso y destruyera un equipo de sonido. Por su parte, el fiscal De Vargas explica que la situación es insostenible debido a que vecinos del barrio en el que vive no les dejan dormir a raíz de la música a alto volumen. Alega que tiene varias denuncias contra los mismos por perturbación de la paz pública y ruidos molestos.

Lunes 4

Un grupo de nativos abandona el cuartel RI 14 de Tacumbú, de Asunción, y marcha hacia la sede del Instituto Nacional del Indígena (INDI). Piden la destitución del presidente del mismo, Óscar Ayala, debido a su negativa a comprar las tierras en el distrito de Unión, San Pedro, reclamadas por los nativos. Según los manifestantes, el titular del INDI prometió reubicarlos en otros territorios, pero hasta ahora no ha cumplido su palabra. Por su parte, Ayala señala que rechazó la compra de este inmueble por estar sobrefacturado y porque más de la mitad de la propiedad es anegadiza.

Martes 5

Pobladores de Coronel Martínez, Guairá, se manifiestan pacíficamente y exigen que se esclarezca la desaparición de la joven estudiante Teresa Edith Lichi Rivero. Reclaman justicia para la desaparecida y abogan para que la misma sea encontrada sana y salva. El abogado Guillermo Saúl Duarte es procesado como sospechoso del crimen. El juez de garantías Bienvenido González concede la medida alternativa a la prisión al imputado por el Ministerio Público.

Cerca de mil manifestantes autoconvocados frente al Congreso de Asunción muestran su furia contra los senadores luego de que los mismos rechazaran la eliminación de las listas cerradas. Los indignados cierran las calles en los alrededores del congreso para impedir la huida de los parlamentarios, quienes se ven obligados a escapar por calles alternativas. La huida llena de indignación a los asistentes, quienes tras los enfrentamientos se reagrupan, montando una vigilia y lanzan una amenazante consigna: “¡Iremos a sus casas, senadores!”. Destrozos y perjuicios provocan los indignados frente a los locales de la ANR y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en repudio contra la decisión de los parlamentarios.

Pobladores de Yatyty, Itapúa, se movilizan pacíficamente por las principales calles de la ciudad expresando su repudio a la violencia y a la impunidad. La manifestación ciudadana es en rechazo a las amenazas de muerte que el intendente municipal, Óscar Robledo Ruiz Díaz, habría proferido contra Elvio Báez Blanco, un lugareño. Por su parte, el intendente de la comuna niega tal acusación en declaraciones ante el fiscal y señala que la denuncia tiene un trasfondo político debido a que Báez fue su oponente en las pasadas internas de la ANR.

Funcionarios de instituciones educativas y de salud de la ciudad de Encarnación, Itapúa, llevan adelante una huelga en reclamo a la falta de pago de sus salarios en el marco de un convenio entre la EBY y los ministerios de salud y educación. En el primero son 280 los funcionarios perjudicados y en el sector de la educación son más de cuatrocientos. “Lastimosamente estamos en estas condiciones. Las autoridades de la EBY no cumplieron hasta el momento con el pago de nuestros salarios. Cada vez que nos reunimos nos dan una excusa diferente y que sólo falta una firma para liberar el pago. Sin embargo, venimos arrastrando desde hace varios meses atrás. Ya no podemos aguantar la situación”, destaca Raúl Cantero, dirigente de la salud. Por otro lado, Silvio Piris, presidente de la asociación de educadores, señala que no ven la predisposición de las autoridades, porque no hay avances en las negociaciones. “Ya no sabemos a quién creerle, están jugando con las necesidades de mucha gente”, manifiesta.

Miércoles 6

Un grupo de nativos del departamento de Caaguazú retorna a Asunción y acampa frente al INDI reclamando víveres que el gobierno prometió por el estado de emergencia a consecuencia de la sequía. Otras comunidades, como San Alberto, Joyvy y San Jorge, también se unen al mismo reclamo. El INDI, en cambio, considera que la Secretaría de Acción Social (SAS) es la encargada de la distribución de los alimentos. En el grupo de manifestantes se encuentran varios menores, desabrigados y descalzos, quienes soportan el frío en la intemperie.

Unos 400 sin tierras se manifiestan en la Plaza de la Paz, frente a la municipalidad, en Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná, y marchan por la avenida Bernardino Caballero hasta el Palacio de Justicia del distrito. Exigen la libertad del dirigente de los carperos de Ñacunday, Victoriano López, y la destitución del juez Penal de Garantías de Santa Rita, Cleto Quintana, quien ordenó la prisión del mismo. Eugenio Paredes, uno de los dirigentes, asegura que la prisión de Victoriano López es una “injusticia” y que “las tierras en Paraguay están en manos de los ricos y no de los pobres”. Los manifestantes portan carteles que indican que Quintana recibió dinero para mantener en la cárcel al líder de los carperos de Ñacunday. Acusan que el dinero fue entregado por los abogados del empresario sojero Tranquilo Favero. El juez Quintana, por su parte, señala que la causa en la que está procesado López está configurada como delito, con una expectativa de pena de hasta cinco años de cárcel o multa.

Docentes, empleados de la salud pública y carriteros copan los accesos a las oficinas de la EBY en el barrio Buena Vista de Encarnación, Itapúa, en protesta por el retraso en el cobro de sus salarios en el marco del convenio con aquella. Igualmente participan de la protesta empleados de comercios de la desaparecida “Zona Baja”, quienes exigen resarcimientos por haber sido despedidos de sus lugares de trabajo. Los trabajadores de los carritos exigen que se los reconozca como afectados. En cambio, los técnicos señalan que no son considerados afectados por la entidad ya que, si bien desaparecieron la Zona Baja y el antiguo mercado municipal –Placita–, hay uno nuevo donde pueden continuar realizando su actividad. El director paraguayo de la EBY, Enrique Cáceres, explica que el atraso en el pago de los salarios es por la demora de la transferencia de fondos por parte de la administración financiera, en manos de argentinos.

Jueves 7

Un inmueble de 4 mil hectáreas en la localidad de Puerto Esperanza, Alto Paraguay, es ocupado por campesinos sin tierras. La denuncia es presentada por parte del gobernador de Presidente Hayes, Oscar Nuñez Giménez, el mismo quien refiere que la propiedad pertenece a Ruy Assumpcao Netto, ciudadano paraguayo, a quien el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) adjudicó la propiedad. Por su parte, los ocupantes alegan que la propiedad pertenece al señor Nardi Gómez, diputado nacional. El abogado del gobernador advierte que unas 90 mil hectáreas de esta zona estarían en la misma situación y que la denuncia es por asociación criminal e invasión de inmueble.

Unos 233 indígenas instalados frente al INDI en Asunción retornan a sus comunidades en el departamento de Caaguazú con alimentos y carpas para nativos sin tierra. El líder Arnaldo Domínguez señala que hacía una semana dejaron sus comunidades porque hay mucha carencia, además de la escasez de alimentos. Los nativos afirman que llegaron a un acuerdo con el INDI sólo

porque los niños y niñas están enfermando por el frío, pero que en las comunidades indígenas de Caaguazú hay mucho por hacer y que volverán.

Viernes 8

Aproximadamente 5 mil cooperativistas se manifiestan frente a la sede de la Municipalidad de Fernando de la Mora, Central, para rechazar el cobro a la Cooperativa “Medalla Milagrosa” por varios impuestos. La entidad solidaria alega que la exigencia de pago de impuestos referentes a los conceptos de patente comercial y construcción no corresponde a las cooperativas, que están amparadas por la ley de exención –exoneración de impuestos–. Acompañan la movilización gremios cooperativos como la Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (FECOMULP) y la Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOOP), así como dirigentes de unas 300 cooperativas que brindan su apoyo a la entidad afectada. La representante de CONPACOOOP, Myrian Báez, señala que se mantendrán al lado de las cooperativas afectadas hasta que las autoridades municipales terminen de entender que los impuestos que pretenden imponer son absurdos y desistan definitivamente de tan descabellada intención.

Con petardos, banderas y pancartas con la consigna “No somos planilleros”, alrededor de 2 mil funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se manifiestan frente a la sede en Asunción. Los funcionarios se manifiestan para repudiar la generalización de la palabra “planillero” –funcionarios que solo figuran en la planilla de personal sin trabajar– con la que se los identifica. Mauricio Tulio, secretario general del Sindicato de Funcionarios de la Justicia Electoral (SINFUNJE), señala que “el objetivo principal es la defensa de la institución y la dignificación de los funcionarios permanentes y contratados. Sin embargo, se ha generalizado y nos han metido a todos en una misma bolsa, diciendo que todos somos planilleros. Con esta protesta, pacífica, lo que buscamos es que la ciudadanía en general nos respete como personas trabajadoras”, señala Tulio.

Domingo 10

Funcionarios de la EBY agrupados en seis sindicatos se movilizan frente a las oficinas de la entidad paraguayo-argentina en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones. Exigen un aumento salarial igual al otorgado a sus pares argentinos de la EBY. Los sindicalistas alegan poder probar el trato discriminatorio tras una nota entregada a la oficina administrativa de la entidad, en la que se compara la variación salarial en el ejercicio de 2011 respecto al de 2010, tanto para la margen izquierda como para la derecha. Los seis gremios sindicales exigen un aumento salarial del 22%, como el que la EBY otorgó a los funcionarios argentinos.

Intendentes, diputados nacionales y productores agropecuarios cierran en forma simbólica el tramo que une Ypehû con la Ruta X “Las Residentas”, en Curuguaty, departamento de Canindeyú. Exigen la pavimentación de la carretera, que beneficiaría a más de 90 mil habitantes de los distritos de Itanará, Ypehû, Curuguaty y Villa Ygatimí. La Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú (APADEC), de la localidad de Villa Ygatimi, aglutina a empresarios e intendentes de varias localidades para impulsar el proyecto de asfaltado del tramo que une a las localidades de Ypehû y Curuguaty. El empresario Agustín Pío Ramírez, presidente de APADEC y principal impulsor de la iniciativa, señala que la falta de ruta es la principal causa del estancamiento del progreso de la región. Así también, los intendentes y la gobernadora de Canindeyú, piden concertar

una audiencia con el mandatario Fernando Lugo y con el ministro de Hacienda. Por su parte, los diputados departamentales Herminio Dávalos (ANR) y Andrés Giménez (PLRA) prometen canalizar ante el poder ejecutivo el pedido de los diversos sectores de la región.

Campesinos sin tierra ocupan una propiedad de 400 hectáreas perteneciente al empresario Raúl Hiram Giralda Diez en la colonia Zanja Pytã, distrito de Maciel, departamento de Caazapá. El propietario denuncia que los ocupantes no permiten llevar adelante los trabajos, en el marco del desarrollo de un proyecto de reforestación en beneficio de la comunidad y que a su vez generará fuentes de empleos. Los pobladores –en su mayoría pequeños y medianos ganaderos– no quieren que la finca sea alambrada, amenazan que nadie podrá trabajar en la propiedad e instan a los dueños a presentar una carta oferta al INDERT a fin de que compre la tierra para los campesinos.

Unos 300 sin tierras que integran la Comisión Vecinal “San Cayetano”, integrantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), ocupan un inmueble de mil 400 hectáreas propiedad de Inmobiliaria del Este, en la compañía Pindoty, de Tobatí, departamento de Cordillera. El inmueble está arrendado por el ganadero Juan Méndez, quien cuenta con unas mil cabezas de ganado en la propiedad. Eloy Franco, asesor jurídico de la inmobiliaria, señala que el inmueble posee título de propiedad e incluso que ya se realizó una mensura judicial del mismo. Por su parte, el abogado de los ocupantes, Julio César Alarcón, afirma que no es una invasión sino una posesión anticipada. Agrega que el inmueble pertenece al Estado, producto de una permuta realizada en años anteriores pero que nunca se inscribió en los registros públicos. Por su lado, el dirigente de los sin tierra, Nelson Martínez, asegura que en el sitio hay unas 7 mil hectáreas reclamadas por la organización campesina. Agrega que tienen expedientes abiertos en el INDERT y en la Procuraduría General del Estado, pero que decidieron tomar posesión por considerar que es una tierra que les pertenece.

Lunes 11

Un grupo de ciudadanos, entre jóvenes y adultos mayores de la ciudad de Encarnación, Itapúa, realizan una marcha de protesta recorriendo las casas particulares de los diputados y senadores en la mencionada ciudad. Mediante una nota, los manifestantes solicitan a los mismos que apoyen el desbloqueo de las listas de candidatos a cargos públicos.

Martes 12

Unos 50 jóvenes de la parroquia San José Obrero, de Asunción, marchan hasta el Congreso Nacional portando carteles que llaman a la paz social y exigen la libertad de elegir a autoridades que verdaderamente trabajen por el pueblo. Diego Encina, coordinador del evento, resalta que en forma pacífica instan a los jóvenes de las parroquias a reclamar sus derechos. Tras el breve acto y justificando el desbloqueo de las listas cerradas, los manifestantes se retiran pacíficamente.

Unas 10 mil personas marchan pacíficamente en el microcentro de Capiatá, Central, en conmemoración a la Paz del Chaco, y a su vez instan a la población a dejar la apatía y manifestarse contra las diversas irregularidades que se dan en la administración pública local. Los ciudadanos hacen paradas frente al hospital distrital, la junta de saneamiento, la junta municipal y la municipalidad, donde gritan “fuera la corrupción”. Cuestionan que tanto el intendente como los

concejales no se hacen presentes en la protesta ni dan explicaciones sobre los fondos desviados y desafían a las autoridades a que justifiquen sus actos en una audiencia pública. Entre los muchos reclamos, los dirigentes mencionan el desvío de unos 3 mil millones de guaraníes de *royalties*, que en lugar de invertir en obras fueron utilizados para pagar sueldos. Por su parte, el intendente de la comuna, Antonio Galeano (ANR), señala que “ese dinero ya fue devuelto a la cuenta royalties y que solo fue utilizado como un «crédito interno»”.

Unos cien integrantes de la Liga Nacional de Carperos (LNC), liderada por Eulalio López y José Rodríguez, se instalan frente a la propiedad de 22 mil hectáreas pertenecientes a Ulisses Rodrigues Texeira, ubicada en la colonia Yaguareté Forest, de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. Los carperos exigen al gobierno la compra de unas 10 mil hectáreas de la mencionada propiedad. Los carperos emplazan por 15 días al gobierno para que compre las tierras; de lo contrario amenazan con sumar entre mil 500 y 2 mil personas para presionar la compra de parte de la estancia Paso Kurusu, cuyo dueño, Ulisses Texeira, afirma que no está en venta.

Miércoles 13

Carperos de Ñacunday sitian el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, Alto Paraná, exigiendo la libertad del líder de los sin tierras Victoriano López, recluido en la cárcel regional. Los carperos inician una marcha desde la Plaza de la Paz hasta la sede judicial y al momento en que los funcionarios debían retirarse del lugar de trabajo, como medida de presión, rodean el edificio impidiendo la salida de los mismos. Finalmente permiten el paso para la salida de los funcionarios del local y vuelven al campamento que montan en la plaza, mientras aguardan la liberación de su líder.

Alrededor de 50 funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE), protestan frente a la oficina del titular de la empresa estatal, ingeniero Alex Duré. El motivo de la movilización es la desconstrucción de 11 funcionarios trabajadores del ente, que según el secretario general del gremio, José Pineda, se debe a causa del voto a favor de la aprobación del balance del sindicato en la última asamblea, pese a las instrucciones de votar en contra por parte de integrantes del Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS). Pineda explica que los funcionarios tienen firmado un contrato de trabajo y que un mes antes del fenecimiento el ingeniero Duré les envió una nota avisando la desconstrucción de los mismos.

Unos 200 integrantes de varios asentamientos de la Federación Nacional Campesina (FNC) marchan desde la Plaza de Armas de Asunción hasta el INDERT. Los campesinos piden avances en la reforma agraria, denuncian que son abandonados por el gobierno y que la mayoría de las localidades continúan sin los servicios básicos de agua, luz, acceso a la educación y puestos de salud y sin apoyo para la producción. El secretario general adjunto, Marcial Gómez, se queja del incumplimiento de los compromisos por parte del gobierno de proveer estos servicios básicos para las colonias campesinas. Alega que los asentamientos fueron conquistados gracias a la lucha por la reforma agraria realizada por la FNC. Por su parte, el interventor del INDERT, Emilio Camacho, da a conocer a los dirigentes de la FNC su compromiso de elaborar y entregar a la organización un informe referente al cumplimiento de las demandas de regularización de tierras y arraigo detectadas en los asentamientos, a través de un relevamiento de datos a cargo de representantes de las instituciones que integran la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA).

Una delegación de 50 personas, entre alumnos, padres y docentes de General Resquín, San Pedro, llega hasta Asunción para reclamar los rubros asignados a cinco escuelas de la zona en años anteriores, los cuales nunca se hicieron efectivos. Ángel Lezcano, presidente de la asociación cooperadora de padres de una de las escuelas, indica que fueron asignados rubros para las horas cátedras correspondientes al octavo grado de la institución, y que sin embargo éstos nunca llegaron. Situaciones similares se dan en escuelas de la zona como María Auxiliadora, San Ramón y Pablo Ibáñez. Por su parte, la viceministra de Educación, Cynthia Brizuela, menciona que es posible reponer los rubros y organizar la apertura y clausura de algunas secciones de plurigrado, porque no son muchos los rubros, expresa. Gabriel Espínola, de la OTEP, señala que el sistema de control del MEC es deficiente, ya que entrega los rubros pero no puede determinar dónde van a parar.

Una decena de jóvenes estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) acampa en la Plaza de la Democracia de la ciudad como medida de protesta ante un proyecto de ley que promueve la privatización de la educación superior. Un grupo de funcionarios municipales encabezado por el abogado Aldo Alvarenga intenta desalojarlos sin éxito alguno. Alvarenga alega que en una plaza se pueden manifestar, pero no quedarse a dormir allí, versión desmentida por el estudiante Prabhat Pacuá, quien explica que se encuentran protestando contra el citado proyecto de ley y que utilizan el sitio para llegar a más personas con su mensaje crítico.

Activistas de Amnistía Internacional (AI) - Paraguay se manifiestan frente a la sede diplomática de Alemania en Asunción para abogar por un tratado internacional sobre comercio de armas que contemple normas firmes para salvar vidas y proteger los derechos humanos. El objetivo es que los gobiernos, cuyas sedes visitan, voten en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Por otra parte, AI busca concienciar a la población sobre los peligros que puede conllevar la tenencia o portación de armas por parte de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo para los niños y niñas.

Cinco pobladores de la ciudad de San Lorenzo, Central, inician una huelga de hambre frente al parlamento en Asunción. Reclaman que los diputados aprueben la intervención de la comuna, bajo la administración del intendente Albino Ferrer y sus colaboradores, a quienes acusan de una mala gestión que data de al menos cuatro años consecutivos. La solicitud de intervención fue solicitada hace un año por la Contraloría General de la República (CGR) y según informes de la última auditoría presupuestal practicada a la municipalidad en el 2008 se hallan reunidos los requisitos legales para proceder a la intervención, en atención a las graves irregularidades encontradas.

Jueves 14

Funcionarios de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se manifiestan frente a la institución para exigir la regularización de los pagos de horas extras, los viáticos y las gratificaciones. Además, repudian el incumplimiento del contrato colectivo y de nombramientos. El sindicalista Arturo Grande señala que las autoridades de la institución prometen que regularizarán los pagos.

Viernes 15

Un total de once campesinos sin tierra y seis policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) mueren en un enfrentamiento ocurrido en una propiedad del ex senador colorado Blas N. Riquelme. El inmueble se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú. El operativo de desalojo está a cargo de un contingente de 250 efectivos del GOE, pelotones antidisturbios y personal de orden público. La comitiva es acompañada por los fiscales Diosnel Giménez y Ninfa Aguilar, quienes tienen en su poder una orden de allanamiento firmada por el juez penal de garantías de Curuguaty, José Benítez. Luego de treinta minutos de consecutivos enfrentamientos, los campesinos sobrevivientes huyen hacia el fondo de la propiedad y se pierden en medio del monte. Después de trascender el hecho, la cúpula policial ordena reforzar el operativo con personal de las jefaturas aledañas y de Asunción.

Más de 50 personas integradas por jóvenes de la ANR y el PLRA e integrantes de la Comisión Familia Policía se concentran frente al Congreso, en Asunción, exigiendo que el presidente Fernando Lugo sea sometido a juicio político por la tragedia de Curuguaty. Los manifestantes advierten que la movilización no se detendrá con la salida del ex ministro del interior, Carlos Filizzola. La Plaza de Armas es acordonada y cada manifestante debe presentar su cédula para ingresar.

Simpatizantes del movimiento Frente Autónomo por un Centro Unido (FACU), quien pugna para las elecciones de representantes estudiantiles en la facultad de Derecho de la UNA, cierran la avenida Santísima Trinidad, de Asunción. Los mismos reclaman la realización de las elecciones estudiantiles. Dichas elecciones fueron suspendidas debido al recurso de amparo presentado por el Frente Universitario, otro de los movimientos que participa de dichas elecciones, que alega vicios en el proceso electoral. El FACU insiste en que las elecciones sean realizadas y que luego se acatara el resultado. Sin embargo, el vicedecano Raúl Torres Kirmser indica que el proceso no se podría realizar sin una orden judicial.

Un grupo de docentes se moviliza frente al MEC para exigir la confirmación en sus cargos de los educadores interinos, que por la resolución ministerial N° 205 fueron nombrados entre 2001 y 2007. El dirigente de la OTEP, Vidal Ortega, refiere que las autoridades educativas no encuentran asidero legal para la vigencia de la referida resolución, por lo que buscan llamar a todos los cargos a concurso. La OTEP alega que los docentes ya tienen el derecho adquirido de permanecer en sus cargos, por lo que exigen al MEC la confirmación automática, ya sea validando la resolución 205 o por otra vía.

Estudiantes en su mayoría de la Facultad de Filosofía de la UNA desocupan la Plaza de la Democracia, en Asunción. Los mismos se instalaron el miércoles 13 en dicha plaza en reclamo contra un proyecto de ley de educación superior que pretendía la privatización de la educación universitaria. El estudiante de Letras Parabhat Pacuá indica que llegaron a esta determinación por los hechos de violencia desatados en el país. La desocupación del lugar surge horas antes de que funcionarios de la Municipalidad de Asunción se acercaran hasta la plaza con una orden judicial para realizar el desalojo.

Sábado 16

Con una marcha, unas cien mujeres culminan el encuentro de mujeres denominado “Carpa, Lucha y Resistencia de las Mujeres”, organizado por el Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ-PY), en el marco de la Semana Mundial de Acción contra la Violencia. Dicho encuentro se realiza en la plaza José de Antequera y Castro de la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción. Las integrantes de la Asociación de Mujeres Campesinas Norteñas denuncian la violencia doméstica que sufren las mujeres de Concepción y califican de ineficiente a la justicia por no responder a sus denuncias. Así también exigen el reconocimiento de sus derechos en el campo de la salud, la educación, la vivienda y la tierra, parte de los reclamos que hacen eco durante la marcha.

Lunes 18

Un grupo de pescadores agremiados de la zona de Itapytãpunta, de Asunción, se manifiestan en reclamo del cierre del portón de acceso para pescar en el río Paraguay. El presidente de la asociación de pescadores de lugar, Nicolás Agüero, señala que funcionarios de la empresa Cereales S.A. cierran con candados el único portón para ingresar al cauce hídrico. Los afectados denuncian, además, la orden para la construcción de un muro para cerrar definitivamente el acceso, que, según los mismos, se encuentra en un terreno que pertenece a la Municipalidad de Asunción. “Estamos en veda permanente; desde el 2005 tenemos problemas con esta empresa por el acceso a las aguas”, indica Agüero. Ceferina Ramírez, vendedora de pescados de la zona explica que la medida afecta directamente a unas 25 familias que viven todos los meses gracias a la actividad pesquera.

Martes 19

Un total de cinco funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) son despojados de sus cargos y puestos en los pasillos del MAG por supuesta persecución política y sindical por parte del ministro Enzo Cardozo. Los mismos denuncian la violación de la estabilidad laboral sindical ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

Un centenar de miembros de la organización denominada “Che kueráima indignados Paraguay” se manifiesta frente a Mburuvicha Róga –Casa del mandatario– para reclamar el veto del presidente Fernando Lugo a la postergación de la vigencia del desbloqueo de las listas sábana. “Queremos que el presidente Lugo haga uso de su veto para oponerse a la postergación de la ley que desbloquea las listas sábana”, expresa Leonardo Maioli, uno de los integrantes de la agrupación.

Unas 300 personas ocupan una propiedad individualizada como Finca N° 582, de 13 hectáreas, perteneciente a la empresa Inmobiliaria del Este, ubicada en el kilómetro 5,5 de la ciudad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná. El fiscal Humberto Rossetti intima a los ocupantes para que en un plazo de 24 horas abandonen el predio, bajo la amenaza de ser desalojados a la fuerza. Los ocupantes del inmueble alegan que las tierras estaban ociosas y servían de vertedero de basuras y aguantadero de delincuentes. Manifiestan, además, que abandonarán el inmueble únicamente con la exhibición del título de propiedad.

Miércoles 20

Jóvenes autoconvocados mediante las redes sociales realizan una marcha por la paz por las calles de la ciudad de Asunción. “La paz es el mejor camino para el país”, señala Nicolás Velarde, coordinador de la agrupación juvenil.

Jueves 21

Unos cien integrantes de organizaciones sociales y políticas se mantienen en vigilia en apoyo al presidente de la República, Fernando Lugo. La concentración se lleva a cabo en la plaza La Paz, frente a la Municipalidad de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Entre los manifestantes se encuentran el ex sacerdote Nilo Mármol, titular regional de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, y varios otros funcionarios públicos. Los manifestantes reiteran que los diputados y senadores “no tienen autoridad moral para enjuiciar a Fernando Lugo”.

Simpatizantes de Fernando Lugo se concentran en la Plaza de Armas de Asunción exigiendo la disolución del Congreso y la continuidad del gobierno de Lugo hasta 2013. Acusan al poder legislativo de disfrazar un golpe de Estado y anuncian la llegada de miles de campesinos más. Varios dirigentes hacen uso de la palabra defendiendo a Lugo, fustigando a los parlamentarios y profiriendo duras críticas a los medios de prensa. Las calles de las inmediaciones del Parlamento son bloqueadas y casi todos los comercios del microcentro cerrados, por temor a un estallido civil.

Grupos de ciudadanos a favor y en contra del juicio político al presidente de la República, Fernando Lugo, se congregan en la Plaza de Armas, frente al congreso en la ciudad de Asunción. En medio de un fuerte operativo policial se producen discusiones y ataques verbales entre referentes de ambos bandos. Durante el proceso de debate del juicio político en el Senado, aparecen numerosas pancartas entre los manifestantes, tanto de rechazo como a favor del juicio. Un pequeño grupo de simpatizantes del PLRA, con sus carteles, exige la renuncia de Lugo, mientras que en el otro sector los reclamos se dirigen contra el parlamento.

Unos 2 mil campesinos de distintos puntos de Canindeyú se manifiestan pacíficamente en los linderos de la propiedad de Campos Morombí, en la localidad de Curuguaty, Canindeyú. Reclaman justicia y paz tras la masacre ocurrida el pasado 15 de junio en el sitio. Representantes de distintos partidos políticos hablan a los presentes y aclaran que se mantendrán al margen de la crisis desatada en Asunción en relación al juicio político iniciado contra Lugo. Señalan que solo reclaman seguridad, justicia y paz en Canindeyú.

Viernes 22

Unos mil campesinos de la localidad de Pirapey, distrito de Edelira, Itapúa, y de diversos puntos del norte y el noreste del departamento, cierran dos puntos de la Ruta VI “Dr. Juan León Mallorquín”. Los manifestantes cuestionan a los parlamentarios y sostienen que son ellos quienes deberían irse a sus casas, porque no representan dignamente al pueblo. “Estamos coordinando acciones con otros grupos que están en las rutas para ver qué medidas tomar”, sostiene Lisandro Benítez, uno de los dirigentes del grupo. Los líderes expresan, además, la posibilidad de reunir a más personas para movilizarse en los mismos tramos.

Unas mil 200 personas de la localidad de Horqueta, Concepción, bloquean la Ruta V “Gral. Bernardino Caballero” en las localidades Arroyito y en Alfonso Cue. Paralelamente, unos 500 pobladores realizan otro corte de la vía en protesta por la destitución del ex mandatario Fernando Lugo, vía juicio político. Los mismos califican de injusta a la decisión de los diputados y senadores e indican que Lugo nada tiene que ver con la matanza de Curuguaty. Expresan además que los partidos políticos tradicionales, como la ANR y el PLRA, perdieron toda credibilidad al no responder a las necesidades del pueblo. Marciano Jara, dirigente campesino de Arroyito, señala que con la movilización del pueblo se evidencia que un gran sector ya no es ignorante cívica y políticamente, además de que ya no serán fácilmente engañados por los dirigentes de los partidos tradicionales. Alega que como presidente de la República Federico Franco implementará una política a favor de los más ricos sin escuchar al pueblo.

Jóvenes integrantes del grupo Chekuerái –Estoy harto– se manifiestan frente a la sede de la Vicepresidencia de la República, en Asunción, en contra del vicepresidente Federico Franco. Con carteles y cánticos, califican a los liberales –PLRA– de “vende patrias”, de “traidores” y “usurpadores”. Critican el apoyo que los mismos dieron al juicio político contra el ex presidente Fernando Lugo. Tras forcejeos, empujones, golpes y hasta disparos intimidatorios al aire entre manifestantes y cascos azules, el vicepresidente Federico Franco hace evacuar el lugar ante la posibilidad de la llegada de más manifestantes y la procura de forzar la entrada al edificio.

Más de un centenar de jóvenes se congregan en la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación, Itapúa, para expresar su indignación por la destitución de Fernando Lugo de la presidencia de la República. Marcela Sanabria, una de las manifestantes, señala: “venimos aquí para expresar nuestra indignación ciudadana ante este robo a la voluntad popular cometido por los parlamentarios, que destituyeron a un presidente electo por el pueblo. Estos parlamentarios se enojaron porque Lugo les dejó sin la plata para sus operadores políticos en el TSJE”. Los jóvenes expresan su repudio a los parlamentarios y exigen juicio político para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. “Esperamos que los demás países no reconozcan a este gobierno, surgido de un golpe de Estado. No estamos de acuerdo con esta dictadura parlamentaria”, señala uno de ellos.

Manifestantes apostados frente al Congreso, en Asunción, son repelidos por policías antimotines con gases lacrimógenos y carros hidrantes minutos después de que el Senado destituyera a Fernando Lugo. Los manifestantes tumban la valla perimetral, por lo que los agentes antimotines reaccionan ante tal situación. En medio de llantos e indignación, los mismos denuncian que la policía agredió a la ciudadanía sin provocación. Tras reagruparse luego del incidente con los antimotines, los manifestantes amenazan con huelgas nacionales y la paralización del país hasta que Lugo retorne al poder. Llamam a la desobediencia civil y a no reconocer al gobierno “de la derecha”, por no ser elegido por el pueblo, señalan los mismos. Los senadores Sixto Pereira y Carlos Filizzola afirman que la destitución es sólo una turbulencia en el camino y que Lugo fue destituido por luchar contra la corrupción y el narcotráfico.

Sábado 23

Numerosas personas, adherentes del partido político P-MAS, funcionarios de la emisora televisiva *TV Pública* y otros seguidores se manifiestan frente al local de la emisora para exigir que no haya censura en el medio de comunicación y en rechazo del juicio político. Se hace presente en el lugar el ex presidente de la República, Fernando Lugo, quien en uso de la palabra califica a su destitución

como un “veredicto injusto del Parlamento”. “Nunca más violencia. Este pueblo es un pueblo pacífico”, añade Lugo. Se suma en el sitio el periodista José Luis Simón, quien expresa a los manifestantes que están engañados, que con el gobierno de Lugo tampoco existió libertad de expresión. Esto motiva la reacción de los seguidores del ex mandatario, quienes luego de varios intentos finalmente lo sacan del sitio.

Unos 350 jóvenes simpatizantes del ex mandatario Fernando Lugo se manifiestan frente al local de la emisora televisiva *TV Pública*, indignados por el ataque realizado por el asesor de prensa del presidente Federico Franco, Christian Vázquez, al su local, ordenando que se levante el programa denominado Micrófono Abierto. Tras esta manifestación, el nuevo administrador de la *TV Pública*, Fernando Pffannel, ordena se abra el micrófono en la vereda del canal de manera que los manifestantes puedan expresarse y salir al aire. La crítica principal por parte de los manifestantes es la decisión del congreso de destituir al ex presidente Fernando Lugo, vía juicio político, a lo que denominan un golpe de Estado parlamentario. Por su parte, Vázquez expresa que no atropelló el canal y que sólo llega hasta allí para coordinar los trabajos. Sostiene que esta situación se da debido al momento que se estaba viviendo, atendiendo a que los funcionarios de la *TV Pública* no esperaban el cambio de gobierno.

Domingo 24

Unas 80 personas ingresan en una propiedad de mil 982 hectáreas en la zona de Capi'ibary, departamento de San Pedro. La ocupación del inmueble provoca la reacción de los agentes de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural (APER). Los ocupantes exigen la compra de la finca por parte del INDERT y su entrega a las familias campesinas. Luego de la intervención policial, los campesinos se instalan en el lindero de la finca y anuncian que en cualquier momento regresarán al lugar con el objetivo de forzar a los responsables del INDERT la adquisición de dicha parcela. No se registran detenidos durante el procedimiento debido a que los intervinientes no estaban en condiciones para la detención de los ocupantes.

Unas 25 personas, integrantes de la Contraloría Ciudadana de Luque, Central, se movilizan a favor del destituido presidente Fernando Lugo. Los mismos indican que se está realizando una persecución a las personas que están en contra del gobierno de “facto” de Federico Franco (PLRA). Culpan a los medios de comunicación privados de manipular la información minimizando el quiebre institucional que existe en el país.

Lunes 25

Vecinos del barrio San Roque González de Santa Cruz, de la ciudad de Lambaré, Central, se reúnen frente a la casa particular de Edgar Benítez, víctima de robo domiciliario, situación por la cual se decide movilizar a los pobladores de la zona en vista de que ya están cansados de resultar permanentemente víctimas de los delincuentes. Durante la concentración trazan estrategias para combatir la inseguridad en el lugar y dan a conocer las posibles soluciones a ser aplicadas. Todos coinciden en que el excesivo consumo de drogas favorece la criminalidad.

Sectores que simpatizan con el ex presidente Lugo inician una manifestación denominada “Resistencia Ciudadana por la Democracia” en la plaza de Los Héroes de la ciudad de Pilar,

departamento de Ñeembucú. Los manifestantes califican de gobernante de facto a Federico Franco y de golpistas a los parlamentarios. Aseguran que continuarán con esta protesta pacífica hasta que sea repuesto el destituido Fernando Lugo. En señal de duelo por lo que consideran la ruptura de la democracia en el Paraguay, encienden velas, y las pancartas que portan fustigan a los parlamentarios y piden no censurar a los medios públicos.

Gran cantidad de personas, entre ellos jóvenes, adultos y niños, se congregan frente a la *TV Pública*, en Asunción, haciendo uso del micrófono abierto. Los mismos expresan su oposición al nuevo gobierno de Federico Franco. En el lugar se realizan festivales con la participación de reconocidos artistas locales, además de las personas que participan a través del micrófono abierto. La ciudadanía en oposición al nuevo gobierno toma la *TV Pública* como un espacio de resistencia pacífica, para defender el derecho a la comunicación como herramienta de denuncia, según manifiestan.

Unas 200 personas se concentran frente al Congreso Nacional, en Asunción, autoconvocadas por el grupo Paraguay Soberano, de la red social *Facebook*. Los manifestantes defienden la autonomía del país ante la amenaza del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) de bloquear diplomáticamente al Paraguay por la destitución, vía juicio político, del ex presidente Fernando Lugo. Manifiestan que la postura de los gobiernos vecinos constituye una injerencia inaceptable y que los parlamentarios paraguayos tienen no solamente el deber sino la obligación de actuar en consecuencia y de enjuiciar políticamente al presidente que se extralimite en sus funciones, como dicen que fue el caso de Lugo. Señalan además que no permitirán que otros países atropellen la soberanía paraguaya y tildan de oportunistas a Cristina Fernández, Hugo Chávez, Evo Morales y otros líderes de la región.

Continúa la manifestación de un grupo de simpatizantes de Fernando Lugo frente al local de la Televisión Pública, en Asunción. La mayoría de los presentes son funcionarios de la *TV Pública*, que aparentemente serían descontratados. Pese a que ya se trata de un día laboral, los mismos siguen apostados en reclamo por la destitución de Fernando Lugo de la presidencia. La cantidad de manifestantes disminuyó considerablemente en comparación con los días anteriores y los reclamos se hacen a través de un micrófono abierto, en donde las personas pueden presentar sus inquietudes.

Martes 26

Un grupo de 15 funcionarios de la SAS de la ciudad de Fernando de la Mora, Central, se manifiesta dentro del local contra el “golpe de Estado”. Afirman llevar adelante esta resistencia pacífica, al igual que los demás ciudadanos en todo el país, y estar vigilantes a que las nuevas autoridades den cumplimiento a los programas sociales, a la ampliación de los logros sociales y a la participación popular en las decisiones que se tomen en las SAS, así como al respeto de los derechos laborales, y que no permitirán persecuciones ni descontrataciones. Por su parte, Víctor Rivarola, nuevo ministro de la SAS, alega que la línea planteada por estos funcionarios es política y que llama a la desobediencia. “Eso en esta institución no vamos a admitir porque en la medida en que se boicotea el trabajo a la SAS, se boicotea a los pobres. Nosotros estamos para garantizar el trabajo y el que no está de acuerdo se va. No va a haber persecuciones ni revanchismos”, afirma.

Pobladores del asentamiento campesino 11 de Mayo, del distrito en San Juan Nepomuceno, Caazapá, deciden combatir el tráfico ilegal de madera que pasa por la comunidad. Instalan un piquete en uno de los caminos de acceso a la aldea indígena Takuaro para impedir la salida de

camiones transportadores de la zona. Dentro de la comunidad existen evidencias de que los depredadores trabajan intensamente extrayendo rollos de madera y aserrando directamente en el lugar. Carlos Raúl López, propietario de uno de los camiones retenidos por los labriegos y la comitiva fiscal policial, niega la acusación en su contra y afirma que él todavía no cargó la madera en el momento de la intervención de los campesinos. Señala que él es sólo comprador y que los rolleros pululan en la comunidad. Los campesinos alegan que los depredadores utilizan a la comunidad indígena para traficar rollos del Parque Nacional “San Rafael”.

Unos 50 padres de familia del barrio Ka’aguy Kupe, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, Central, cierran las puertas de la Escuela Básica N° 2378 “Félix Ruiz” de esta urbe. Exigen al MEC la reposición de ciertos rubros de la institución, que según los manifestantes quedaron sin ellos en las asignaturas del séptimo y octavo grados, debido que se nombró a la docente Estela Maris González como supervisora pedagógica en la zona de Areguá con los mismos recursos que había antes. La directora de la institución, Mirian Cáceres de Valenzuela, expresa que nunca recibió una notificación oficial del MEC referente al nombramiento. Finalmente, los padres deciden habilitar la entrada a la escuela tras una tregua con los representantes de la asesoría jurídica del MEC, quienes acudieron hasta el lugar y prometieron la reposición de los rubros en un plazo de 72 horas.

Un grupo de 50 personas, convocado por la Coordinadora de Grupos Ciudadanos en las Redes Sociales del Paraguay, se manifiestan frente al parlamento, en Asunción, para presionar por el tratamiento de un nuevo proyecto para desbloquear las listas para cargos legislativos en las elecciones. Además se pronuncian en contra del adelantamiento de las internas partidarias. La coordinadora aglutina a grupos como la Asociación “Fuera Lista Cerrada del Paraguay”, Basta Ya, Debamos Paraguay, After Office Revolucionario y La Gran Marcha, entre otros. Néstor Núñez, de la Asociación Fuera Lista Sábana, indica que cada grupo tiene sus reivindicaciones pero actualmente se concentran en luchar contra el desbloqueo de listas sábana. Entre los oradores del grupo se habla de cómo la gran masa original que lucha contra las listas sábana quedó dividida tras el juicio político. El nuevo proyecto de desbloqueo está en la cámara de diputados y esperan que en la siguiente sesión se trate sobre tablas, así como la postergación está en manos del poder ejecutivo. “Están logrando dividirnos”, es el comentario generalizado de los manifestantes.

Representantes de partidos políticos y organizaciones sociales en Ciudad del Este, Alto Paraná, y en varias localidades del interior del país, como Caaguazú, Guairá, Concepción, Misiones e Itapúa, se movilizan en rechazo al juicio político al ex presidente Lugo. Los manifestantes piden la restitución del mismo a la presidencia de la República del Paraguay. Con marchas, pintatas y cierres de rutas, los manifestantes expresan su repudio al nuevo gobierno de Federico Franco y claman por la vuelta de Lugo a la presidencia.

Miércoles 27

Unos 50 nativos se instalan frente al local del INDI en Asunción. Los mismos vigilan en la puerta del local para impedir la salida y entrada de personas, especialmente de otros nativos con los cuales el presidente del INDI, Oscar Ayala, trabaja en el delineamiento de los trabajos en las comunidades. El ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone, rescata a Ayala, a quien un grupo de nativos pide su renuncia. El funcionario y algunos de sus colaboradores, no podían abandonar el ente debido a la protesta de los indígenas. Por su parte, Óscar Ayala anuncia que no renunciará al cargo porque está trabajando con los indígenas en el aseguramiento de tierras. Apunta además que están

agilizando 15 expedientes y que actúa en la informatización de todos los documentos en un banco de datos. Sobre la protesta, señala que los mismos responden a un grupo que no representa a la mayoría.

Unas dos mil personas se manifiestan en el centro de Ciudad del Este, Alto Paraná, en repudio a la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia de la República. Con gritos de “Viva Cuba”, “Prensa vendida”, “Franco golpista”, “Dipuchorros”, entre otros epítetos, los manifestantes marchan por el microcentro hasta llegar a la Aduana de Ciudad del Este, bloqueando una de las vías de la Ruta VII. Posteriormente, se dirigen para acceder al puente de la Amistad, que une Paraguay con Brasil, pero son impedidos por los agentes antimotines. Los manifestantes califican de golpista al actual presidente Federico Franco y señalan que la destitución de Fernando Lugo obedece a una maniobra de los Estados Unidos para posicionarse en el continente sudamericano contra Venezuela.

Familiares de los campesinos abatidos en el enfrentamiento con policías en Curuguaty, Canindeyú, respaldados por pobladores de la zona, peregrinan con una cruz de madera desde la Ruta X “Las Residentas” hasta el sitio de la matanza dentro del inmueble en posesión de la firma Campos Morombí. El evento se realiza en memoria de los once campesinos y seis policías muertos en el enfrentamiento. El padre Antonino González preside un acto litúrgico en el lugar. Los peregrinantes también solicitan la liberación de los 12 labriegos detenidos y el levantamiento de las órdenes de captura de otros cincuenta campesinos.

Unas cien personas se instalan en las inmediaciones del Primer Cuerpo del Ejército de Curuguaty, Canindeyú, para despotricar contra los que propiciaron la destitución de ex obispo Fernando Lugo. Seguidores de los movimientos políticos Tekojoja y del Frente Guasu repudian la “actitud golpista” de los senadores y diputados que se unieron para defenestrar al gobierno de Lugo. Entonando canciones estimulan al grupo de seguidores, entre ellos estudiantes del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA), que funciona en la colonia Santa Catalina de Curuguaty.

Jueves 28

Alrededor de 200 docentes afiliados a la OTEP Auténtica marchan por el microcentro de Asunción hasta el local del MEC y el Ministerio de Hacienda para exigir una ampliación presupuestaria al rubro de educación. Así mismo, los docentes expresan su indignación por la situación política que vive el país. Gabriel Espínola, secretario general del gremio, señala que lo ocurrido en el país fue un golpe de Estado, expresa además que le gustaría que el parlamento respondiera a los pedidos que hacen los educadores con la misma celeridad con la que decidieron sacar al presidente Fernando Lugo. Posteriormente, los docentes se reúnen con autoridades del Ministerio de Hacienda, los cuales prometen que el sueldo, el escalafón docente y la bonificación familiar se pagarán juntos.

Con cierres de rutas y marchas continúan las movilizaciones a favor del destituido presidente Fernando Lugo, en distintos puntos del país como San Pedro, Itapúa, Concepción y Caaguazú. Se registra una disminución en la concurrencia en comparación a días anteriores. Los dirigentes alegan que la falta de recursos económicos para movilizar a la gente y las trabas de transportistas para alquilar sus vehículos son los factores influyentes.

Unas 20 personas ocupan la franja de la ribera del río Paraná en la ciudad de Ayolas, Misiones, perteneciente a la EBY. Los mismos inician la ocupación ante la información de que en el lugar se

construiría una costanera. El fiscal local, Hugo Segovia, imputa a tres dirigentes del grupo de ocupantes sobre quienes pesan órdenes de detención. Segovia afirma que la EBY presentó los planos y el título de propiedad del inmueble. Los ocupantes, por su parte, argumentan que tienen la venia del INDERT para entrar, versión desmentida por la asesora jurídica, Agueda Pereira.

Más de 400 dirigentes sindicales de varias instituciones públicas se reúnen frente al Palacio de López, en Asunción, para pedir al presidente de la República, Federico Franco, garantías para la estabilidad laboral. El jefe de Estado, Federico Franco, promete a los mismos que durante su gobierno no habrá persecución a ningún trabajador, sea del partido político que fuese. Añade que necesita de la ayuda de todos los trabajadores para tener un buen mandato.

Viernes 29

Los funcionarios del Ministerio de Hacienda se manifiestan en contra de la utilización de los fondos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, también llamada Caja Fiscal. Hay temor de que vayan a parar a gastos corrientes. Los sindicatos salieron al paso del anuncio realizado por el titular de la cartera, Manuel Ferreira Brusquetti, respecto a los planes de invertir estos fondos que están depositados en el Banco Central del Paraguay (BCP). Los funcionarios nucleados en el Primer Sindicato del Ministerio de Hacienda (PRISIFUMIH), el Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Hacienda (SIFUPROMH) y la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, advierten al ministro de Hacienda y al presidente de la República, Federico Franco, que esos fondos son de los trabajadores y no del Estado. Por su parte, el ministro Ferreira Brusquetti, tras conocer los reclamos de los funcionarios, señala que esos recursos no serán utilizados para gastos corrientes y que existe una confusión al respecto. Los sindicatos también rechazan la designación de José Tomás Villarejo como titular del Servicio Nacional de Catastro y la eventual designación de Roberto Enrique como director del Tesoro, este último por tener antecedentes judiciales cuando estaba en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En ese sentido, el ministro de Hacienda explica que el nombramiento de Villarejo fue efectuado directamente por el presidente Federico Franco, porque es un profesional de reconocida trayectoria. Con respecto a Enrique, señala que no lo conocía y deja en claro que no hay ninguna resolución respecto de su nombramiento.

Funcionarios de la SNNA se manifiestan en reclamo del contrato colectivo de trabajo. Cierran media calzada de la avenida Mariscal López, de Asunción.

Los directores de los centros municipales de Asunción 7 Marangatu, del barrio Jara, y 9 Ñasaindy, de Zeballos Cue, son separados de sus cargos con un simple mensaje de texto en sus respectivos celulares, firmado por una persona llamada Cristina. La doctora Selva Turró, ahora ex directora del Centro 7, denuncia que este despido se da a partir de su adhesión a la candidatura de Horacio Cartes, contrincante de Lilian Samaniego –hermana del intendente Arnaldo Samaniego– en las internas presidenciales de la ANR previstas para el 9 de diciembre próximo. La misma es reemplazada por Blas Antonio Soloaga, quien es secretario de la Seccional Colorada N° 5 y activista de la actual presidenta de la Junta de Gobierno.

Unas 4 mil personas de organizaciones sociales, campesinas, estudiantes universitarios y de partidos de izquierda de Paraguay y Brasil cierran el tránsito sobre el Puente Internacional de la Amistad, que une a ambos países. La movilización se inicia en la zona primaria de la aduana brasileña y en la

Plaza de la Paz de Ciudad del Este, Alto Paraná. Posteriormente emprenden la marcha hacia el Puente de la Amistad y, tras un acuerdo con la Policía Federal y Militar, cierran el paso fronterizo. Los manifestantes exigen la restitución de Fernando Lugo a la presidencia de la República. Señalan que en Paraguay se produce un quiebre democrático, con el golpe de la derecha que termina con el gobierno de Lugo. Así también reiteran que desconocen a Federico Franco como presidente de la República. Luis Aguayo, dirigente de la MCNOC, manifiesta: “este acto de solidaridad de los movimientos sociales, organizado por amigos brasileños, es muy significativo para nosotros, para todos los pueblos latinoamericanos que nos sorprende en Paraguay en un momento donde nos toca vivir un fuerte retroceso y quiebre institucional”, indica Aguayo. El dirigente campesino señala que continuarán avanzando en su lucha de no reconocer al gobierno de Federico Franco, porque consideran que es un “gobierno golpista y de facto”.

Continúan las movilizaciones tanto a favor como en contra del nuevo gobierno encabezado por Federico Franco. Frente al local de la *Televisión Pública* en Asunción, un importante grupo realiza un Festival Artístico contra el Golpe. Desde el otro extremo, los adherentes del nuevo gobierno realizan una Caravana por la Soberanía en repudio también a las sanciones que el MERCOSUR y la UNASUR impusieron al Paraguay al suspenderlo de ambos bloques.

Sábado 30

Indígenas ava guaraní de la comunidad Yacy Poty, del distrito de San Estanislao, San Pedro, llegan hasta a Asunción para exigir celeridad en la compra de 1.400 hectáreas que reclaman para su asentamiento en la zona. El inmueble pertenece a Mauro Colmán, quien dice estar dispuesto a negociar la venta de su terreno al Estado. Reinaldo Vera y César Dos Santos, referentes de la comunidad, indican que hace tres años viven a la vera del camino, al costado del inmueble, y que ya quieren un territorio donde construir sus casas y cultivar la tierra. Unas 90 familias serían reubicadas en el inmueble, que según los aborígenes es apto para el cultivo y la cría de ganado. Dos Santos explica que se aproxima la temporada de cultivos y que quieren aprovechar para que puedan tener alimentos para los próximos meses.

Unos 30 jóvenes, aglutinados en el movimiento ciudadano Paraguay Soberano, en una campaña de repudio por la suspensión paraguaya del MERCOSUR por parte de los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay, se reúnen frente al Panteón de Los Héroes, en Asunción, donde reparten calcomanías e instan a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa. Dany Durand, uno de los impulsores, subraya que el Paraguay es un país soberano hace 201 años. Recalca que la campaña no obedece a cuestiones políticas ni a “acomodamientos”. La actividad se suma así a la caravana de cerca de un centenar de automóviles particulares que partió de Ñu Guasu y se moviliza frente a las embajadas de Argentina y Brasil sobre las avenidas España y Mcal. López, de Asunción.

Con show en vivo, marcha, teatro, desfiles y música se vive una maratónica parada por la igualdad lésbica, gay, trans, bi y heterosexual frente del Panteón Nacional de Los Héroes, de Asunción.

Glosario de siglas

AEP	Asociación de Educadores del Paraná
AI	Amnistía Internacional
ANDE	Administración Nacional de Electricidad
ANR	Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado
APADEC	Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú
APER	Agrupación de Protección Ecológica y Rural
BCP	Banco Central del Paraguay
CAP	Coordinadora Agrícola del Paraguay
CEPRA	Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria
CONPACOOOP	Confederación Paraguaya de Cooperativas
EBY	Entidad Binacional Yacyretá
FACU	Frente Autónomo por un Centro Unido
FECOMULP	Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay
FNC	Federación Nacional Campesina
INDERT	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
INDI	Instituto Paraguayo del Indígena
LNC	Liga Nacional de Carperos
LOMP	Liga de Obreros Marítimos del Paraguay
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
OTEP	Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay
P-MAS	Partido Movimiento al Socialismo
PLRA	Partido Liberal Radical Auténtico
PRISIFUMIH	Primer Sindicato del Ministerio de Hacienda
SAS	Secretaría de Acción Social
SERPAJ-PY	Servicio Paz y Justicia Paraguay
SIFUPROMH	Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Hacienda
SINFUNJE	Sindicato de Funcionarios de la Justicia Electoral
SITRANDE	Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad
SNNA	Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
TSJE	Tribunal Superior de Justicia Electoral
UNA	Universidad Nacional de Asunción
UNASUR	Unión de Naciones Sudamericanas

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Paraguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinación: Quintín Riquelme.

Relevamiento y sistematización: Justino Romero y Elsy Vera.

Fuentes: diarios Abc Color y Última Hora.